

LOS PARAMILITARES EN MEDELLÍN
LA DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE CACIQUE NUTIBARA. UN
ESTUDIO DE CASO

HERMMAN EDUARDO NOREÑA BETANCUR

Trabajo de grado
Presentado como requisito parcial para optar al título
de Magíster en Ciencia política

Asesor
WILLIAM RESTREPO RIAZA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
MAESTRÍA EN CIENCIA POLITICA
2007

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE GRAFICAS	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO I MODERNIZACION Y ORDEN SOCIAL EN MEDELLIN BREVE	
ESQUEMA SIGLO XX	12
CAPITULO II EL CONFLICTO URBANO Y LA CRISIS SOCIAL Y POLITICA EN MEDELLIN. 1985 - 2000	25
<u>2.2 CRISIS POLÍTICA Y ACTORES DEL CONFLICTO: Generalidades.....</u>	<u>30</u>
<u>2.2.1 Bandas y Delincuencia Común.....</u>	<u>33</u>
<u>2.2.2 Grupos Guerrilleros y Milicias.....</u>	<u>38</u>
<u>2.2.3 El Narcotráfico.....</u>	<u>47</u>
<u>2.2.4. Autodefensas y Paramilitarismo en Medellín.....</u>	<u>52</u>
<u>2.3 Bloque Cacique Nutibara (BCN).....</u>	<u>62</u>
CAPITULO III LA SEGURIDAD EN MEDELLÍN DESDE LOS PLANES DE DESARROLLO 1990-2003	67
<u>3.1 Preámbulos</u>	<u>69</u>
<u>3.2 El Plan de Desarrollo y la Seguridad: Gobierno de Omar Flórez Vélez (1991-1993).....</u>	<u>70</u>
<u>3.3 El Plan de Desarrollo y la Seguridad: Gobierno de Luis Alfredo Ramos (1993-1995).....</u>	<u>72</u>
<u>3.4 El Plan de Desarrollo y la Seguridad: gobierno de Sergio Naranjo (1995-1997).....</u>	<u>75</u>
<u>3.5 El Plan de Desarrollo y la Seguridad: Gobierno de Juan Gómez Martínez (1997-2000).....</u>	<u>79</u>
<u>3.6 El Plan de Desarrollo y la Seguridad: Gobierno de Luis Pérez Gutiérrez (2001-2003).....</u>	<u>83</u>
<u>3.7 El Plan de Desarrollo y la Seguridad: Gobierno de Sergio Fajardo Valderrama (2003-2007).....</u>	<u>90</u>
CAPITULO IV LA NEGOCIACION DEL GOBIERNO CON LAS AUC:	
ASPECTOS GENERALES	96
<u>4.1 Contexto Legal de la Desmovilización.....</u>	<u>97</u>
<u>4.1.1 Decreto 128.....</u>	<u>97</u>
<u>4.2 Acuerdo de Santa Fe de Ralito.....</u>	<u>100</u>
<u>4.3 Antecedentes de la Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN).....</u>	<u>109</u>
<u>4.3.1 El Bloque Metro</u>	<u>109</u>
<u>4.3.2 El Bloque Cacique Nutibara.....</u>	<u>112</u>
<u>4.3.3 El enfrentamiento de los Bloques Metro y Cacique Nutibara.....</u>	<u>113</u>
<u>4.4 Operación Orión y Mariscal: un Punto de Quiebre.....</u>	<u>116</u>

4.5 La Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.....	120
4.6 Modelo de Intervención y Regreso a la Legalidad.....	123
CAPITULO V EVALUACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL	
PROCESO DE DEMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE CACIQUE NUTIBARA EN	
LA CIUDAD DE MEDELLÍN	128
5.1 Análisis General del Proceso de Desmovilización.....	132
5.2 Análisis del Modelo de Intervención.....	144
5.2.1 Educación	146
5.2.2. Acompañamiento Psicosocial	150
5.2.3 Seguridad	156
5.2.4. Comunicaciones y Verificación	159
CONCLUSIONES	160
BIBLIOGRAFÍA	167

TABLA DE GRAFICAS

[Grafica 1. Modelo de Intervención: Regreso a la Legalidad. 25](#)

[Grafica 2. Evolución académica en primaria. 25](#)

[Grafica 3. Evolución académica en secundaria. 25](#)

[Grafica 4. Evolución en educación técnica y superior. 25](#)

[Grafica 5. Principales causas de ingreso al BCN. 25](#)

[Grafica 6. Militancia previa al BCN. 25](#)

[Grafica 7. Motivos para desmovilizarse. 25](#)

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objeto central el estudio “medir el impacto del proceso de paz y reconciliación, en los desmovilizados y en la sociedad, tomando como punto de referencia los informes presentados por la Organización Internacional de Migraciones, OIM, y algunas entrevistas realizadas”. Para la realización de esta medición de impacto se realizará una descripción de la crisis de la ciudad, una descripción de los actores del conflicto, una enumeración de los planes de seguridad implementados en la ciudad en el periodo 1990 – 2006 y una descripción de los aspectos generales de la negociación del gobierno con las AUC.

En otras palabras, se intenta una ubicación sociopolítica del fenómeno paramilitar en Medellín en el contexto de la crisis acentuada que en términos de violencia se expresa de manera dominante en esta ciudad en los últimos 20 años y muy particularmente desde la década de los noventa hasta el presente.

Es importante entender cómo el ejercicio del poder por medio de la violencia reiterada en la Ciudad de Medellín en las últimas décadas ha configurado una crisis socio-política de alcances sin precedentes no solo a nivel local, o nacional, sino también a nivel internacional.

El grupo paramilitar “Cacique Nutibara” y su desmovilización constituyen el hecho más trascendental en relación con la crisis político-militar y con la profundización de la violencia en la ciudad de Medellín en los últimos tiempos.

El desarrollo de este trabajo, parte de un breve marco evolutivo de las características políticas y legales, los objetivos políticos y estratégicos del plan de desmovilización, los mecanismos de evaluación y de seguimiento de la desmovilización y finalmente un intento de reflexión teórica del mismo fenómeno. Todo ello en la intención de presentar un cuadro evaluativo teórico de la importancia, logros y limitaciones del mismo fenómeno.

El proceso de ubicación y caracterización evaluativo de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín, tiene como marco o entorno en el cual se desarrolla, el contexto histórico general de los últimos 20 años de la ciudad de Medellín, definida en términos de crisis y violencia sociopolítica. Además, se intenta darle lógica al fenómeno de la desmovilización como parte de un entorno general, político y social definido por la confrontación de los distintos actores que “dominan” el espacio social y humano de esta ciudad.

En los años setenta y ochenta la Internacionalización de la ciudad se dio por la puerta de atrás del mundo globalizado, Medellín no representaba un lugar llamativo para realizar cualquier actividad, ya sea económica, de turismo o

inversión. La crisis de Medellín se constituyó gracias al fenómeno de la violencia generada por las bandas, milicias, narcotráfico y paramilitarismo en la ciudad que el mundo occidental representaba como cuna de la ilegalidad, lo que ha tenido repercusiones de diferente índole, pero que al interior de la ciudad se ha trabajado por medio de propuestas políticas de solución a esta crisis.

De esta manera, en el primer capítulo de esta investigación se plantea, la existencia de un orden social establecido desde comienzos del siglo XX y con una aceptación generalizada por los habitantes de la ciudad. Uno de los elementos que incide el quiebre de ese orden a mediados del siglo es la llegada caótica y desordenada de la modernización socioeconómica con todas sus características, avances, contradicciones y procesos críticos y complejos, que la ciudad no pudo manejar en ese momento, generando una crisis y descomposición del orden social y político.

A partir de la década de los ochenta, el estancamiento socioeconómico y la crisis socio cultural de la ciudad, se acentuó hasta niveles incontrolables y se aceleró, a través de una crisis de poder generada por nuevos sectores sociales emergentes, particularmente el narcotráfico, que pretendían disputar espacios antes exclusivos para las elites tradicionales de la ciudad.

Ese momento es crucial para entender las dinámicas que de allí en adelante se desarrollan ya que tanto el sector emergente como las elites constituidas tenían sus formas de actuar y permear las barreras de los otros sectores.

En el segundo capítulo se intenta ubicar y caracterizar para la década de 1980 la disputa por el poder desde la vía política, armada e ilegal de los distintos actores que se fueron conformando: a) la conformación de las bandas y delincuencia común, b) la aparición de las milicias como forma urbana de accionar de las guerrillas, c) la consolidación del negocio del narcotráfico y d) la llegada de los paramilitares a la ciudad, todas ellas manifestaciones de la violencia en la ciudad, como se plantea en el segundo capítulo.

Se trata de presentar entonces una caracterización de cada uno de los grupos y un seguimiento de su evolución hasta la coyuntura en que se presenta la búsqueda de una desmovilización.

En el tercer capítulo se hace un balance esquemático de la evolución de los planes de desarrollo de la ciudad del periodo de 1990 hasta el 2006. Se trata de profundizar en cada plan de desarrollo el asunto de la seguridad ciudadana, tratando de preguntar ¿Qué peso específico se le da a la correlación entre los modelos punitivos y los modelos consensuales?

En el cuarto capítulo se establecen aspectos generales de la negociación que entabla el gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003. Los antecedentes y la relación entre la negociación a nivel nacional y la concreción e inicio del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara que se concreta en el 25 de noviembre de 2003 en Medellín. Se trata de un seguimiento en el proceso de negociaciones, la discordia entre las partes y los principios y argumentos, contenidos en los pactos firmados.

En el quinto y último capítulo se evalúa el modelo de intervención que se implementó para la desmovilización de los 868 jóvenes que integraban el Bloque Cacique Nutibara.

Se intenta profundizar en el contenido del modelo de intervención para evaluarlo en sus elementos y características más importantes. Tratando como objetivo central de este capítulo de encontrar los avances, las limitaciones y las posibilidades que un fenómeno como la desmovilización plantea para el futuro de esta ciudad en relación con su crisis histórica recurrente y sus posibilidades futuras.

Sobre esa base, se hace un balance comparativo que nos permite argumentar la hipótesis general del trabajo cuyo principio es que el proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara se podría configurar como el fenómeno de negociación con los actores del conflicto, de mayor impacto en la ciudad, debido a

la evolución de los procesos socio culturales, políticos, económicos y de violencia que configuran características específicas propicias para dicho proceso en la ciudad de Medellín.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo intenta definirse en el contexto que combina el manejo de materiales de fuentes secundarias sobre las temáticas tratadas para intentar relacionar explicativamente con algunas fuentes primarias, básicamente documentos gubernamentales, boletines, panfletos, entrevistas institucionales y a algunos desmovilizados beneficiarios del proceso.

Desde el punto de vista teórico, el trabajo se sustenta en algunas investigaciones que hoy día se reconocen en el medio académico porque marcan la pauta de una reflexión teórica y empírica sobre la crisis, el conflicto y la violencia en Medellín, textos como los de Alfredo Rangel, Álvaro Camacho, Jaime Ruiz, Mauricio Romero entre otros, fueron sino el único si el soporte mas importante que desde lo teórico sirvieron de base a la elaboración y construcción de este proyecto.

El tema de la desmovilización lo ubicamos en el contexto teórico de definición de las teorías del conflicto y la negociación, y para llegar a este punto, asumimos e intentamos clarificar en el trabajo, los conceptos básicos de crisis, crisis política, conflicto, violencia, actores, grupos de presión sectores sociales, legalidad, legitimidad, Orden, norma, ley y en general conceptualización de la estructura de la ciudad.

De esta manera la investigación aporta al reconocimiento del problema de la violencia como generador de crisis en la ciudad y al conocimiento del papel que han tenido cada uno de los actores del conflicto Colombiano en la consolidación de este proceso. En este contexto introducimos teórica y evaluativamente el fenómeno de la desmovilización del bloque cacique Nutibara y sus resultados, como proceso todavía en evolución.

CAPITULO I MODERNIZACION Y ORDEN SOCIAL EN MEDELLIN BREVE ESQUEMA SIGLO XX

Antes de iniciar este capítulo es necesario hacer una diferenciación conceptual entre modernidad y modernización, para que el lector tenga claro de qué se está hablando en cada uno de los casos mencionados: la modernidad se caracteriza por la aparición de Instituciones como el Estado-nación y los aparatos administrativos modernos con dos rasgos característicos: (a) La modernidad es el primer momento donde el conocimiento teórico y el experto se retroalimentan sobre la sociedad para transformarla; a este proceso se le ha denominado AUTORREFLEXIBILIDAD y (b) La descontextualización, es decir, el desarraigo de la vida local de su contexto por influencia cada vez mayor de las relaciones translocales. En otras palabras, la modernidad es el cambio de la sociedad tradicional a una sociedad moderna, y esta última se diferencia de la primera en que se consolida principalmente sobre el conocimiento teórico y experto basada en la modernización; entendiendo por modernización el proceso que permite el cambio o la transformación (de diferentes tipos, ya sea social, económico, cultural o religioso) de la sociedad tradicional a la sociedad moderna.

El proceso de modernización¹ histórica que enmarca la evolución de Colombia en el siglo XX, tiene especial peso y trascendencia en las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales de la ciudad de Medellín.

En Medellín en la primera mitad del siglo XX, se dieron grandes transformaciones económicas, cuya base fue precisamente la creación de una fuerte infraestructura económica moderna, de base industrial y textil, complementada además de una fuerte industria de servicios.

La modernización de la ciudad, concretó procesos de masificación social, proletarización y cambios culturales, y políticos, cuyo espacio natural fue la conformación de una ciudad moderna: “Medellín capital industrial de Colombia.”

El contexto de una ciudad que dejó de ser pueblo para convertirse en capital industrial de Colombia, tuvo como resultado y base a la vez, la estructuración de un férreo orden social y político, que aunque jerarquizado, manifestaba una dinámica ejemplar, de transformación y de fortaleza del statu quo institucional y político que sirvió de ejemplo para el país.

La “Elite Antioqueña”, había conformado todo un proyecto de ciudad, aparejado con un proyecto social y económico prospero, pero que desde luego guardaba en

¹ Entendiendo por ciudad moderna colombiana, en palabras de William Restrepo , aquella “organización socio espacial que acompañó a las definiciones estructurales que forjaron el país, (es decir,) la ciudad entendida como la complejidad de relaciones que condicionan un determinado momento del desarrollo del capitalismo y que en nuestro país sólo comenzó a consolidarse a partir de la tercera década del presente siglo y logra su mayor significación a partir de 1950” (Restrepo, William, 1994; 10)

su interior las contradicciones propias de una ciudad y una sociedad que de todas maneras, se centraban en los desequilibrios y la inequidad propias de una modernización profundamente contradictoria y traumática.

Al respecto afirma William Restrepo (1994) que “la ruptura que se establece entre la sociedad y el Estado permite que en la ciudad de Medellín no exista, por parte de los ciudadanos, un verdadero reconocimiento de las instituciones del Estado y viceversa, es decir, la relación del Estado y la sociedad civil presenta fuertes fracturas y desarticulaciones en la ciudad. El concepto de sociedad nos remite a la idea de un orden, de una especie de “ciudad poblada por un plural de identidades”, cuyas relaciones de poder y dominación se encuentran hasta cierto nivel institucionalizadas. La sociedad sería ese espacio donde se construye y toma forma la identidad del tejido social; es el lugar privilegiado que permite universalizar las demandas, propuestas y proyectos que nacen de lo social. Es el territorio de la institucionalización, el espacio donde los diferentes ámbitos de lo social alcanzan un grado de representación y normatividad, es decir, una forma de organización colectiva.” (13)

Este proceso es bien sabido se plasmó de manera definitiva para la década del 50, cuando se consolidó una estructura social que respondía al mismo tiempo y por primera vez a los elementos racionales de la planeación física de la ciudad. Aparece el mapa de la ciudad estructurado en barrios, con un desarrollo urbanístico de los principales barrios de elite como Prado, de la clase media y de la obrera, y al mismo tiempo y en términos de modernización socio histórica, la ciudad ya respondía a una clara estructura social y económica moderna con una elite industrial y financiera, una clase media emergente y una clase proletaria.

En un proceso que implicaba la planificación de las ciudad, se consolidó una estructura social que proveyó a la diferentes clases sociales de un lugar y de un esquema conceptual, se construyó un proyecto de ciudad que, combinado con la praxis de la dimensión humana, fundamentó un esquema social con grados relativamente altos de consenso hasta la década del 50.

Así pues el modelo social y de desarrollo de las primeras décadas del siglo XX, empiezan a expresar sus limitaciones y grandes contradicciones, mostrando fisuras y señales claras de erosión a lo largo de los sesenta y setenta cuando se produce un aumento dramático de la migración rural. Todo esto coincide con el estancamiento de la actividad industrial. Los efectos de esta transformación se evidencian en la frustración del acceso oportuno de empleo, en el deterioro de las condiciones de vida para la clase proletaria y en la imposibilidad de inserción a la ciudad para un número considerable en nuevos pobladores.

En palabras de William Restrepo (1994) “[...] la existencia de lo institucional, de lo normalizado, propone también la presencia de su contraparte, es decir, de aquellos hombres, procesos y propuestas que quedan al margen de esta estructura legal y donde es posible encontrar una diversidad de formas de resistencia a las relaciones de poder imperantes. Es, en último término, un espacio que desborda lo institucional; el lugar donde la ausencia de normatividad tiene su expresión.” (13)

Se observa entonces, una transformación de relaciones paternalistas hacia relaciones basadas en la deificación y politización de diferencias y la emergencia del conflicto social. “Hasta entonces, las clases populares podrían exigir ciertos derechos pero dentro de su status, no cuestionaban el orden social, no pretendían sustituir siquiera sus dirigentes, ni igualarse con ellos.”²

Otra transformación importante es que más o menos a mediados del siglo comienza a perfilarse una clase especializada en la actividad política que irá, poco a poco, desbordando la relación familia./economía/política, e instaurando en su lugar una diferenciación de dominios (economía y política) y una estructura clientelista cuyos agentes son ya políticos profesionales.

“La política deviene en importante factor de movilidad social que influye, especialmente, en la conformación de la clase media con sus diferentes niveles. Al mismo tiempo, la migración y el aumento de la población excluida de los bienes -tangibles y simbólicos- que la ciudad ofrecía, desembocan en los conflictos que dieron lugar a las invasiones de terrenos urbanos realizadas por emigrantes y personas carentes de vivienda.”³

Esta crisis concreta la primera manifestación de la ruptura del consenso clásico aquí propuesto, que va a representarse en la ciudad en dos horizontes temporales particulares; a) del 70 – 85; la crisis en la ciudad se manifiesta por medio de la alta

² Mayor Mora Alberto. Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia: una interpretación sociológica sobre la influencia de la Escuela de Minas en la vida, costumbres e industrialización regionales. Editorial Planeta, Bogotá, 1985. pp. 155.

³ Roldan, Mary. A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación para la promoción de la ciencia y tecnología. Medellín, 2003, p.22.

concentración del poder político por parte del Estado central, aumentando los niveles de exclusión política de la sociedad, la ciudad afronta una desactivación de la dinámica industrial y una crisis económica y de empleo, los niveles de delincuencia común y violencia tienen un crecimiento significativo; b) El segundo horizonte temporal que se puede identificar es del 85 al 93, esta expresión de la crisis se caracteriza por la entrada del fenómeno del narcotráfico en la ciudad.

Estos dos momentos representan en Medellín la manifestación más concreta de la crisis y descomposición del pacto social de comienzos de siglo y el cual queda a la deriva.

Desde luego, las transformaciones que se daban en Medellín como expresión de las contradicciones a nivel local, reflejaban aquí con mayor fuerza, los cambios y la crisis que se estaban dando a nivel nacional.

Otras manifestaciones de los cambios sociales a nivel nacional y que se reflejaban en Medellín para la época, fueron desde el punto de vista sociodemográficos: “La transformación de la población mayoritariamente rural y urbana (del 61% en 1951 la población rural descendió al 30% en 1985), la expansión del sistema educativo y la creciente secularización del pensamiento, la sustitución por los medios de comunicación de instituciones como la iglesia, la creación de opinión pública en el campo político, falta de adecuación entre sistema político y Estado, y proliferación de la violencia.”⁴

⁴ Archila Neira, Mauricio 2002 “Colombia 1975-2000: de crisis en crisis”. En: Archila Neira, Mauricio et al. 25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000 (Bogotá: CINEP). p.127-128

En efecto, a principios del siglo XX irrumpe el Estado moderno, el cual a mediados de siglo asume con énfasis su forma burocratizada que, con sus propios actores e intereses, se yuxtapone al modelo de orden establecido en la ciudad y la región. Esta yuxtaposición expresa también la tensión entre lo nacional y lo regional y es un elemento central en la transformación del triángulo social que configura la Medellín de las décadas de 1960-1980.

Para el último cuarto del siglo XX la crisis del proyecto económico de Medellín, sumada a la descomposición del orden social e institucional, producto de los grandes cambios en la economía en la sociedad y en la política, dan forma a un entorno histórico crítico dentro del cual, se van a dar nuevos fenómenos y nuevas dinámicas socioeconómicas y culturales a través de las cuales va a tomar forma peculiar y complejas, la crisis de la ciudad a finales del siglo XX.

En el último cuarto de siglo “los procesos de cambio adquieren mayor dimensión y amplitud al influjo de las economías ilícitas, de la generalización de la violencia, de la internacionalización de la economía y de la redefinición del Estado”⁵. La sociedad no se define ya por la intersección de los ejes familia-empresa-política, ni se cohesiona alrededor de la elite.

“La familia, que sufre cambios estructurales y en su función, deja de ser el modelo según el cual se construyen otras relaciones sociales y es sustituida por nuevas instituciones y categorías que enfatizan en la diversidad y en la desigualdad: clase,

⁵ Op. Cit., Archila Neira, p.132.

estrato, etnia, género, etc.”⁶

Las organizaciones populares y grupos armados por fuera del Estado⁷ entran a jugar un papel importante en la segunda fase de la consolidación de la crisis a finales del siglo, debido a que la regulación social se atomiza, de manera especialmente evidente en los sectores populares, donde proliferan grupos armados antagónicos (bandas, combos, milicias, oficinas, etc.) que establecen dominios territoriales y sectorizan la delincuencia en Medellín.

Alguno de los virajes que encontramos al estudiar la trayectoria de Medellín al finalizar el siglo XX son inducidos por la respuesta del Estado a la crisis de legitimación y de autoridad estatal que fue reconocida y catalogada desde finales de los 70 en occidente como crisis de Gobernabilidad⁸. Es claro que cuando el Estado no puede mantener el orden y la regulación social a través del monopolio de la fuerza y la violencia, por la atomización de la sociedad en grupos emergentes que empiezan a hacer uso de la violencia como la única forma de establecer un nuevo orden social en una determinada zona o región; es esto lo que genera precisamente la crisis de legitimidad y de autoridad estatal ya que el orden social lo ejercen otras instituciones que no pertenecen al Estado, su poder

⁶ Botero Herrera, Francisco. La industrialización en Antioquia, Génesis y consolidación. Ed. Universidad de Antioquia. Medellín; 1985, p. 133.

⁷ Se entenderá por grupos armados extra estatales aquellas manifestaciones del uso y ejercicio de la violencia que están por fuera del orden establecido por las instituciones que tradicionalmente son reconocidas en el uso monopólico de esta expresión, ya sea a través del castigo o no castigo en relación a las normas establecidas.

⁸ Ardite, Benjamín. Del comercio libre al comercio justo: Las iniciativas de los nuevos defensores de la equidad en las relaciones norte-sur. Revista en Ciencias Sociales. Madrid, 2005, p.45.

se diluye frente a los nuevos actores, minimizando de esta manera su capacidad de gobernabilidad sobre dichos territorios.

La desarticulación del modelo clásico del siglo XX que venía implementándose en la ciudad se concreta con mayor fuerza a partir de la década de los ochenta, donde puede constatarse un agotamiento en el patrón de acumulación que Medellín poseía, momento en el cual la ciudad deja de ocupar un papel central y dominante en la actividad económica central del país.⁹

Se configura así en torno a los problemas de tipo económico, social y político de la ciudad, lo que se ha denominado por varios autores como “crisis del Estado en la ciudad de Medellín”¹⁰. Esta crisis del Estado se refiere a la "ausencia de una verdadera institucionalización del poder estatal como el encargado de dar coherencia y de regular las diferentes dinámicas conflictivas de la sociedad civil y, en segundo lugar, a la incapacidad de fijar las reglas constitutivas de un sistema de valores y símbolos que reafirmen el ordenamiento social."¹¹

La crisis de la ciudad se manifiesta en la constante “negación de la ciudadanía”¹² lo que permite que los individuos establezcan relaciones anómicas, que expresan el ejercicio restringido de los derechos políticos que hacen que se construya una verdadera ciudadanía. Utilizando el término de Benedict Anderson (1997) es

⁹ Vincent Goueset. Bogotá: nacimiento de una metrópoli; la originalidad del proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo XX. Bogotá, Tercer Mundo, 1998

¹⁰ Restrepo, Rianza. William. Modernización y Conflicto Urbano. En: Revista Estudios Políticos N° 5, Medellín. 1994. P. 14

¹¹ *Ibid.*, P. 14

¹² *Ibid.*, P. 15

posible decir que se puede evidenciar el desplome de la “comunidad imaginada”¹³ establecida por la elite antioqueña de principios de siglo.

Esta crisis que se manifestaba también en este periodo a nivel nacional “permitió el auge de movimientos sociales campesinos, cívicos y sindicales en el marco de conflictos por la tierra, derechos de asociación sindical, derechos laborales y poder político, que fueron repelidos por la fuerza y la coerción por parte de los organismos del Estado o mercenarios corporativos. Posibilitó la estigmatización y estereotipia de los movimientos en conflicto, que justificó la persecución de estos sectores, lo que permite un debilitamiento en las organizaciones obreras, sindicales y de izquierda en la ciudad,”¹⁴ diezmando el poder de negociación económico y político de los sectores sociales frente a los mecanismos institucionales, sobre todo en el caso de la ciudad de Medellín.

Así pues, en las décadas del ochenta y del noventa se presenta de manera definitiva el auge de las redes de poder del narcotráfico y de la formación de una primera generación de paramilitarismo —articulada a éstas y con vínculos orgánicos con las fuerzas armadas. En el marco de la lucha contrainsurgente, estos vínculos sirvieron a un ejercicio sistemático de la violencia para garantizar la concentración de la tierra y el debilitamiento de ciertas dinámicas de organización social a nivel subregional y urbano.

¹³ Benedict Anderson. *Comunidades Imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

¹⁴ Franco, Vilma Liliana. *Prácticas Hegemónicas de la Coalición Políticamente Dominante en Medellín y su entorno Urbano-regional*. —En: *Revista de Estudios Políticos* N° 26, Medellín, 2006. P. 151.

Esta dinámica de coalición de diferentes sectores sociales, permitió la acumulación de las organizaciones ligadas al narcotráfico no solo de recursos económicos sino de la capacidad para competir y disputar la propiedad con los sectores tradicionalmente hegemónicos, no solo de las empresas, sino que se convierten también en competidores políticos disputando todas las esferas de poder con la clase tradicionalmente dominante.

Para explicar dicha transición y lo realmente existente, la elite antioqueña o la coalición políticamente dominante “construyó y difundió una narrativa centrada en la idea de la crisis moral de la sociedad regional. De esta forma se definía o nombraba una ruptura en la historia de la región y al mismo tiempo se construía ésta, al proporcionar una interpretación sobre el pasado (remoto y reciente) y el presente. A través de ese relato, que fue una forma inversa y paradójica de afirmación del mito de la magnificencia antioqueña, se afirmaba por ejemplo que el reverso contemporáneo de ese pasado glorificado era el ocio, el enriquecimiento fácil, la depravación moral y la crisis de la familia”¹⁵ y los mayores representantes de esta idea eran los señores del narcotráfico.

Así pues se concreta un proceso de la reconfiguración de la estructura del poder en Medellín basado en las nuevas dinámicas económicas y políticas que la elite antioqueña trataba de recomponer en dirección a la conservación del orden institucional y del poder político.

¹⁵ Op. Cit., Franco, Vilma Liliana. P. 153.

Las dinámicas sociales económicas y políticas de Medellín en las décadas del ochenta y noventa, dieron forma definitiva a la crisis histórica de esta sociedad. El modelo clásico de construcción de consenso en base al dominio hegemónico de la elite y el desarrollo y configuración de la modernización de la ciudad, entraron en crisis y esta determinada por el estancamiento económico y social, la pobreza, la ausencia de canales políticos y sociales de expresión y la violencia cotidiana generalizada, fueron todos elementos que dieron forma al entorno permisivo para la intromisión del narcotráfico primero y luego la guerrilla urbana, los cuales se establecieron en la ciudad y finalmente, se convirtieron precisamente en los factores cruciales en la desestabilización social e institucional que marca a la ciudad en los últimos años.

Uno de los elementos esenciales de este entorno fue precisamente que el narcotráfico y la guerrilla sirvieron para la entrada del fenómeno paramilitar a la ciudad de Medellín.

CAPITULO II EL CONFLICTO URBANO Y LA CRISIS SOCIAL Y POLITICA EN MEDELLIN. 1985 - 2000

El análisis de las relaciones existente entre las acciones realizadas por los diferentes actores del conflicto desde la década del 80 hasta el año 2000 y su vinculación con las diversas manifestaciones de violencia y criminalidad en la ciudad, permite establecer alguna de las circunstancias que condujeron al rompimiento del orden social instaurado en el siglo XX y la aparición con fuerza determinante del fenómeno paramilitar en la ciudad.

En este caso es importante apoyarse en el modelo general que para el análisis general de la violencia en Colombia utiliza Gaitán¹⁶. Para este autor la contextualización del fenómeno de la violencia en la ciudad se realiza a través de la articulación de la perspectiva de los actores del conflicto y el sistema de orden social a partir de tres momentos que constituyen un eje de continuidad del conflicto en la ciudad. Estos tres momentos son: 1) la aparición del fenómeno del narcotráfico, 2) La aparición de las bandas y milicias y 3) la aparición del fenómeno paramilitar.¹⁷

Estos tres momentos permiten hacer una traducción del concepto de crisis, redefinida en términos de problemas como la inseguridad y la violencia en la ciudad,

¹⁶ Gaitán Daza, Fernando. Multicausalidad, impunidad y violencia: una visión alternativa. Working paper. En: www.uexternado.edu.co. Febrero 14 de 2006, 2:40 p.m.

¹⁷ Alonso Espinal, Manuel A. Violencia política y seguridad ciudadana. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín. 2003. P.3.

problemas que comienzan a manifestarse con mayor claridad a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. Para este periodo se recrudece la violencia;

Lo que se pretende evocar con la idea de crisis en este trabajo es la ruptura o alteración de una continuidad propuesta en un ámbito específico, es decir, en la ciudad de Medellín. Esa continuidad es un orden establecido por diferentes sectores de la sociedad, ya sean económicos, políticos, culturales, sociales e institucionales, que determinan el funcionamiento de un sistema.

La descomposición del orden y la intromisión de los factores y actores del conflicto en la ciudad dieron forma al modelo teórico de la crisis recurrente en la ciudad. En nuestro caso entendemos por crisis “[...] un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo, una vuelta sorpresiva y a veces hasta violenta y no esperada en el modelo normal según el cual se desarrollan las interacciones dentro del sistema en examen”.¹⁸

De esta manera en nuestro caso el concepto de “crisis” puede aplicarse a diferentes unidades políticas que se diferencian en sus extensiones territorial y administrativa. Así el concepto de crisis no solo es pertinente para los procesos que se dan a nivel nacional sino que también se constituye en un referente conceptual que sirve para describir, analizar y comprender las diferentes transformaciones que se llevan a cabo en las ciudades, sin desconocer que, la

¹⁸ Gianfranco Pasquino. “Crisis”. En: Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política. México, Siglo XXI, 1997. p. 391-394.

crisis de la ciudad hace referencia también al orden nacional en la cual se encuentra inserta¹⁹.

Se entiende entonces la crisis en perspectiva política de Medellín como, el resquebrajamiento del orden establecido²⁰ en la ciudad a finales del siglo por causas estructurales y coyunturales que se han presentado en su propio desarrollo.

Desde el punto de vista estratégico y político, fueron los mismos planes de desarrollo de Medellín de los años 1995-1998 y 1998-2000, los que resaltaron cuatro factores estructurales que determinaron la generación de la crisis en la ciudad, estos son²¹:

- 1) La crisis de legitimidad de los partidos políticos locales y del Estado,
- 2) La baja calidad de vida de las zonas más populosas de la ciudad,
- 3) La pérdida de identidad colectiva, la impunidad y
- 4) El narcotráfico.

De la misma manera, dichos planes de desarrollo identificaron en estos estudios aspectos coyunturales que determinan dicha crisis como son: El sobre-poblamiento

¹⁹ Vélez Rendón, Juan Carlos. Conflicto y guerra: La lucha por el orden en Medellín. En: Revista Estudios Políticos No. 18. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Medellín; 2001. p. 62.

²⁰ Con el ingreso de los procesos de modernidad se pretende implantar un orden social, económico y político a cargo de las Instituciones del Estado y el desempeño legítimo del monopolio de la violencia; sin embargo, como se viene afirmando, la aparición de grupos al margen de la ley configuran la crisis que traerá como consecuencia la desfiguración del orden establecido por dicho Estado.

²¹ Plan de desarrollo de Medellín, 1995-1997; Plan de desarrollo de Medellín, 1998-2000.

de la ciudad y la falta de planificación de la urbanización desmedida en las zonas periféricas a causa del fenómeno de desplazamiento forzado generado por el conflicto; la crisis de la industria local como consecuencia del fenómeno de la apertura de los años 90, así como el incremento del desempleo y el aumento del empleo informal; los bajos índices de educación en algunas zonas de la ciudad y la dificultad para el acceso a bienes básicos²².

De acuerdo con Vélez Rendon aunque en la actualidad no se hace alusión explícita a la “crisis de Medellín”²³, en algunos de los diagnósticos recientes se alude a la continuidad de fenómenos que la contienen: la creciente “inseguridad” de la ciudad expresada en los altos índices de criminalidad (robo de vehículos, secuestros, asaltos bancarios, atraco callejero...) y la ausencia de una convivencia ciudadana manifestada en las cifras de homicidios y violencia²⁴.

“Medellín, en el caso que nos ocupa, se constituye en un típico caso de violencia social y económica, entendida como aquella cuyas motivaciones emanan de conflictos económicos, territoriales y socioculturales –y podríamos agregar, de conflictos étnicos-. Los actores son múltiples, venidos desde la esfera gubernamental y de agentes particulares; aquellos actuando a través de los organismos de control y vigilancia haciendo limpieza social, y estos, actuando a través de bandas y milicias, estableciendo micropoderes sobre los territorios barriales.”²⁵

²² Plan de desarrollo de Medellín, 1995-1997; Plan de desarrollo de Medellín, 1998-2000

²³ Op. Cit., Vélez Rendón Mimeo.

²⁴ Alcaldía de Medellín. El futuro de la ciudad metropolitana. Plan estratégico de Medellín y el área Metropolitana, p.128-129

²⁵ Ruiz Restrepo, Jaime y Vélez Cifuentes, Beatriz. Medellín: Fronteras invisibles de exclusión y violencia. Fondo Editorial Centro de Estudios de Opinión, Medellín 2004. P.23.

Complementariamente nuestro análisis de la transformación de la crisis por medio de los diferentes actores generadores de violencia en la ciudad, se realiza a partir de cuatro momentos estratégicos que configuran la evolución y desarrollo de la “crisis de Medellín”. Entendiendo en cada momento la entrada en escena de cada uno de los grupos: Bandas, Milicias, Narcotráfico y Paramilitarismo. Cada uno generando características particulares para el accionar de la violencia, y que aunque existen comportamientos que pueden asimilarse, hay especificidades que los caracterizan y particularizan.

De esta manera podremos entender finalmente como se articulan las diferentes manifestaciones de la violencia en un proceso de concentración de poder y dominio por parte del proyecto paramilitar, Bloque Cacique Nutibara, lo que posibilita su consolidación y posterior negociación con el gobierno.

2.2 CRISIS POLÍTICA Y ACTORES DEL CONFLICTO: GENERALIDADES

Como ya se dijo, la crisis de Medellín en los últimos años está enmarcada por una serie de cambios a nivel económico, político y social, que constituyen en conjunto con la guerra, las primeras formas de la manifestación de la crisis. Estos cambios obedecen entre otros a la alta migración de la población del campo a la ciudad, que se ubica en las zonas periféricas donde no han contado con las condiciones mínimas para garantizar una adecuada calidad de vida, generando una descomposición del orden social, debido a los altos niveles de desplazamiento de los espacios aledaños a la ciudad.

La importancia de esta ciudad parte del hecho geográfico de estar sobre un eje articulador de otros niveles regionales, subregionales e incluso globales, lo cual le otorga protagonismo geoestratégico y económico.

“En efecto, Medellín ha podido establecer sus fronteras en relación también con la implantación de dinámicas regionales establecidas a partir de un eje central que comunica con el resto del país, por un lado, pero también en relación con zonas o subregiones que han tenido y tienen una importancia económica y geoestratégica [...]

Esta localización convierte a la ciudad no sólo en el centro de una importante región, con una alta diversidad en recursos y en posibilidades, sino también en un sitio de paso en las comunicaciones que se establecen entre el norte, el centro y el sur del país.

La importancia de esta breve descripción radica en que justamente por esas razones es que la ciudad se convierte en un escenario vinculante del conflicto

político armado.”²⁶

De esta manera el deseo de ejercer el control y dominio sobre la ciudad, empieza a configurar una disputa local por la hegemonía del territorio entre los diferentes grupos armados, desarrollando, entre otras, acciones dirigidas a expulsar al adversario, cortar su acceso y prevenir su emplazamiento a las subregiones y zonas en disputa, arrasando con buena parte de la población civil, acusada directa o veladamente de ser la base social de los grupos contrarios.

“El incremento de los hechos violentos en la ciudad en los últimos veinte años, nos indica no sólo el carácter complejo de la violencia, sino también la irrupción de actores y subactores si se quiere, en medio de una dinámica de relaciones.”²⁷

En este proceso, Medellín, al igual como otras ciudades del país, aparece cada vez más inscrita en la lógica de un conflicto armado que se va expandiendo hacia el ámbito urbano. Este conflicto involucra a fuerzas armadas, policía, guerrilla y paramilitares quienes, en forma desigual posibilitaron el desarrollo de estrategias de fuerza y violencia para el control y aniquilamiento de unos y otros, con el fin de ocupar posiciones privilegiadas en relación con la guerra en la ciudad.

Al respecto afirma Carlos Alberto Giraldo que

²⁶ Granda Marín, Alberto y Ramírez Adarve, Iván Darío. Contexto general de la violencia en Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. 2001, p. 10.

²⁷ Op. Cit., Granda Marín, p. 18.

“En el análisis geopolítico y militar de la ubicación de los actores se descubren varios elementos: el primero, el desarrollo de movimientos milicianos en relación con masas de pobladores en la miseria, donde la presencia estatal es mínima y es creciente la migración de cientos de familias expulsadas por autodefensas y Farc de zonas en disputa, por ejemplo el Urabá antioqueño y chocoano.

Así mismo, esos frentes milicianos se consolidan en territorios por donde cruzarán nuevas rutas de comercio y pasajeros como los túneles de oriente y occidente, trazados que afectan a algunas comunidades que se resisten a esas inversiones millonarias en detrimento de la inversión social en su favor.

Pero al mismo tiempo, las autodefensas se disputan un lugar allí para garantizar otros intereses y visiones sobre el desarrollo de la ciudad y del departamento, según observa un investigador social consultado”²⁸.

Es así como la crisis económica y de representatividad política, la disputa de diversos grupos por la hegemonía del territorio, constituyen la yuxtaposición de conflictos pasados y recientes que van a configurarse en la ciudad en la década de los noventa como crisis socio-política con participación cada vez mayor de las lógicas de los actores del conflicto armado que han venido en expansión en el ámbito urbano. Todo esto constituye el ambiente propicio para el desarrollo de la violencia como manifestación de la crisis que vivirá Medellín durante el periodo analizado.

A continuación se hará una caracterización de las principales manifestaciones de la violencia de los actores a partir de los cuatro momentos que se configuran como la máxima expresión de la crisis en la ciudad, como son: la conformación de

²⁸ El COLOMBIANO 23 de septiembre de 2001 Tema del Día. Aumenta urbanización del conflicto armado. Carlos Alberto Giraldo M.

bandas y delincuencia común, la aparición de las milicias como forma urbana del accionar de la guerrilla, el fenómeno del narcotráfico y la llegada de los paramilitares a la ciudad.

2.2.1 Bandas y Delincuencia Común

En los años setenta y principios de los ochenta, las bandas delincuentes se podrían explicar dentro de lógicas más simples, tanto desde el tipo de delitos, como en el tipo de armas. La delincuencia de esta época, constituida principalmente por jóvenes adolescentes que no encontraban posibilidades de ascenso y movilidad social, utilizaba ciertos códigos y reglas de comportamiento, que aunque los caracterizan no constituyen una estructura de organización y comportamiento que determine su accionar. La violencia ejercida es sustrato de la crisis económico-social por la que atravesaba la ciudad en este momento: la pobreza, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la deficiente cobertura de los servicios básicos prestados por el Estado (salud, educación, servicios públicos, cultura, recreación y deporte).

“Una primera manifestación de la violencia urbana tiene que ver con la convivencia ciudadana, con la cotidianeidad, con la vida diaria, con la construcción de ciudadanía. [...] Esta violencia cotidiana está referida a la carencia de reglas sociales y tiene como primera expresión la criminalidad común: son los que atentan contra la propiedad, la que emana de las pandillas juveniles. [...] Ante el desprestigio de los organismos estatales y la natural desconfianza que ellos acarrear, los habitantes de estos barrios pobres asumieron la responsabilidad de la seguridad en sus barrios, de manera que organizaron comités de vigilancia –

privados y de orden defensivo-. En un principio, cuando los miembros del comité capturaban algún delincuente, no lo entregaban a la policía sino que lo “cascaban”, es decir, lo golpeaban y lo echaban del barrio. Era una labor de limpieza de malhechores.

En estas circunstancias, la violencia emergió como factor estructurante de las formas de socialización de las bandas juveniles.²⁹

Frente a esta realidad social que se presenta en la ciudad en este periodo, se observa la indiferencia de la elite económica y un tratamiento coercitivo y punitivo por parte de las fuerzas encargadas de mantener el orden, un tratamiento netamente jurídico que no responde a las verdaderas motivaciones de exclusión social y económica que estaban viviendo estas poblaciones marginales.

Más tarde, un factor influyente en los procesos de transformación de las bandas, lo constituye el surgimiento de prácticas como el secuestro, los atracos bancarios y el robo de automotores. Se establecen estructuras sólidas basadas en jerarquías y mandos ante los cuales deben rendirse cuentas y resultados. Además, se caracterizan porque tienen acceso a armas como pistolas y escopetas, dando lugar a la evolución de la manifestación de la violencia hacia crímenes violentos. Sus miembros siguen siendo jóvenes motivados por las limitaciones del medio, que se enfrentan con la resistencia y la violencia defensiva; se dan procesos de enfrentamiento entre las bandas por ubicación territorial.

²⁹ Op. Cit., Ruiz Restrepo y Vélez Cifuentes, p. 63-64.

En esta etapa el tratamiento por parte del Estado sigue siendo netamente jurídico en relación a la búsqueda de una solución por medio del castigo punitivo al accionar de estos grupos delincuentes, sin tener en cuenta todavía que eran manifestaciones de la exclusión social que se vivía en la época.

Con el ingreso del fenómeno de la guerrilla urbana a finales de los ochenta y principios de los noventa, las milicias empiezan a cooptar las bandas establecidas en la ciudad. La estructura jerárquica de las milicias empieza a coordinar la acción guerrillera dentro de la ciudad para la instauración de su proyecto militar y político. Muchos de los jóvenes que hacían parte de estas bandas, al ser cooptados por las milicias, empiezan a buscar un protagonismo y un reconocimiento social al interior de estos grupos mediante el único medio al cual han tenido acceso, que es la violencia. No se adhieren necesariamente a las milicias por compartir su ideario político y militar sino que lo hacían por un afán de reconocimiento social frente a sus comunidades. El primer grupo conocido en 1986 fue “Milicias populares del pueblo y para el pueblo” que actuó básicamente en la zona noroccidental en los barrios popular, la isla y santo domingo.

En esta etapa se vislumbra un cambio en el tratamiento que el Estado le da a estas manifestaciones de violencia, caracterizada por una preocupación por encontrar una salida al conflicto que se venía configurando y se establecen diálogos con el Gobierno en los barrios populares más afectados de la ciudad, a través de los pactos de convivencia entre las diferentes bandas.

Pero, quizás lo que ha tenido el mayor peso específico en este tipo de actividades ha sido, con los procesos de evolución, transformación de la violencia en la ciudad fue el narcotráfico, el cual le dio otro 'status' a las bandas de delincuentes, al proveerlas de recursos económicos, mejorar la calidad de las armas empleadas y facilitar las condiciones para el control territorial de barrios marginales de la ciudad. Sin embargo, este fenómeno no genera una subordinación absoluta de las Bandas y la delincuencia hacia el narcotráfico, y por ello estas bandas mantienen niveles de autonomía que les permiten realizar acciones para su propio beneficio, tales como secuestros, robos de automotores, asaltos bancarios y acciones de sicariato³⁰.

“De acuerdo a datos de la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín (informe de gestión 1998-2000), en Medellín existen mas de doscientos grupos armados, de diverso tipo, que puede incluir unas 8500 personas. Se calcula, que más de la mitad de estas personas están armadas. Para ello no se cuentan las armas amparadas con salvoconducto. Y un porcentaje importante de estas, hoy, son armas de largo alcance.³¹

Los pactos que se adelantaron, en el accionar del Estado, en los diferentes barrios posibilitan la consolidación del poder armado por parte de las bandas y su reconocimiento social y territorial, el cual va a ser aprovechado por la entrada en

³⁰ Op. Cit. Granda, p. 19.

³¹ Op. Cit. Granda, p. 19.

escena del narcotráfico, ya que encuentra una estructura más organizada y con un mayor poder de acción y armado para el ejercicio de la violencia.

Con la consolidación del fenómeno del narcotráfico como principal generador de violencia en la década de los noventa, se configura una profundización de la crisis que vivía la ciudad, debido al accionar de los grupos narcotraficantes por medio del sicariato y el ajuste de cuentas entre los diferentes carteles. Lo que se manifiesta como una explosión de los índices de violencia en la ciudad, gracias al poderío y consolidación de la violencia que ejercían las bandas en los diferentes sectores de la ciudad hace que se consoliden como una oferta adecuada a los intereses del narcotráfico.

Esto se evidencia por la presencia de jóvenes en bandas delincuentes como la Terraza, los Triana y la banda de Frank, conocidas en toda la ciudad por su accionar violento, que a pesar de ofrecer sus servicios al mejor postor eran reconocidos por la autonomía en su accionar y la organización de su estructura (asaltos a bancos, extorsiones, secuestros entre otros).

El Estado buscando atacar la crisis que vivía la ciudad, inicia un proceso de persecución al fenómeno del narcotráfico a través de la conformación de grupos elites integrados por organismos nacionales e internacionales como la DEA, cuyo objetivo principal era ubicar y capturar a los principales cabecillas de los grupos de narcotraficantes. Es accionar es dirigido básicamente a la estructura del

narcotráfico, del cual no hacían parte estas bandas delincuenciales, razón por la cual el accionar implementado por el Estado en esta época no afecta de manera directa su estructura, facilitando de esta manera su relación con el fenómeno paramilitar.

El caso de mayor relevancia y representatividad del accionar de las bandas en la ciudad, en la segunda mitad de los años noventa, para la dinámica del conflicto urbano en Medellín es la conocida banda de “la terraza”. Este grupo, aprovechando el vacío que dejó la “desarticulación del narcotráfico en la ciudad”³², comienza a desplegar su accionar con la finalidad de reemplazar la estructura del cartel de Medellín en varias zonas de la ciudad. La característica diferencial de esta banda es que es un escuadrón mafioso-delincuencial, que constituye una de las expresiones del proceso de conformación del fenómeno narco-paramilitar, porque no sólo le prestó seguridad al negocio del narcotráfico, sino que fue la encargada de acciones contrainsurgentes.

2.2.2 Grupos Guerrilleros y Milicias

La aparición de las primeras organizaciones guerrilleras en Antioquia, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, se dio en zonas de alto potencial económico y de recursos, como Urabá, el Nordeste, el Suroeste y el Oriente. La guerrilla pasó de ser eminentemente rural para tener una importante presencia

³² Aquí es importante aclarar que se desarticula la estructura existente en los años noventa con la muerte de Pablo Escobar, lo que no implica la desarticulación de este fenómeno en la ciudad, sino su transformación en estructuras emergentes más pequeñas y menos visibles, que dio origen a lo que se denominó “las oficinas”.

urbana, dados los cambios en la valoración económica y estratégica del territorio y con ello una apreciación distinta de la dinámica interactiva entre estas regiones y las zonas urbanas. En aquellos años, la guerrilla observaba la ciudad como centro de abastecimiento logístico, desde donde se surtían los grupos asentados en el campo. Con la aparición del M-19 en los años 80, con un enfoque más urbano que rural, empieza a tener importancia la presencia guerrillera en las zonas urbanas.

El interés del movimiento guerrillero por ampliar y generalizar la guerra al Estado, establece nuevas dinámicas y procesos de intervención en lo urbano que modifican sustancialmente el accionar de estos grupos. El movimiento guerrillero comienza a crear estructuras, redes de apoyo y a potenciar su presencia en sectores importantes y marginales, incluso coordinando diversos grupos y una fuerte presencia política y militar en la ciudad.

“¿Cómo funcionan estos grupos milicianos? Poseen un vínculo que podríamos denominar orgánico y, simultáneamente, despliegan actividades inorgánicas con miras a la supervivencia urbana. De acuerdo con lo anotado anteriormente, reciben órdenes o directrices de los comandos centrales de los grupos insurgentes para realizar acciones de sabotaje, asesinatos selectivos y sobre todo, para realizar labores de inteligencia en las ciudades; sin embargo, muchas de sus acciones están marcadas por la iniciativa propia, por sus evaluaciones tácticas. Al parecer cada grupo miliciano urbano se descompone en pequeños grupos:

“entre cinco hombres como mínimo y doce personas como máximo, formando una célula guerrillera, la cual opera en determinado barrio.

La agrupación de varias células es lo que se configura un frente urbano [...] es práctica común por motivos de seguridad que el grupo que se encuentra en un

barrio desconozca la identidad de los miembros de otras células [...]” (la guerra urbana en Colombia, 2002:2)”.³³

En la década de los ochenta se establecieron en varias ciudades, entre ellas Medellín, diálogos del Gobierno con la guerrilla urbana, posibilitadas por la administración del presidente Betancur (1982-1986), que estableció procesos de diálogo y tregua con las FARC, el M-19 y el EPL.

Los Campamentos de Paz instaurados en esta época en varias ciudades del país, entre ellas Medellín, para promover el proyecto de Diálogo Nacional del Gobierno Betancur, fueron utilizados como escenarios de formación política y militar. Con la ruptura del diálogo por la paz en 1985, ya se había establecido una relación entre importantes sectores de la población y la guerrilla; la consolidación de la guerrilla urbana con participación de sectores de la sociedad en las zonas urbanas es lo que más adelante se conoce como “milicias”.

Para Mauricio Romero la conformación de las milicias contó con

“condiciones sociales favorables para su empoderamiento, básicamente representadas en la endémica ausencia estatal y la consecuente demanda ciudadana de seguridad en un marco de violencia creciente. Este es quizás el antecedente registrado de movimientos que propenden hacia la disputa y control territorial y que ya cuentan con estructuras organizativas y propuestas políticas embrionarias de autodefensa barrial, aunque sustentadas en las bases programáticas de los principales grupos insurgentes. Esta estrategia suponía un crecimiento de la base social y del orden político y militar del movimiento guerrillero,

³³ Op. Cit. Ruiz Restrepo y Vélez Cifuentes, p. 74.

como una manera particular de copar territorios, de empoderarse de manera más evidente, y quizás menos clandestina, en sectores excluidos urbanos; resaltando que surgen como respuesta a problemas de seguridad y convivencia.”³⁴

Las milicias surgen en Medellín en el año 1988 como una extensión del proyecto de la guerrilla para la ciudad. El cambio de estrategia de la guerrilla de pasar del territorio rural al urbano, suponía un crecimiento en el orden social y militar, como una manera particular de copar territorios. Para Ruiz y Vélez (2004) inicialmente la guerrilla considera la ciudad como un centro de abastecimiento y de aglutinamiento de simpatizantes, “aliándose con líderes naturales de la comunidad y se ligaban a las luchas estudiantiles y comunitarias, en defensa de reivindicaciones de todo tipo”³⁵; sin embargo, el acercamiento que permitieron los campamentos de paz a las ciudades facilitaron el estrechamiento de relaciones entre guerrilleros y las poblaciones de barrios de la periferia de Medellín.

El accionar de estos grupos se constituía básicamente en acciones en la confrontación con los que se consideraban “enemigos del pueblo, ya fueran bandas, drogadictos, desechables, ladrones, etc., en un comportamiento marcado por la pasión y el ejercicio del poder”³⁶. Las milicias urbanas empiezan a gestarse como un proyecto político de la guerrilla para fortalecer la relación con las comunidades. Sin embargo, este proyecto político no fue continuo por la incursión de otros grupos guerrilleros que eran más laxos en el reclutamiento de sus miembros, colocando

³⁴ Romero, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003”. Editorial Planeta Colombia, S. A. Iepri 2003, Bogotá, junio de 2003. p. 296.

³⁵ Op. Cit. Ruiz Restrepo y Vélez Cifuentes, p. 70.

³⁶ Op. Cit. Ruiz Restrepo y Vélez Cifuentes, p. 71.

mayor énfasis en entrenamiento militar relegando el factor político, lo que se constituye en una de las causas principales para la desarticulación de los movimientos milicianos y el cambio de bando de sus miembros a nuevas estructuras con enfoques de violencia más radicales.

Entre las milicias y las bandas hubo relaciones complejas que iban desde la confrontación armada directa hasta la alianza estratégica, pasando por cambios de bando de algunos actores. Todas estas circunstancias paradójicas contribuyeron a la emergencia de niveles imprevistos de violencia y al desgaste del proyecto miliciano. El agotamiento temprano de dicho proceso se ha atribuido a razones tales como: incapacidad para propiciar un proyecto político y social reivindicativo; disputas por el poder y contradicciones internas en el marco de los procesos de desmovilización; y despoltización e ingerencia en asuntos de la vida cotidiana, sin tener capacidad institucional y cultural para enfrentar la regulación social.

De acuerdo con Iván Darío Ramírez (2006) el surgimiento, empoderamiento y auge de las milicias coincide con la ofensiva del narcotráfico en el terreno militar y eso podría explicar, en parte, por qué durante esos años Medellín presentó los índices más altos de homicidios en todo el país, en toda su historia y en el mundo, con una tasa de 400 homicidios por cada 100.000 habitantes³⁷.

³⁷ Ramírez, Iván Darío. Medellín: Los niños invisibles del conflicto social y armado. Children in organized Armed violence COAV. En: <http://www.coav.org.br/>. Noviembre de 2006.

A mediados de la década de los 90, se evidencia una fragmentación de los grupos milicianos, que comienzan a independizarse de las organizaciones guerrilleras, para adquirir su propia estructura y su propio territorio. Desde allí algunos de éstos establecieron acuerdos con el gobierno municipal y nacional para finalmente desmovilizarse en 1994 y 1998; constituyendo cooperativas de vigilancia privada que son instrumentalizadas por el narcotráfico y el paramilitarismo, posteriormente.

Uno de ellos constituyó la transformación de la fuerza en una cooperativa de vigilancia, esto significó mantener a los actores legalizados y armados, bajo la responsabilidad estatal.

“La propuesta con la cual nace esta oficina de Asesoría de Paz y Convivencia, creada por la Alcaldía de Medellín en el año 1993, giró en torno a tres componentes: pacto de paz; acercamiento a la comunidad y con integrantes de bandas violentas; y resocialización, capacitación y apoyo para una vida nueva para los integrantes de los grupos armados. Inicialmente, la estrategia fue la de desarrollar para los actores armados, básicamente los grupos milicianos del ELN y las FARC, un proceso de reinserción a la vida civil con alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan.

El primer gran experimento concluyó el 25 de febrero de 1994 cuando 650 jóvenes – que se estima que esta fue una cifra inflada, para poder tener poder de negociación con la administración municipal- de las milicias populares del pueblo y las milicias populares del valle de aburrá, [...]; conformaron una cooperativa de vigilancia llamada Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios Coosercom. La misma que no fue acogida por otros milicianos. Muchos de quienes se acogieron a esta cooperativa fueron asesinados, en medio de luchas intestinas por poder, por

prestigio, por las armas o por ventajas económicas; o bien, sufrieron los efectos de una campaña de exterminio.”³⁸

La guerrilla que no se desmovilizó a mediados de los noventa, replanteó su estrategia respecto del proyecto con las milicias, generando una estrategia de mayor control y fragmentación, por un lado, en donde “se comienza entonces a hablar de la urbanización del conflicto armado interno, desarrollando acciones de orden estratégico como el control sobre corredores de acceso y sobre las redes viales y de flujos así como expresiones de poder político estableciendo formas de gobierno y administración de justicia, y controlando, de alguna manera, la distribución de bienes y servicios para la población”³⁹.

Por el otro, los grupos que no estaban inscritos dentro de un proyecto político determinado “establecieron otro cambio cualitativo muy importante: ya no se trataría de la simple confrontación entre bandas sino que estaríamos ante la confrontación de ejércitos, que buscaba desplazar al enemigo del dominio territorial, como objetivo de guerra”⁴⁰.

Estos grupos de acuerdo con lo anotado anteriormente, “reciben órdenes o directrices de los comandos centrales de los grupos insurgentes para realizar acciones de sabotaje, asesinatos selectivos y sobre todo realizar labores de inteligencia en las

³⁸ Op. Cit., Ruiz Restrepo y Vélez Cifuentes, p. 94.

³⁹ Op. Cit. Ruiz Restrepo y Vélez Cifuentes, p. 73.

⁴⁰ *Ibíd.*, p. 74.

ciudades; sin embargo, muchas de sus acciones están marcadas por la iniciativa propia, por sus evaluaciones tácticas”⁴¹.

Esta división va a ser un elemento predominante para la comprensión de la modalidad que se establecerá cuando entre en escena un nuevo actor, el narcotráfico; en este sentido, las milicias tienen una doble función con la aparición del narcotráfico ya que a la vez que alimenta su proyecto político, genera mayores brotes de violencia por el enfrentamiento no sólo de los grupos de narcotráfico, sino entre los mismos grupos milicianos que disputan la hegemonía por el territorio en la ciudad.

Es así como la propuesta del narcotráfico atrae a los jóvenes milicianos, ofreciendo alternativas de trabajo en la distribución de la mercancía o como sicarios por venganza o cobro de cuentas. El narcotráfico debilita los lazos existentes entre milicias guerrilleras y comunidades, al transformar su objeto social y político, a través de nuevas formas de violencia como el sicariato, que genera la crisis de violencia más alta en la ciudad en toda su historia.

Con las acciones realizadas por el Estado en contra del fenómeno del narcotráfico, estos grupos de jóvenes sicarios entran a formar parte de las filas de bandas como la Terraza, los Triana y la banda de Frank, que venían con una fortaleza y autonomía desde hace varios años y que entraron a ocupar los espacios vacíos

⁴¹ *Ibíd.*, p. 74.

que había dejado el narcotráfico, y que posteriormente fueron disputados por algunos bloques urbanos del paramilitarismo en la ciudad.

Así pues, para el año 1996 irrumpe en Medellín el fenómeno paramilitar a cargo de Carlos Castaño, como una forma de confrontar la fuerte presencia de la guerrilla urbana en la ciudad, cooptando los restos existentes de las bandas desmovilizadas y contratando las bandas organizadas que tenían presencia en la ciudad en la época. El vínculo existente entre el paramilitarismo y el narcotráfico facilita el equipamiento táctico y militar de quienes empiezan a formar parte de sus filas aliadas.

En la actualidad la presencia de la insurgencia a pesar de estar compuesta por grupos de milicias y de guerrilla urbana (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC-, Ejército de Liberación Nacional-ELN- y Comandos Armados del Pueblo), mantienen una presencia disminuida, tanto por la desmovilización de un grupo importante de milicianos en el año 94 y 98, por las operaciones de los grupos paramilitares en alianza con bandas delincuentes, y por las operaciones de la fuerza pública, especialmente en mayo y octubre de 2002 en la Comuna 13 de la ciudad, dónde se desató un operativo de más de 1.500 hombres para desalojar de allí a grupos milicianos. Estos grupos han perdido control de territorios y están disputando otros pequeños en la ciudad⁴².

⁴² Op. Cit., Ramírez, Iván. En este dato coincide con entrevistas realizadas con jefe de milicias y de otros grupos armados.

2.2.3 El Narcotráfico

A mediados de la década de los ochenta el fenómeno del narcotráfico se configura como una de las fuentes más recurrentes de la manifestación de la violencia en la ciudad. No solamente por la naturaleza ilegal de su actividad, sino que se asocia y relaciona con los efectos de desigualdad social existentes en ese momento en la ciudad. La figura más representativa de esta época se encarna principalmente en Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y otros narcotraficantes que conformaban la cúpula del “Cartel de Medellín”. Pablo Escobar tiene una repercusión muy importante en la magnitud del impacto de los efectos del narcotráfico, no sólo por ser oriundo de la ciudad y haber desarrollado sus actividades ilegales en la misma, sino que tenía una gran aceptación en algunos sectores desfavorecidos de la población de los barrios populares de Medellín.

De acuerdo con Ruiz y Vélez (2004) las manifestaciones de la violencia en Medellín, por efecto de la crisis que genera el narcotráfico, se pueden articular en tres sentidos:

“primero, dado que el negocio de la droga es ilegal y ofrece enormes ganancias, bien puede pensarse que los conflictos generados en su interior (por incumplimientos, engaños, delaciones, extralimitaciones, etc.), sea entre grandes capos, sea entre negociantes medianos y pequeños, tenderán a solucionarse mediante el uso de la fuerza. Segundo: el narcotraficante tiende a utilizar la fuerza contra las autoridades o personas que obstaculizan tozudamente su negocio. Tercero: al fomentar el consumo de droga [...] el narcotraficante estaría también contribuyendo a la violencia que ejercen los drogadictos ya para satisfacer sus necesidades, ya en momento de enajenación. Se seguiría, entonces, que si un conjunto grande de narcotraficantes escoge una ciudad de residencia de toda la

vida, cabría esperar en ella un aumento sustancial en las tasas de violencia homicida.”⁴³

En relación a la primera manifestación, es posible afirmar que el narcotráfico en sus inicios tenía un comercio a pequeña escala. La cocaína se fabricó y se negoció en grupos pequeños o familiares. Esta situación cambió al principio de los años ochenta, cuando la demanda por la cocaína en los Estados Unidos iba creciendo rápidamente.

Empezaron a organizarse pequeños grupos de narcotraficantes (entre ellos el de Pablo Escobar). Estos pequeños grupos evolucionaron rápidamente a gran escala, con cargueros y aviones. Los laboratorios pequeños se convirtieron en grandes complejos de producción, teniendo en algunos casos hasta cientos de empleados. Los narcotraficantes levantaron estructuras de organización muy estricta y especializada, como la investigación química, el blanqueo de dinero, o la búsqueda de redes y rutas ideales para el tráfico de estupefacientes.

El comercio se concentró alrededor de las ciudades de Medellín y Cali, donde surgieron dos grandes poderes: el cártel de Medellín, y el de Cali. A mediados de los ochenta, controlaban las tres cuartas partes del narcotráfico Colombiano, con un rendimiento de 4 a 6 mil millones de dólares⁴⁴.

⁴³ Revista Coyuntura Social, 1991: 5051. En: Ruiz y Vélez, p. 65.

⁴⁴ Boertsjeans, Jos. Una investigación sobre la política del gobierno de Colombia en su lucha contra el Narcotráfico. En: <http://www.let.uu.nl/spaans/tv7/2001/josboertjens.htm#histor>. Noviembre de 2006

“En la década de los 80 hay un corte con dos circunstancias decisivas: una, el surgimiento del narcotráfico de una manera organizada y alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcos, llegaron propuestas de organización de grupos armados delincuenciales a los barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar venganzas”⁴⁵

El cartel de Medellín, desde sus inicios puso a su servicio grandes redes de sicarios que en su mayoría “puso bajo su égida y servicio a grupos de pobladores desposeídos, convertidos en miembros de bandas barriales, y a otros jóvenes, muchos de ellos venidos de la misma insurgencia”⁴⁶.

El cambio cualitativo que ejerce el fenómeno del narcotráfico en la ciudad de Medellín en relación con la violencia establece un salto de las bandas y pandillas de jóvenes e incluso de los grupos milicianos a verdaderas organizaciones de criminales que destacaban por su poderío en armas y el profesionalismo en sus acciones.

En la segunda manifestación, el narcotráfico se fue instalando en la sociedad colombiana, incluso en el sistema político cuando a finales de los ochentas Pablo Escobar fundó su propio partido político. Pero la manifestación mas frecuente de la violencia que se da por parte del narcotráfico es la conformación de grupos de sicarios encargados de ajustar las cuentas pendientes entre los “señores de la droga”⁴⁷.

⁴⁵ EL COLOMBIANO. Medellín: 20 años de llanto en las calles, 30 de Abril de 2002.

⁴⁶ Op. Cit. Ruiz y Vélez, p. 65.

⁴⁷ Burma: Country in Crisis” en Asia Observer disponible en www.asiaobserver.com

Hacia finales de los años ochentas el cartel de Medellín declara una guerra abierta contra el Estado en busca de que se desactivara la extradición, en esta confrontación mueren personalidades públicas, policías, jueces y población civil entre otros a causa de las actividades del vicariato y diferentes atentados en la Ciudad de Medellín y el país.

Además de los datos anteriores el investigador Mauricio Romero resalta la guerra que los sectores del narcotráfico le declararon a la guerrilla cuando recuerda la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores)⁴⁸ conformado por los barones del narcotráfico luego del secuestro de Martha Nieves Ochoa Vásquez (hermana de los Ochoas, perteneciente a la cúpula del cartel de Medellín), por parte de un movimiento insurgente.⁴⁹

Coincide todo esto con auge de las operaciones militares de tipo comando que el narcotráfico llevó a cabo cuando se empezaron a cerrar los espacios políticos que había adquirido en años anteriores.

Otro antecedente importante lo protagonizó el denominado grupo de los “PEPES”, Perseguidos por Pablo Escobar, donde confluyeron expresiones de violencia provenientes del narcotráfico, organismos de inteligencia y seguridad del Estado, organismos de Inteligencia de los Estados Unidos, especialmente la DEA, hacia

⁴⁸ El Espectador. Domingo 05 de noviembre de 2000

⁴⁹ Op. Cit. Romero, Mauricio.

toda la estructura organizacional de Pablo Escobar. Los “PEPES” atacaron principalmente, a personas ligadas a la estructura de dicho cartel de Medellín, para presionar la aniquilación de “El Patrón”⁵⁰. Medellín fue el espacio donde este proceso tuvo su principal manifestación.

El Narcotráfico en la actualidad, aunque en comparación con épocas pasadas ha bajado el perfil, sigue siendo un factor desestabilizador, por su capacidad generadora de violencia y corrupción en todos los ámbitos político y económico. En Medellín, este factor contribuye en la década de los noventa, tanto al crecimiento del fenómeno paramilitar, como a la corrupción de miembros de los organismos de seguridad y de la política nacional;⁵¹ prueba de ello fue el escándalo denominado “proceso 8000” en donde se denunció la financiación con dineros del narcotráfico a la campaña política del expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998).

El Narcotráfico actualmente en Medellín, se configura en un factor que contribuye tanto al crecimiento del fenómeno violencia, como a la corrupción de miembros de los organismos de seguridad y políticos.

⁵⁰ Término usado por los subalternos del cartel de Medellín para referirse a Pablo Escobar Gaviria.

⁵¹ Pardo Cardona, Luis Guillermo. Experiencias de intervención en el conflicto urbano. Capítulo 3. “Perfil del conflicto Urbano en Medellín.” Medellín. Ediciones gráficas limitada. Primera edición, 2001.

2.2.4. Autodefensas y Paramilitarismo en Medellín

A pesar de que se puede percibir la existencia de las autodefensas desde 1968, época en la cuál existió en el país un contexto jurídico para la conformación legal de autodefensas, conocidas como “Las Autodefensas defensivas”⁵²; o las apariciones espontáneas de grupos conocidos como “escuadrones de la muerte” en los años ochenta, que realizaban “acciones de limpieza social”, caracterizados por un accionar tipo comando, clandestino, sorpresivo y retaliatorio que no implicaba organicidad permanente, propuesta política o disputa y/o control territorial.

En buena parte el proceso miliciano está ligado a iniciativas de autodefensas societal barrial frente a los crímenes cometidos por los delincuentes y las bandas en los barrios⁵³. Según estudios, este proceso arrancó como un mecanismo autónomo de las comunidades; luego se presentaron contactos con grupos insurgentes, que así potenciaron la posibilidad de llevar a cabo el sueño insurgente constituir bases políticas y militares permanentes de apoyo en la ciudad.

El proyecto paramilitar también se relaciona con un fenómeno constante en Medellín desde principios de los 90, la oferta de seguridad⁵⁴, tema fundamental

⁵² Revista Semana. Marzo 26 /2001 El desmadre de los paras: La ofensiva paramilitar se desbordó. Le está ganando a la guerrilla. El gran perdedor es el país. Pág. 24. 1983. de una alianza entre Rodríguez Cacha, su socio Fidel Castaño y los Ochoa (Que conformaron el MAS) con militares en el Magdalena medio surge un grupo de sicarios entrenados por mercenarios extranjeros. Matan dirigentes de izquierda a cambio de un área ‘despejada’ para el narcotráfico.

⁵³

⁵⁴ El tiempo, 23 de agosto de 2000. Bandas / Una docena de familias abandonaron sus hogares. Con armas consiguen casa.
⁵⁴ ROMERO, Mauricio. “Paramilitares y autodefensas 1982-2003” editorial planeta Colombia, S. A. IEPRI 2003, Bogotá, Junio de 2003. Págs.296.

para comprender la dinámica de la ciudad, que cruzado con el del territorio, pueden brindar claves para su comprensión.

“Desde el año 90-91 sabíamos que iba a entrar un grupo de paramilitares a la nororiental, se calculaba que aproximadamente vendrían entre 100 y 150 personas de este grupo. Para esta época las bandas trataron de ser organizadas por el ejército con el fin de enfrentar las milicias de la época. [...]”⁵⁵

No es sino a mediados de la década de los noventa cuando el accionar de las mismas, por un cambio cualitativo del proyecto paramilitar, frente al alcance de la guerrilla en las ciudades, decide articular su accionar en las zonas urbanas con el propósito de bloquear el suministro y paso de estos grupos hacia las zonas rurales. Es precisamente con el proceso de paz adelantado en el gobierno Pastrana, que se consolida la presencia de los paramilitares en las regiones y especialmente en diferentes ciudades del país, entre ellas Medellín.

La irrupción del paramilitarismo en la ciudad para mediados de la década de los noventa coincidió con tres momentos que permitieron su configuración:

1. La creación de las Convivir.

La creación de las cooperativas de seguridad marcó un momento importante en términos de: vigilancia y control social, contribución a la militarización de la sociedad, entendida como la proliferación de cuerpos armados (informantes,

⁵⁵ Entrevista realizada a un excombatiente del BCN.

policía secreta, grupos de choque, etc.) en función de la lucha contrainsurgente con fines tanto de seguridad como de dominación.

Lo que normalmente hacían estos grupos era combinar la conformación de frentes de seguridad rural, con acciones tipo comando o sicariales contra lo que ellos consideraban los blancos legítimos de sus ataques: dirigentes sindicales, estudiantiles, socialistas, como también otros sectores de la población civil.

“Después de las negociaciones del 94, se genera un repunte de las milicias del ELN y de las FARC. Empiezan a crecer y en el 95 se da la declaratoria de toma de Medellín, pero en el 96 se empieza a sentir la penetración paramilitar con comandos especiales. Estamos en el contexto de las convivir.

Coosercom es el laboratorio del proceso paramilitar. Sin embargo, no se puede afirmar que esta cooperativa miliciana haya degenerado en una organización paramilitar, fue el ensayo, fue un órgano paraestatal para observar como funcionaba el control de la comunidad con los propios reinsertados.

A partir de esa experiencia se retoma el concepto de las convivir, se hace una reevaluación de Coosercom para montar el cuento de las convivir.”⁵⁶

⁵⁶ Entrevista realizada a un excombatiente del BCN.

2. El escalamiento del conflicto armado en otras subregiones del departamento.

El cambio cualitativo de estos grupos radica en una transformación de la forma de organización y acción: ya no son grupos aislados de personas armadas, sino que se despliega un proyecto de ejército para-estatal que asume formas organizativas que son más propias de ejércitos consolidados. Ahí se da una gran expansión del proyecto paramilitar, pero hay que señalar que tienen unas particularidades regionales muy diferentes, es decir, desde el principio se conformó un movimiento federativo en el que, bajo la misma sigla AUC, confluyeron diferentes expresiones paramilitares locales con lógicas variadas de acuerdo a los intereses de las elites que los promovían.

Vale recordar lo que afirma Mauricio Romero en su libro *Paramilitares y autodefensas* en su momento:

“El copamiento de los cinturones periféricos de Medellín, en el occidente y el oriente, se constituye en una tarea estratégica prioritaria para los bandos del conflicto armado, debido al valor que tienen como corredores de acceso a Medellín, además de su cercanía con megaproyectos en construcción.”⁵⁷

El escalamiento localizado en otras subregiones de Antioquia, con el consecuente debilitamiento del dominio territorial de la insurgencia o su agotamiento parcial, permitió la gestación de una dinámica similar en la ciudad que se evidencia en la

⁵⁷ Op. Cit. ROMERO, p. 296.

idea de los Grupos de Autodefensa Urbana -GRAU (planteados en las primeras cumbres de las ACCU), que luego se traduce en la creación del Bloque Metro.

3. El afianzamiento de la relación bandas-narcotráfico-paramilitarismo.

El afianzamiento entre Bandas-narcotráfico-paramilitares se manifiesta particularmente en Medellín con el caso de la denominada banda de La Terraza, en la dinámica que se establece con esta banda hay una clave para el posterior copamiento de la ciudad por parte de los paramilitares. A la muerte de Pablo Escobar se produce un vacío en el control de toda la delincuencia y criminalidad en la ciudad, lo cual es aprovechado por algunos actores de la delincuencia común, anteriormente al servicio del cartel, en acciones afines a sus intereses. Esta banda fue una gran organizadora de la delincuencia en la ciudad y estaba ligada a los intereses de sectores del narcotráfico y a su vez realizaba acciones contrainsurgentes, incluso en el plano nacional e internacional⁵⁸.

La Terraza alcanza un dominio en la ciudad, que se despliega y reemplaza a la estructura del Cartel en la mayoría de las zonas de la ciudad. Paralelo a la actividad de la Terraza, y en un claro enfrentamiento con las AUC⁵⁹, aparece en Medellín la primera estructura claramente paramilitar, denominada Bloque Metro, el cual surge por orientación de la Dirección Nacional de las AUC.

⁵⁸ EL TIEMPO Denuncia/'Paras', Farc y ELN se disputan 200 bandas de Medellín. Una bolsa de 8.600 sicarios. Diciembre 03 de 2000.

⁵⁹ El colombiano, El terrorismo urbano: un nuevo estadio del conflicto. 26 de mayo de 2001. p. 9 a.

“Paulatinamente se fueron formando organizaciones mayores, que desbordaron los marcos barriales y adoptaron el control sobre comunas enteras e incorporaron pequeñas bandas, organizaciones y militantes de toda la ciudad; a estas últimas la policía las reconoció con el nombre genérico de organizaciones delincuenciales de comuna, se pusieron al servicio del mejor postor en cada coyuntura, han sido famosas las bandas de la terraza, los triana, la oficina, los pachelli, la marrana, etc.”⁶⁰

4. El Bloque Metro

La primera estructura claramente paramilitar que hace presencia en Medellín es el denominado Bloque Metro, el cual surge por orientación de la dirección nacional de las AUC mediante la conjugación de dos estrategias, la primera consiste en el traslado de combatientes formados en la zona nordeste de Antioquia con el fin de tener representación de hombres de la estructura en un claro intento por evitar que el modelo de autodefensas perdiera su norte.

La segunda corresponde a la cooptación, sometimiento y aprovechamiento de las bandas existentes en la ciudad por medio del terror. Al respecto Juan Carlos Garzón afirma que se utilizaron dos formas de violencia: indiscriminada y selectiva, “la decisión de utilizar una u otra depende del objetivo estratégico por alcanzar, la relación con la población, el calculo sobre el dominio que ejerce la parte por confrontar en determinada zona y la necesidad de utilizar el terror como forma de hacer que las personas se sometan al nuevo dominio o se desplacen.”⁶¹

⁶⁰ Op. Cit., Ruiz y Vélez, p. 82-83.

⁶¹ Op. Cit., Garzón, p. 97.

Aunque no hay claridad respecto al origen del Bloque Metro, si se podrían establecer las razones que llevaron a su conformación desde la iniciativa de la dirigencia nacional de la AUC, a partir de la recomposición del proyecto paramilitar en Medellín, en estos términos:

1. La consigna de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de desplegar un proyecto político y social, mucho más cercano al ideario paramilitar, en Medellín.
2. La asignación de cuadros del Bloque Metro, trasladados, a la ciudad con el fin de reclutar y entrenar personal.
3. La decisión de cambiar la correlación de fuerzas con respecto a las bandas y a las milicias guerrilleras, de tal manera que, las que antes trabajaban para la Terraza, pasaran a las filas de este bloque.
4. La resolución de tener una presencia más fuerte dentro del contexto urbano a través de estrategias de control territorial progresivo.⁶²

Este Bloque apeló a alianzas o sometimientos frente a los grupos de delincuencia común de la ciudad como mecanismo de garantía de seguridad, control social y ejercicio del poder militar en los sectores donde tenían su accionar⁶³. En gran parte por el deteriorado quebranto del proyecto de las milicias, el Bloque Metro es una combinación de combatientes ideológicos y militarmente cercanos al proyecto paramilitar y bandas de delincuentes que antes habían sido reclutadas por la

⁶² *Ibíd.*, p. 89.

⁶³ *El Espectador*. Iglesia denuncia crímenes de jóvenes por no alinearse con AUC, ELN o FARC. ‘Maquinarias de la muerte en Medellín’, 26 de agosto de 2000. Pág. 4 a.

Terraza. Sin embargo hubo bandas que enfrentaron esta ofensiva, principalmente la de Frank y la de Los Triana.

Para el año 2002, con el Bloque Metro, las Autodefensas, llegaron a controlar el 70% de los barrios en disputa en Medellín⁶⁴:

"Cuentan con centros de operaciones en Manrique, la nororiental (parte baja), Santa Cruz, la Noroccidental y la Suroccidental. Les falta parte de la Centroriental y por eso los combates con la Terraza, Frank y las milicias. La banda de Los Triana, en cambio, está en proceso de incorporación a las Auc"⁶⁵, "[...] en diferentes zonas de Medellín en las que la guerrilla y las autodefensas luchan por el control de barrios cuya ubicación consideran estratégica, debido a los corredores que comunican sus laderas con algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano, precisamente en las poblaciones del departamento donde los frentes rurales reclaman abastecimiento, víveres, munición y vías de ingreso y salida al Valle del Aburrá"⁶⁶.

Según los investigadores Ana Daza, Francisco Hurtado, et.al.⁶⁷, en la ciudad para el año 2001 se evidencia la presencia de agrupaciones armadas al margen de la ley, muchas de ellas dedicadas a la delincuencia común o prestar servicios a grupos mas grandes con mayor capacidad: "Parche – Combo – Banda - Milicia de apoyo - Milicia ligada al frente de guerra - Milicia territorial – Comandos -Círculos de estudio y apoyo – Paramilitares - Entrenadores de civiles - Mercenarios profesionales"⁶⁸.

⁶⁴ EL Colombiano Medellín: 20 años de llanto en las calles AUC controlan 70% de los barrios, dice informe de inteligencia. Por Elizabeth Yarce. Medellín. 30 de Abril de 2002.

⁶⁵ El Colombiano. Tema del día. Aumenta urbanización del conflicto armado. Carlos Alberto Giraldo M. 23 de septiembre de 2001.

⁶⁶ El Colombiano. Casas abandonadas: drama de barrios en disputa Por José Alejandro Hoyos. Medellín, 29 de Abril de 2002.

⁶⁷ Jaramillo A, Ana Maria, et. al. "En la encrucijada" conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa. Editorial Pregón Ltda. Primera edición. Julio de 1998. Medellín. Pág. 253

⁶⁸ Daza, Ana y Hurtado, Francisco. Experiencias de intervención en el conflicto urbano. Capitulo dos: "Jóvenes, tipos de conflicto, tipo de actores." Primera edición, 2001. Medellín. Ediciones graficas limitada.

Así pues, Medellín fue el escenario donde las autodefensas se lanzaron a la construcción de un proyecto paramilitar urbano, para lo cual fue necesario enfrentar a las bandas que se resistieron a su estrategia y desarrollar las bases para oponerse a las unidades milicianas cercanas a la insurgencia presentes en la ciudad, lo que sucedió entre 2000 y 2002.

El copamiento paramilitar urbano, esto es, la estrategia de dominio territorial de la ciudad, ha tenido algunas particularidades. La disputa no ha sido sólo sobre aquellos territorios de influencia guerrillera o miliciana sino también de bandas que manifestaron resistencia. La intervención no es sólo reactiva contrainsurgente sino también preventiva, es decir, se trata de garantizar la hegemonía en áreas afectadas por el accionar de bandas y en el conjunto de la ciudad, lo cual tiene como sentido el prevenir la expansión insurgente y obtener lucro económico. Todo esto responde a la búsqueda de apoyo social y de insertarse en la vida cotidiana como un agente de regulación y contención política⁶⁹.

El desarrollo de esta estrategia la lleva a cabo el Bloque Metro (BM), el cual tiene un accionar desde finales de la década de los noventa en la ciudad. Entre 1999 y 2000 otra estructura paramilitar denominada Bloque Cacique Nutibara (BCN) hace presencia en la ciudad. Sin embargo, rápidamente se dio un conflicto de intereses entre el bloque Metro y la nueva estructura creada por Don Berna, el Bloque

⁶⁹ Revista Semana. Agosto 12, de 2002. Pág. 48. Ciudad Tomada. Las autodefensas anuncian que pronto controlarán las comunas de Medellín las guerrillas se resisten. La batalla es nocturna y sangrienta. La gente vive amedrentada y aguanta como puede. Nadie los protege.

Cacique Nutibara, lo que repercutió en una confrontación armada entre ambas organizaciones.

2.3 BLOQUE CACIQUE NUTIBARA (BCN)⁷⁰

Es importante finalizar este capítulo mostrando los hechos de violencia y la evolución de la crisis que es generada por los diferentes actores en conflicto, con un recuento de lo que ha sucedido en la ciudad de Medellín en los últimos cinco años; es claro que siendo el centro de atención de esta investigación el BCN, se debe contextualizar el accionar de este agente en la crisis de la ciudad, sin embargo su profundización, orígenes y características más representativas se analizarán con mayor detalle en el capítulo 5 de este trabajo. En este sentido, aquí se presenta el último periodo de la crisis, en el período 2000-2005, en el cual se conforma el BCN.

El BCN retoma las experiencias de los anteriores movimientos armados ilegales que tuvieron presencia en la ciudad y de las autodefensas rurales de Córdoba y Urabá⁷¹. Trata de copar a todas las bandas de la ciudad, las pone a su servicio y luego de una intensa guerra con el Bloque Metro, termina siendo el gran actor paramilitar en la ciudad. Una de las particularidades dentro del desarrollo del conflicto en los últimos años con el BCN, quien adelanta una guerra en Medellín

⁷⁰ Durante el desarrollo de este trabajo se denominará el Bloque Cacique Nutibara con las siglas BCN.

⁷¹ El Colombiano, 17 de junio de 2002. p. 8 a ACCU prueba el proyecto urbano en Valle de Aburrá. Bloque Cacique Nutibara hará presencia en el noroccidente.

contra 4 ó 5 enemigos distintos y logra derrotar a las milicias de las FARC, del ELN, a los Comandos Armados del Pueblo (CAP); a las Milicias 6 y 7 en el barrio La Sierra; a las bandas de Frank y los Triana; y al mismo Bloque Metro⁷².

Según reportes de prensa⁷³, un año y medio después del surgimiento del BCN, el Bloque Metro empezó a enfrentar la estructura militar del naciente Bloque⁷⁴; esta situación se dio, en buena medida, por desavenencias entre algunos miembros de la cúpula militar de las AUC y algunos sectores del narcotráfico.

En septiembre de 2002 y ante la creciente manifestación de violencia que se presentaba en la ciudad entre los dos bloques de las autodefensas y su guerra con milicias y bandas en la ciudad, el Alcalde Luis Pérez presentó al Concejo de Medellín su política de seguridad y convivencia denominada “Compro la Guerra” cuyos principales componentes eran: 2000 policías más para la ciudad, la consulta popular para el desarme y la reincorporación a la civilidad, entre otros.

El soporte legal para el Programa de Reincorporación terminó siendo el Decreto 128 de 2003, el cual reglamentó la Ley 782 de orden público que facultó al Presidente para adelantar negociaciones con los actores armados con carácter político; dicho sea de paso, este decretó eliminó la condición política, incluyendo a los grupos paramilitares, y marcó procedimientos precisos para adelantar la desmovilización. Este marco legal, además de no incluir a grupos armados como

⁷² El Colombiano. Domingo 10 de Marzo de 2002. Medellín sí esta en disputa.

⁷³ EL MUNDO. Viernes 14 de Junio de 2002. Sucesos 6.

⁷⁴ El Colombiano, 1 de noviembre de 2002. Crece tensión entre ‘paras’ de Medellín.

las bandas, actor neurálgico en el conflicto armado en Medellín, sometió el carácter local del Programa para la Reincorporación a la Civilidad, a las directrices de orden nacional.

Las conclusiones aprobadas por la mayoría de los miembros del Concejo Municipal al finalizar el debate en el que se discutió acerca del Programa de Reincorporación a la Civilidad, son contundentes:

1. En materia de convivencia ciudadana la política de la administración ha fracasado. Se le hizo un llamado al redireccionamiento y, sobre todo, al mantenimiento de la continuidad de experiencias positivas en los programas de administraciones anteriores.
2. El programa de Reincorporación a la Civilidad ha sido manejado con lamentable improvisación y requiere de un acompañamiento de todas las dependencias del Municipio de Medellín⁷⁵.

En octubre de 2002 se da un hecho sin precedentes en la historia de las ciudades colombianas⁷⁶, y quizás de América Latina: la denominada Operación Orión⁷⁷, que consistió en la recuperación mediante un abrumador despliegue militar de los

⁷⁵ Concejo Municipal de Medellín. Acta # 430 de Junio 9 de 2003.

⁷⁶ El Tiempo. Alcaldes/ La guerrilla se ha especializado, el tiempo noviembre 2002. Medellín, el caso más grave LA OPERACIÓN ORION fue el primer gran enfrentamiento entre la fuerza Pública y los grupos armados que sucedieron en una ciudad.

⁷⁷ El Colombiano. Jueves 17 de octubre de 2002. Primer Plano 1-2. Combates/ por orden presidencial la Fuerza Pública entró a la Comuna 13. Batalla campal en Medellín. El Mundo. Jueves 17 de octubre de 2002 El Mundo La Metro. Los civiles llevaron la peor parte en el primer día de la operación Orión y el pavor de la guerra.

territorios de la Comuna 13⁷⁸ que aún estaban en poder de milicias guerrilleras de las FARC, ELN y los CAP⁷⁹.

Según estudios⁸⁰ adelantados a partir de testimonios de los habitantes, dicha operación fue exitosa en su objetivo de reducir el control territorial de las milicias, pero también creó las condiciones necesarias para el empoderamiento por parte del BCN de dicha zona de la ciudad.

“Varias voces fueron las que se empezaron a preguntar ayer en Medellín, del por qué los operativos de la Fuerza Pública en la Comuna 13 de Medellín son todos dirigidos a las milicias de la guerrilla, y por que no se sabe de detenidos, muertos, ni heridos de los paramilitares, que también están presentes allí. Un grupo de Analistas políticos y sociales le expusieron a El Tiempo algunas consideraciones que sugieren la falta de acciones contra las autodefensas.”⁸¹

Lo llamativo del fenómeno del Cacique Nutibara es que a pesar que libró una guerra contra diferentes grupos de bandas, milicias y delincuencia y se enfrento a la misma estructura del Bloque Metro, Al final logro conseguir el dominio militar de la mayor parte de la ciudad.

En este contexto, para finales del 2003 y enmarcado en la negociación que establece el gobierno central con los grupos de las Autodefensas Unidas de

⁷⁸ El Tiempo. Domingo 20 de octubre de 2002. Siete Días 3-10. Medellín/ enfrentamiento con milicianos dejan 18 muertos Comuna, bajo fuego.

⁷⁹ El Tiempo. Domingo 25 de agosto de 2002. Medellín. Conflicto/ no es tan fácil decir que el CICR entre los grupos armados de la ciudad La guerra se hace más cruel

⁸⁰

Revista Semana, Diciembre 23, de 2002. Edición 1.077-1.078, Guerra en las Calles, los colombianos sienten que la guerra se trasladó a las ciudades. ¿qué hay de cierto en eso? que tanto han crecido el poder de las guerrillas y autodefensas en las grandes capitales? Pág. 54. Por Alonso Salazar.

Colombia (AUC), se da la entrega y desmovilización de 868 jóvenes pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara.

Para concluir, en este capítulo se evidencia como en la ciudad de Medellín, a pesar de las diversas manifestaciones de la crisis socio-política desarrollada por los diferentes actores, la violencia ha mantenido una continuidad debido a que se configura como una estrategia eficiente para el control social y el acceso a los recursos en la ciudad.

Hoy el Bloque Cacique Nutibara se constituye en el instrumento donde confluyen las diferentes manifestaciones de los fenómenos que ha sufrido la ciudad como son las bandas, las milicias, el narcotráfico y el paramilitarismo, consolidando su hegemonía y propiciando el ambiente favorable para establecer las negociaciones con el Gobierno central, lo que conlleva a la desmovilización, como se profundizará en los capítulos siguientes.

CAPITULO III LA SEGURIDAD EN MEDELLÍN DESDE LOS PLANES DE DESARROLLO 1990-2003

El objetivo de este capítulo es resaltar el quiebre en las políticas públicas para el manejo de la violencia en la ciudad a partir de los estudios de violencia realizados en la década de los ochenta que resaltan los índices de inequidad social existentes. Este quiebre, de principios de los noventa, se caracteriza por la concientización de la elites políticas de la ciudad de que debe dársele un tratamiento social al conflicto, sin dejar de lado el uso de la fuerza militar y de la instrumentalización de la ley y lo punitivo. La presencia de esta conciencia se manifiesta en el diseño de políticas públicas en torno al tema de seguridad ciudadana; entendiendo que era necesario un tratamiento más social que atacara las causas de la violencia.

Este quiebre se manifiesta con mayor fuerza en los dos últimos períodos de gobierno de los alcaldes Luis Pérez Gutiérrez y Sergio Fajardo Valderrama, en donde confluyen los esfuerzos dados en años anteriores, que acompañados de operativos militares, como la operación Orión y Mariscal en el año 2000, facilitan el desarrollo de un ambiente propicio para la negociación de la paz en la ciudad, que se consolida con la subsecuente desmovilización de Bloque Cacique Nutibara.

La Constitución de 1991 establece que es obligación de los Alcaldes y Gobernadores presentar sus planes de desarrollo para direccionar las acciones que se realizaran durante el período de gobierno. En Medellín, debido a la crisis que afrontaba en la época, el tratamiento del tema de la seguridad y la convivencia ciudadana fue primordial dentro de cada uno de los Planes de Desarrollo de los seis gobiernos locales de la época (1990-2007).

Las políticas públicas propuestas para la ciudad en esta década se desarrollan en torno a dos enfoques: el primero se refería a la concertación, el pacto social y la convivencia; enfoque que buscaba propuestas efectivas que permitieran disminuir el impacto de las diferencias sociales y económicas existentes en la ciudad y que se configuraban como uno de los componentes, causas o razones de la violencia generalizada. El segundo enfoque era el discurso de la seguridad ciudadana, dirigido al tratamiento represivo de las manifestaciones de la violencia en la ciudad.

A continuación se entrará a analizar los diferentes planes de desarrollo en el tema de seguridad y convivencia propuestos por los gobiernos locales desde 1990 a la fecha, donde se presentarán las diferentes percepciones que las administraciones han tenido sobre este tema.

3.1 PREÁMBULOS

Las dos primeras administraciones populares de la ciudad, Juan Gómez Martínez y Omar Flórez Vélez, tenían un discurso greminal referente a la seguridad ciudadana y una percepción vaga de la dimensión que había alcanzado la violencia y los homicidios. Para finales del decenio de los ochenta -cuatrocientos y quinientos homicidios por mes, según datos oficiales-.⁸² Para la primera administración de Juan Gómez Martínez (1988-1990) la ciudad estaba atravesando una crisis que estaba determinada, básicamente, por el fenómeno negativo del narcotráfico. Las prioridades para esta administración eran, en consecuencia, recuperar la imagen de la ciudad y contrarrestar la información que ofrecían los medios de comunicación sobre la narcotización de la capital antioqueña. En términos concretos, en su programa de gobierno esta administración propuso una mayor acción en temas como el de “la seguridad” y el “orden público”, el auxilio a la rama jurisdiccional en investigaciones de contravenciones, delitos y diligenciamiento de comisiones, la recuperación del espacio público, el control a brotes de indisciplina social y el control a establecimientos abiertos al público⁸³.

⁸² Gómez Martínez, Juan. Alcaldía de Medellín. Hecho ya realidad. Balance de una administración actuante. Medellín, Imprenta Municipal, 1990, p. 38-39.

⁸³ *Ibid.*, p. 45.

Para el logro de algunas de estos objetivos, la administración municipal buscaba fortalecer su relación con la sociedad, a partir de “un nuevo concepto de participación”⁸⁴, con el cual se pretendía vincular a las juntas de acción comunal de la ciudad con actividades tendientes a la conciliación y resolución de problemas civiles y penales, a la realización de obras de infraestructura y de desarrollo y promoción comunitaria. Al mismo tiempo se desarrollaron campañas educativas como el mes del comportamiento ciudadano, cuyo objetivo central era “fomentar en forma masiva los valores ciudadanos, para darle a Medellín un ambiente más cálido, tanto en sus gentes como en su presentación” y apoyar “los programas que inculcan los valores y promueven las estrategias de beneficio común [...]”.⁸⁵

A continuación se hará un breve recuento de los diferentes planes de desarrollo de los gobiernos locales desde 1991 hasta 2007. Es importante aclarar que en lo correspondiente al periodo 1991-1998 se trabaja sobre el documento de trabajo del Profesor Juan Carlos Vélez Rendón, elaborado como producto de investigación para el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

3.2 EL PLAN DE DESARROLLO Y LA SEGURIDAD: GOBIERNO DE OMAR FLÓREZ VÉLEZ (1991-1993)

La administración del Alcalde Omar Flórez Vélez (1991-1993), concebía la violencia en Medellín como un problema fundamentalmente cultural multicausal,

⁸⁴ Op. Cit. Gómez Martínez., p. 10.

⁸⁵ *Ibíd.*, p. 89.

en estos términos diseñó un Programa enfocado a la construcción de civilidad como propuesta para la solución de conflictos⁸⁶. Para tal propósito se desarrolló un plan de acción social que gira alrededor de seis estrategias básicas⁸⁷:

1. La consolidación de estado de derecho, como refuerzo del vínculo entre las instituciones gubernamentales y la sociedad en general.
2. El establecimiento de relaciones de convivencia y tolerancia, que busca principalmente desarrollar acciones que permitieran la resolución de conflictos sociales desde las instancias gubernamentales, evitando las acciones de hecho.
3. El respeto por los derechos humanos y la solución pacífica y concertada de los conflictos, desde el fortalecimiento de los derechos humanos para la consolidación de la convivencia pacífica.
4. Una ética profesional para los organismos de seguridad, tratando de concienciar el uso de la fuerza en el accionar de las fuerzas militares solo en casos de extrema necesidad.
5. La suspensión de la dicotomía Estado-sociedad, buscando un acercamiento de las instituciones gubernamentales y la autoridad civil a la comunidad.
6. La generación de empleo y el impulso del desarrollo con justicia social, que buscaba disminuir las manifestaciones de violencia generadas por el fenómeno del desempleo y la inequidad.

⁸⁶ Flórez Vélez, Omar. “Propuesta para la convivencia ciudadana en Medellín”. En: Consejería Presidencial para Medellín su Área Metropolitana. Medellín: Alternativas de Futuro. Medellín, 1992. p. 21.

⁸⁷ Ibid., p. 21.

Para la implementación de estas estrategias se buscaba establecer y fortalecer diferentes formas de participación comunitaria, la promoción y creación de organizaciones no gubernamentales y la consolidación de las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales.

Dentro del desarrollo comunitario establecido por este gobierno se establecieron asesorías a las juntas de acción comunal con el fin de posibilitar la constitución de comités de conciliación en los diferentes barrios de la ciudad que presentaban problemas de gran magnitud, relacionados con violencia.

Dentro de este gobierno se observa como el tema de seguridad ciudadana aparece como elemento principal en el plan de desarrollo teniendo en cuenta que la estrategia utilizada estaba enfocada básicamente a un cambio cultural de los habitantes de la ciudad en relación al uso de la violencia, implementando mecanismos que impulsaban la solución pacífica y concertada de los conflictos y la participación comunitaria.

3.3 EL PLAN DE DESARROLLO Y LA SEGURIDAD: GOBIERNO DE LUIS ALFREDO RAMOS (1993-1995)

En la administración de Luis Alfredo Ramos (1993-1995) se hace explícito el tema de seguridad dentro del Plan de Desarrollo. Establece un diagnóstico sobre las principales causas de violencia en la ciudad y desarrolla un plan estratégico de

seguridad, el cual gira en torno a la idea de “seguridad ciudadana”, que representa la idea de la comunidad como gestora y garante de su propia seguridad⁸⁸. En este sentido, esta iniciativa se complementa con la propuesta de cambio cultural de Luis Alfredo Ramos, porque genera la adecuada disposición de los habitantes de la ciudad para poder implementar las estrategias que desarrollara este gobierno en torno a la seguridad como se verá a continuación.

El término de “seguridad ciudadana” está enmarcado dentro de los siguientes objetivos:

1. Concienciar en la comunidad la idea de que le corresponde a ella en primera instancia “las condiciones básicas para la seguridad de su entorno dentro de una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos cívicos”⁸⁹.
2. Se indican acciones que debe realizar el Estado para proteger los derechos de los individuos dentro de una concepción de justicia social.
3. Se plantea la participación concertada entre autoridades y comunidad para la formulación de políticas de seguridad ciudadana.
4. Se delega en el Estado las situaciones que excedan la capacidad de control de seguridad por parte de la comunidad.⁹⁰

⁸⁸ Ramos, Luis Alfredo. Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo para la ciudad 1993-1995. 1992, p. 2.

⁸⁹ Op. Cit. Ramos, Luis Alfredo., p. 21.

⁹⁰ *Ibíd.*

El discurso planteado por esta propuesta a la comunidad de ser garante de la seguridad se puso en ejercicio invitando a los ciudadanos a la práctica de los valores que caracterizan la cultura antioqueña. Se trabaja sobre la identidad cultural y la aceptación del compromiso como comunidad en la implementación y desarrollo de los planes locales para el desarrollo territorial. Se fomentó la idea de una cultura del reconocimiento del individuo y de la comunidad como base para la convivencia y el compromiso de seguridad ciudadana. Se invitó a la comunidad a reconocer sus necesidades y a incrementar su participación en el diseño e implementación de los planes y acciones de desarrollo enfocados a la comunidad.

Otro elemento importante en este gobierno fue la creación de la oficina de Asesoría de Paz y Convivencia en Medellín. Bajo las directrices del gobierno central se busca el acercamiento, a través del diálogo, con los diferentes grupos milicianos que ya tenían una presencia significativa dentro de la ciudad, con el ánimo de lograr su reinserción a la vida civil.

Con la oficina de Asesoría de Paz y Convivencia y con el proceso de reinserción de algunas milicias de la ciudad, la administración municipal empieza a reconocer entre sus interlocutores a grupos armados y para desactivarlos diseña formas de negociación política con las cuales intenta resolver problemas de violencia y de criminalidad en general.

Es de resaltar que la oficina de Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín estableció convenios con entidades y organismos internacionales que permitieron la intervención de éstas en el fortalecimiento y consolidación del enfoque social en el tratamiento de la violencia.

Durante este gobierno local el tema de la seguridad es prioritario porque desde un principio se reconoció el fenómeno de la violencia y de la inseguridad en la ciudad como eje central de las acciones que se iban a poner en marcha en el plan de desarrollo.

3.4 EL PLAN DE DESARROLLO Y LA SEGURIDAD: GOBIERNO DE SERGIO NARANJO (1995-1997)

La administración de Sergio Naranjo (1995-1997) a pesar de que reconocía los esfuerzos de los gobiernos anteriores en términos de seguridad, consideró que el manejo de la seguridad de Medellín debía continuar desde la represión oficial y el control de los delitos; su plan de acción es más amplio y reúne las propuestas de Omar Florez y Luis Alberto Ramos, es decir, que intenta dar seguridad en la ciudad atendiendo al aspecto cultural, a partir de la concientización de la comunidad en la participación de su propia seguridad, sin dejar de lado el énfasis que diferencia su programa, el cual se ve combinado con medidas coercitivas y el aumento de la capacidad represiva del delito.⁹¹

⁹¹ Naranjo Pérez, Sergio. Medellín: una ciudad para la modernidad. Enero de 1995, p. 7.

El propósito establecido en este gobierno, prácticamente giró en torno al establecimiento de “un pacto colectivo que está por encima de los partidos políticos, que va más allá de los intereses sectoriales, y que identifica responsabilidades y compromisos entre todos los participantes en el corto, mediano y largo plazo”⁹².

En relación con la seguridad, este gobierno realizó un diagnóstico en el que se identificaron factores que inciden en la criminalidad e inseguridad “excepcionalmente altas” de Medellín. Entre esos factores se destacaron el bajo nivel de calidad de vida, la crisis de legitimidad del Estado y de los partidos políticos, la pérdida de identidad colectiva, la impunidad, la corrupción administrativa y la presencia de movimientos populares armados. No obstante la identificación de estos elementos, se asumió que la inseguridad se derivaba de la acción delincencial de grupos organizados, de las milicias y la guerrilla, en la actitud violenta y agresiva de la población y en los accidentes de tránsito. En consecuencia, se buscó la reducción de la tasa de criminalidad y la represión del delito en el corto plazo y la prevención en el mediano y en el largo plazo.⁹³

En su programa Sergio Naranjo planteó que:

“Se ejecutarán acciones a partir de una visión integral que enfrente no sólo las manifestaciones coyunturales del delito sino también sus causas objetivas en las diversas causas de expresión del mismo, de tal manera que propicien la prevención y promuevan la resolución pacífica de conflictos y que generen la apertura de

⁹² Op. Cit., Naranjo Pérez.

⁹³ Naranjo Pérez, Sergio. Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo de Medellín, 1995-1997 (Versión aprobada por el honorable Concejo Municipal).

espacios de participación”⁹⁴.

Las acciones que empleó para el tratamiento de la seguridad en la ciudad estaban enmarcadas en cinco objetivos principales⁹⁵:

1. La represión y el control del delito, acciones encaminadas a disminuir los índices de violencia y criminalidad con las que recibe la ciudad en términos de delitos contra el patrimonio, el robo de vehículos, las muertes violentas y las lesiones personales.
2. La civilidad y cultura, acciones que mantienen la propuesta de participación directa de la comunidad en la consolidación de la seguridad en la ciudad, bajo el slogan de “la seguridad es asunto de todos”, donde se desarrollan actividades como el incremento de la policía de menores, el reclutamiento de bachilleres como patrulleros de policía en los barrios, se fortalece el papel que desempeñan las Comisarías de Familia en función de la solución de conflictos y promueve la creación de la figura de “promotores comunitarios” en los barrios para ayudar a la solución de conflictos y el establecimiento de la paz en algunos sectores de la ciudad.
3. Educación ciudadana, que implementa programas de incremento de cupos escolares en los barrios más afectados de la ciudad, intentando mantener a la población joven lejos de las calles y las acciones delincuenciales.

⁹⁴ *Ibíd.*, p. 70-71.

⁹⁵ *Op. Cit.* Plan de Desarrollo de Medellín, 1995-1997.

4. Solución pacífica de los conflictos, aquí se resalta el interés por la búsqueda de consensos, diálogos con los grupos armados, algunos de los cuales avanzan en experiencia de reinserción con la supervisión de la oficina de Asesoría de Paz y Convivencia, como una forma de mantener y fortalecer los acuerdos que se habían establecido con las milicias en el gobierno anterior.
5. Obras de infraestructura, manifestación clara del tipo de inversión social realizado en este gobierno.⁹⁶

Para el gobierno de Sergio Naranjo fue importante mantener esta combinación de acciones debido a los resultados obtenidos en los gobiernos anteriores en lo referente a la convivencia ciudadana a partir de la combinación de acciones coercitivas y el aumento de la capacidad represiva del delito, así como a la adopción de “medidas preventivas, la integración de esfuerzos oficiales y privados, la solidaridad ciudadana y la reconstrucción del tejido social fracturado por la violencia y golpeado por la inequidad”⁹⁷.

A pesar de los discursos de este gobierno de manejar una política integral de seguridad, se manifestó una desarticulación con las acciones directas de promoción social de la convivencia y predomina un énfasis sobre el manejo de la fuerza en el tema de la seguridad. Este énfasis se observó en la consolidación de las Cooperativas de Seguridad Comunitaria -Coosercom, que más allá de una

⁹⁶ Op. Cit. Plan de Desarrollo de Medellín, 1995-1997, p. 70-71.

⁹⁷ *Ibíd.*

política de seguridad eficaz, se constituye en un instrumento para disminuir los índices de violencia y criminalidad en la ciudad.

Es claro que para este gobierno la seguridad en la ciudad, aunque importante, no constituía el tema principal de acción en el plan de desarrollo, el cual se enfocaba más al establecimiento de las condiciones necesarias para consolidar un proceso enfocado al logro de ventajas competitivas que permitieran afrontar adecuadamente el proceso de apertura y lograra insertar la ciudad en una lógica de competitividad global, de tal manera que las acciones que se tomaron en el tema de seguridad social, estaban encaminadas a apoyar esta lógica.

3.5 EL PLAN DE DESARROLLO Y LA SEGURIDAD: GOBIERNO DE JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ (1997-2000)

La administración de Juan Gómez se caracteriza por su intención de generar un reconocimiento internacional de la ciudad a través de la promoción de esta, como una región potencialmente enfocada a los servicios, lo que no habría sido posible sin el trabajo de cultura y concienciación de los anteriores gobiernos.

La administración de Juan Gómez Martínez (1997-2000) enfocó su política de seguridad sobre un grupo poblacional marginal a partir de la consolidación de las relaciones del Estado, la comunidad y los sectores privados. Es así como se establece un programa para bilateral entre Colombia y el Banco Interamericano de

Desarrollo para apoyar la convivencia y seguridad ciudadana, dicho programa persigue seis objetivos principales⁹⁸:

1. Establecer un observatorio para el establecimiento de un sistema de investigación permanente que recoja información, realice procesamiento y análisis de datos sobre el fenómeno de la violencia.
2. Mejorar el acercamiento de la comunidad a las instituciones del gobierno encargadas de la paz y la convivencia, mediante el establecimiento de un programa que garantice las soluciones equitativas de conflictos vecinales, de policía y familiares.
3. Identificación de los comportamientos agresivos y pautas de crianza en la población de niños y jóvenes, desarrollado a través de la formación integral de recurso humano que permitiera generar una cultura de civildad principalmente en la población escolar.
4. Establecer una red de instituciones para apoyar la convivencia ciudadana, para tal fin se procedió a facilitar las condiciones e infraestructura necesaria para el funcionamiento de organismos de apoyo a la comunidad que permitieran el mantenimiento de la seguridad y la convivencia de las comunidades afectadas.
5. Apoyo institucional para la modernización, gestión y organización de la administración, a partir de la renovación tecnológica e inversión administrativa en seguridad y el establecimiento de la oficina de

⁹⁸ Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana. Plan de desarrollo de Medellín. 1998-2000. (Versión preliminar).

Convivencia Ciudadana, donde se centraliza todos los asuntos relativos al tema de la convivencia en la ciudad.

6. Seguimiento ciudadano, que busca la participación activa de la sociedad civil en la identificación, seguimiento y evaluación de los proyectos desarrollados por la Alcaldía.⁹⁹

Durante este gobierno la política de seguridad ciudadana se siguió inscribiendo en una política de control a la criminalidad que tuvo como eje fundamental la negociación con los actores armados. En uno de sus puntos fundamentales, la seguridad ciudadana se siguió inscribiendo en el marco de una política de control a la criminalidad que tiene como eje fundamental la negociación con los actores armados. La intervención de esta administración como mediadora en numerosos Pactos de no Agresión reveló la continuidad de una política que, en materia de disminución de índices de criminalidad, arrojó resultados positivos para la coyuntura. Sin embargo, a partir de esta administración estos pactos entre bandas se inscribieron en el contexto de la intermediación y control del paramilitarismo.

Es de resaltar que el componente estratégico referido a la política de seguridad de paz y convivencia en este gobierno constituyó uno de los pilares sobre los que construye el plan de desarrollo, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de la población y buscando hacer de Medellín “la mejor esquina de América”¹⁰⁰, a partir del avance en su desarrollo y competitividad.

⁹⁹ Op. Cit., Plan de desarrollo de Medellín. 1998-2000.

¹⁰⁰ Op. Cit. Plan de desarrollo de Medellín. 1998-2000.

En el proyecto de internacionalización de la ciudad y un nuevo modelo de Estado promotor, el problema de la seguridad ciudadana es entonces, el eje que articula la competitividad y la cohesión social, mejorando la calidad de vida y el desarrollo de los usos de la ciudad. Para este propósito, como para los demás de esta administración, se advierte la necesidad de buscar la concertación, cooperación y consenso de la administración con la comunidad y con el sector privado y hacer uso de la racionalidad como un instrumento básico para el logro de objetivos.

3.6 EL PLAN DE DESARROLLO Y LA SEGURIDAD: GOBIERNO DE LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ (2001-2003)

La Administración de Luis Pérez Gutiérrez, en el Plan de Desarrollo 2001-2003, “Medellín Competitiva”¹⁰¹, incluyó una propuesta que le cortó las alas al programa de Paz y Convivencia, implementando un programa denominado ‘Compro la guerra’,¹⁰² que sustentaba la posibilidad de que, mediante inversiones económicas resultaba más rentable, para personas vinculadas a los grupos armados, el retirarse y obtener un salario para realizar un trabajo honesto y re-socializarse. Lo anterior muestra la preeminencia de la racionalidad económica como propuesta a la solución del conflicto, cuyo objetivo principal, estaba centrado en poder estimular la dejación de armas en cerca de 3000 jóvenes de los 9000 que, para ese momento se calculaban tenían vínculos con los grupos armados ilegales de la ciudad.¹⁰³

A pesar del desmonte del programa de Paz y Convivencia, que volverá a tener protagonismo en el próximo gobierno, las diferentes tendencias que se habían manejado en los gobiernos anteriores se retoman mediante la propuesta que establece este gobierno, con el proyecto de “Compro la guerra”.

¹⁰¹ Alcaldía de Medellín. Medellín Competitiva. Plan de desarrollo 2001-2003. Hacia una revolución de la cultura ciudadana. Medellín, septiembre de 2001.

¹⁰² Pérez Gutiérrez, Luis, Alcalde Medellín. Compro la Guerra, Alcaldía de Medellín, Medellín, 14 de agosto de 2002.

¹⁰³ Op. Cit., Pérez Gutiérrez, Compro la Guerra.

Esta Administración de la ciudad propuso el desarrollo de una política para Medellín centrada en tres líneas fundamentales: la revolución de la cultura ciudadana, Medellín competitiva y primero el espacio público; que tenía como objetivo general “crear las condiciones para que la ciudad se constituya en el escenario donde se forman, en igualdad de condiciones, todos los ciudadanos para una democracia cimentada en la paz, la convivencia y la solidaridad”¹⁰⁴.

“La revolución de la cultura ciudadana”¹⁰⁵ se desarrolló a través un programa para la convivencia ciudadana y la seguridad, donde se combinaron dos líneas de acción básicas, que contenían el tratamiento que le va a dar la administración municipal al tema de la seguridad en la ciudad, estas fueron:

El primero, se refería a la construcción colectiva de la paz integral, mediante la formación y consolidación del consenso para el fortalecimiento del estado social de derecho,¹⁰⁶ la operativización de esta línea se estructuró a través de diez programas básicos:

“a) la formación de un nuevo ciudadano para la convivencia, b) la red de mesas barriales de convivencia, c) el servicio social universitario, d) la promoción de la convivencia en niños y jóvenes, e) la comunicación social para la convivencia, f) la justicia cercana al ciudadano, g) el observatorio de la violencia, h) la modernización institucional, i) el monitoreo y la evaluación de programas y, j) los Jueces de Paz y de Reconsideración”¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Op. Cit. Medellín Competitiva. Plan de desarrollo 2001-2003, p. 3.

¹⁰⁵ *Ibíd.*, p. 1.

¹⁰⁶ Op. Cit. Medellín Competitiva. Plan de desarrollo 2001-2003, p. 3, p.21.

¹⁰⁷ *Ibíd.*

El segundo objetivo, el de la seguridad, estaba orientado a disminuir las muertes violentas, el hurto de vehículos y el atraco callejero, crear las redes de buena vecindad y vincular a la comunidad a los procesos de promoción y consolidación de la cultura ciudadana de convivencia y seguridad. Los problemas específicos para la realización de este segundo objetivo eran: “a) más policías para la ciudad, b) sistema integral de seguridad, c) redes de buena vecindad, d) policía de barrio, e) apoyo a los organismos de seguridad y de justicia y, f) Medellín noche tras noche”¹⁰⁸.

Para la operativización del programa “Compro la guerra” el área metropolitana fue dividida en zonas donde el conflicto tuviera mayores factores de similitud para su solución, caracterizando cada una de ellas e iniciando un proceso de paz, de reincorporación a la civilidad y la inclusión social humanitaria. Los diálogos metropolitanos de paz, como se denominaron en este gobierno, tenían como objetivo acabar la violencia urbana, erradicar el secuestro y la extorsión, lograr el tránsito libre de los ciudadanos por el territorio y acabar con el miedo que existía en la ciudad.

Este programa estuvo acompañado por un grupo de abogados asociados a la Defensoría del Pueblo, con el fin de estudiar la situación jurídica de los reincorporados y proceder de acuerdo con la Presidencia de la República a definir un tratamiento especial para involucrarlos en el proceso urbano de paz.

¹⁰⁸ Op. Cit. Medellín Competitiva. Plan de desarrollo 2001-2003, p. 26-27.

Otra de las características que ofrecía este plan era la creación de escuelas especiales de reeducación que albergaran a los grupos reincorporados a la civilidad. El objetivo de estas escuelas era permitir el desarrollo de otras habilidades personales dentro de los reinsertados, que les permitieran desempeñarse en otras labores como “el mantenimiento de áreas deportivas, vigilancia de escuelas, cargos administrativos y atención ciudadana, vigilancia de infraestructura, reforestación industrial y otros menesteres dentro de los cuales no pueden excluirse los referidos a organismos de seguridad del Estado”¹⁰⁹. Este proceso de educación se realizaría con el acompañamiento de expertos académicos, politólogos, sociólogos, especialistas en aptitudes laborales y expertos en seguridad.

Dentro del proyecto se estableció el pago de un dinero mensual que se le otorgaría a los reincorporados, durante la etapa de capacitación que podría variar de seis meses a un año, o más. Los pagos se harían como pagos programados en fiducias, los cuales sólo se harían efectivos para el sostenimiento de sus familias o cuando finalizara el proceso de reinserción; se aclaró que se pagará solo “si hay paz territorial y entrega de armas”¹¹⁰.

A los reincorporados a la civilidad no se les permitiría estar en el mismo lugar donde accionaron, e inicialmente no tendrían participación dentro de los procesos

¹⁰⁹ Op. Cit. Pérez Gutiérrez, p. 35.

¹¹⁰ Ibid.

sociales que se adelantaran en los barrios a los cuales pertenecían, sin embargo, con el tiempo podrán volver a ejercer su liderazgo.

En suma, el proceso de reincorporación a la civilidad acogía a los reinsertados para que se les reeduce en actividades laborales y permitiera que los ciudadanos de bien trabajaran en paz y generen empleo; no buscaba entregar el destino de la sociedad a los que están por fuera de la ley. El programa estableció que “la mejor inversión social está definida en términos de seguridad y empleo. Esto significa un cambio radical en el concepto tradicional de lo denominado como inversión social”¹¹¹.

El programa comprendía el pago a informantes de la comunidad que monitorearan, investigaran y analizaran acciones por fuera de la ley en los barrios; estableció frentes de seguridad barrial a partir de las relaciones entre la comunidad y las autoridades de policía en 249 barrios con participación activa en materia de prevención de las actividades delictivas.

Entre otras estrategias que establecía el programa para el tratamiento del conflicto en la ciudad estaban:

- Las unidades permanentes de justicia, en donde se reunían miembros de todos los servicios de seguridad policial y judicial, para agilizar los trámites de la administración de justicia;
- Las mesas barriales de convivencia, donde se propendía por la participación comunitaria de carácter deliberativo;

¹¹¹ Op. Cit. Pérez Gutiérrez, p. 40.

- Los jueces de paz, como un mecanismo alternativo que buscaba la aplicación y el fortalecimiento de la justicia comunitaria a través de la intermediación de un líder escogido previamente por la comunidad para la resolución de conflictos individuales o colectivos que surgieran;
- Las casas de justicia, cuyo propósito era establecer programas preventivos que evitaran la judicialización de conflictos mediante arreglos directos y transacciones entre los afectados;
- Tecnología al servicio de la seguridad, la creación de un sistema integrado de seguridad, manejado por intermedio de Metroseguridad con el objetivo de incrementar el uso de herramientas con alto contenido tecnológico que permitieran una atención oportuna y eficaz a la ciudadanía en materia de seguridad y emergencias;
- El silencio de las armas.

La justificación de la implementación de este proyecto está basada en la factibilidad de la reincorporación a la civilidad de los diferentes grupos armados existentes en la ciudad por los distintos avances en relación a la inversión social ofrecidos en los gobiernos anteriores.

Es de resaltar que en este período de gobierno confluyen tres momentos que serían decisivos para que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, en el gobierno Fajardo, fuera una realidad.

1. El primer momento estuvo configurado por el inicio de las conversaciones del Gobierno Central de Alvaro Uribe Vélez con la cúpula militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a mediados del año 2000.
2. El segundo momento estuvo representado por la intervención por la fuerza por parte de la policía y el ejército en las Comunas 13 y 9 de la ciudad de Medellín, denominadas como “operación Orión” y “operación Mariscal”, cuyo objetivo principal era disminuir la fuerza que presentaban los grupos milicianos en estas zonas de la ciudad.
3. El tercer momento fue la configuración de la propuesta de Luis Pérez con su programa de “compro la guerra” que fue lo que consolidó una plataforma política, económica, jurídica y social, lo suficientemente sólida para la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.

3.7 EL PLAN DE DESARROLLO Y LA SEGURIDAD: GOBIERNO DE SERGIO FAJARDO VALDERRAMA (2003-2007)

La administración de Sergio Fajardo asume el gobierno de la ciudad después de la aceptación del Consejo de Medellín de la propuesta del gobierno anterior de “compro la guerra” y la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Fajardo, retoma la figura de la oficina de Paz y Convivencia y la denomina Paz y Reconciliación, en esta oficina recaen todos los asuntos concernientes al proceso de desmovilización que se adelanta en Medellín; sin embargo, este gobierno tienen otros elementos que se deben resaltar en el manejo de la seguridad, que complementan también el proyecto retomado de la administración anterior.

En la Administración de Sergio Fajardo Valderrama (2003-2007) el plan de desarrollo “Medellín compromiso con toda la ciudadanía”, tiene como objetivo “promover el desarrollo humano integral para el conjunto de las personas en Medellín, lo que significa la promoción y potencialización de las capacidades, oportunidades y libertades de esos ciudadanos y ciudadanas.”¹¹² Este objetivo se alcanzara mediante la implementación de cinco ejes o líneas de acción a saber: “1) Medellín Gobernable y participativa, 2) Medellín social e incluyente, 3) Medellín productiva, competitiva y solidaria, 4) Medellín un espacio para el encuentro ciudadano y 5) Medellín integrada con la región y con el mundo.”¹¹³

¹¹² Plan de Desarrollo para Medellín. Medellín compromiso de toda la ciudadanía. Sergio Fajardo Valderrama. 2003-2007.

¹¹³ Op. Cit. Plan de Desarrollo para Medellín. 2003-2007.

Medellín gobernable y participativa establece dos problemas a los cuales se va a enfrentar durante el gobierno¹¹⁴:

1. El primero, la deslegitimación del Estado que se identifica en el gobierno por medio de la politiquería, la corrupción, la desconfianza en lo público, la participación individualista y clientelista, la ausencia de cultura ciudadana y el no reconocimiento de la multiculturalidad. Su solución se plantea desde el desarrollo de los ciudadanos con una ética social, con una promoción del desarrollo cultural, con garantías para el ejercicio de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la gestión pública.
2. El segundo problema que busca solucionar esta línea estratégica del plan de desarrollo es la violencia, asociada a los grupos armados ilegales que se disputan el territorio, las altas tasas de homicidio, las armas y la justicia en poder de civiles, la inseguridad y el desplazamiento forzado. Estos problemas se atacarán mediante la prevención de conductas violentas y el facilitar la resolución de conflictos.

Para el tratamiento de estos dos grandes problemas que se identifican en el gobierno de Fajardo se plantean 4 estrategias transversales¹¹⁵:

1. Cultura ciudadana a partir de la transformación cultural de los habitantes de la ciudad.

¹¹⁴ *Ibíd.*

¹¹⁵ *Ibíd.*

2. La organización y participación ciudadana mediante el establecimiento de un sistema municipal de planeación y un sistema de promoción al control social.
3. La transparencia y el desarrollo institucional a partir del fortalecimiento de la capacidad administrativa de frente a la comunidad y el establecimiento de una pedagogía de comunicación pública y de cercanía a la comunidad.
4. Seguridad y convivencia, donde se desarrollarán estrategias en donde se implementarán políticas públicas para la prevención de la violencia, el manejo del espacio público para la convivencia, la modernización y transformación de los organismos de seguridad y justicia y la atención integral a la población carcelaria e infractora. Además a través del fortalecimiento de acuerdos con grupos mediante el programa de Paz y Reconciliación.

Las estrategias en términos de la política de seguridad y convivencia en el gobierno Fajardo se operativizaron mediante el establecimiento de cuatro programas enfocados en diferentes áreas¹¹⁶:

En relación con la prevención y los orígenes de la violencia se estableció:

“El programa de prevención de la violencia que buscaba incidir en la reducción de comportamientos agresivos y conductas transgresoras de la norma mediante el fortalecimiento de las relaciones familiares, la desactivación de la agresión intrafamiliar, durante la implementación de un plan desarme en toda la ciudad de

¹¹⁶ Op. Cit. Plan de Desarrollo para Medellín. 2003-2007. P. 19.

Medellín y el fortalecimiento de la Institucionalidad para la prevención y resolución de conflictos.

Manejo del espacio público para la convivencia, que buscaba organizar las actividades formales e informales que se llevan a cabo en el espacio público mediante programas de educación y control, por medio de la vigilancia y educación para el uso del espacio público, la organización y autocontrol de personas venteras en el espacio público y capacitación a los comerciantes formales e informales sobre su uso.”¹¹⁷

Para la dotación y actualización de las fuerzas del orden:

“Modernización, transformación de organismos de seguridad y de justicia que propende lograr un mayor acercamiento a la comunidad por parte de las instituciones del Estado, encargadas de la justicia, seguridad y convivencia, mediante la participación en la formulación de una política metropolitana de seguridad y convivencia, también por medio del fortalecimiento del observatorio para la convivencia, y el diseño e implementación de la unidad permanente de justicia y fortalecimiento de las relaciones institucionales. Apoyo al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y logística de las fuerzas armadas y la policía, así como también, el aumento del pie de fuerza en estas instituciones.”¹¹⁸

En relación a la prevención y control del crimen:

“Atención integral a la población carcelaria e infractora, busca proporcionar la reconstrucción del tejido social en las cárceles de la ciudad mediante la reivindicación de los derechos de las personas, a través de la intervención social en las cárceles, acompañado de una defensa técnica de las personas procesadas, al igual que el trabajo con población reincidente y finalmente, un apoyo para el fortalecimiento de la infraestructura y logística carcelaria que proporcione una manutención carcelaria adecuada de los reclusos en ellas.”¹¹⁹

De la misma manera estableció el programa de Paz y reconciliación en el cual:

“[Se] busca como objetivo principal estimular y apoyar los procesos de

¹¹⁷ Op. Cit. Plan de Desarrollo para Medellín. 2003-2007. p. 20-21.

¹¹⁸ Ibid., P 20-21.

¹¹⁹ Op. Cit. Plan de Desarrollo para Medellín. 2003-2007. P 20-21.

desmovilización y reincorporación de quienes se encuentran alzados en armas a través de un modelo de intervención que opere en el marco legal establecido por el gobierno. Este programa se lleva a cabo: primero, mediante el diseño e implementación de una estrategia de acompañamiento psicológico, social, jurídico y económico a las comunidades que reciben a los desmovilizados, y en segundo término, se pretende realizar un seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de desmovilización y reincorporación que se han llevado a cabo mediante la atención y el acompañamiento de los procesos de resocialización y reinserción desarrollados en la ciudad y que buscan mejorar la seguridad y la violencia.”¹²⁰

Aparte de toda la política de seguridad y convivencia que propone el gobierno Fajardo, es importante señalar que es en este gobierno donde se presenta la confluencia no solo del gran aumento en inversión social y cultura que se establece en este período, sino que coincide con los primeros efectos de los tres momentos que determinaron la ruptura del fenómeno de la violencia en el gobierno anterior.

De esta manera, es en el gobierno de Sergio Fajardo donde confluyen todas las condiciones necesarias y apropiadas de voluntad política, infraestructura y recursos económicos en la ciudad para la negociación de la paz, además enmarcado dentro de un proceso de negociación de paz del Gobierno Central con las Autodefensas, que se concreta en la instauración de la mesa de negociación el 20 de julio de 2003, en Santa fe de Ralito (Córdoba), lo que se materializa de manera definitiva en la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, tema que se tratará con mayor profundidad en el siguiente capítulo.

¹²⁰ Ibid., P 20-21.

CAPITULO IV LA NEGOCIACION DEL GOBIERNO CON LAS AUC: ASPECTOS GENERALES

Dada la naturaleza del conflicto que ha vivido la ciudad de Medellín y las condiciones históricas del mismo, la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara permite configurar la ciudad como un escenario propio para la implementación de diferentes alternativas de solución del conflicto.

Los capítulos anteriores ofrecen una visión particular del conflicto, en la ciudad de Medellín, y de los actores que lo caracterizan, sin embargo, es necesario comprender que más allá de un fenómeno aislado hace parte de una manifestación de violencia más amplia que ha venido azotando al país. De ahí la importancia de circunscribir este análisis en una breve descripción del protagonismo que viene teniendo el fenómeno de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en el desarrollo del conflicto colombiano y el proceso de desmovilización que se adelanta con el gobierno Uribe.

En suma, el análisis de negociación del gobierno central con las AUC permite identificar el marco general en el cual se van a enmarcar las dinámicas particulares de la ciudad de Medellín para que el proceso de desmovilización del BCN sea posible, que constituye en últimas el desarrollo del objeto de estudio del presente trabajo.

4.1 CONTEXTO LEGAL DE LA DESMOVILIZACIÓN

El actual proceso de desmovilización paramilitar se ha regido por la Ley 782 de diciembre de 2002, la cual modificó la Ley 418 de 1997, que exigía el reconocimiento del estatus político para todo grupo armado ilegal con el que se pensara realizar negociaciones de paz con el gobierno. La Ley 418 contempla el reconocimiento de amnistías e indultos para los miembros de los grupos armados que se considerara han cometido "hechos constitutivos de delito político". La Ley 782 se reglamenta mediante el Decreto 128 de 2003 que permite el reconocimiento de las AUC como actor válido para el inicio de las negociaciones de paz con el gobierno y su desmovilización ya sea grupal o individual, otorgando ciertos beneficios e indultos.

4.1.1 Decreto 128

Durante el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe la mayoría de los paramilitares y los guerrilleros desmovilizados, se han acogido al Decreto 128, promulgado el 22 de enero de 2003 y que regula la Ley 782. Dentro de los aspectos más importantes a resaltar de este Decreto se pueden mencionar:

Artículo 13, otorga beneficios legales y económicos a los miembros de grupos armados que se hayan desmovilizado. Entre esos beneficios se encuentran el

"indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria".¹²¹

Artículo 21, excluye de estos beneficios a "quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo a la Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios". Tales delitos se definen en la Ley 782 como "actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate". Sólo los combatientes que estén siendo sometidos a investigación o hayan sido condenados por porte ilegal de armas y pertenencia a un grupo armado ilegal pueden beneficiarse del Decreto 128.¹²²

Este decreto establece además el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), que verifica si el individuo en cuestión, es realmente miembro de un grupo armado ilegal y si sus deseos de desmovilizarse son auténticos. También proporciona a los combatientes desmovilizados documentos de identificación que certifican su situación.

De los artículos 13 y 21 se deduce, contrario sensus, que quienes no están siendo sometidos a investigación o no han sido juzgados tendrán derecho a estos

¹²¹ Amnistía Internacional. Colombia los paramilitares en Medellín: desmovilización o legalización. En: <http://web.amnesty.org-library-index>, 31 de agosto de 2005.

¹²² *Ibíd.*

beneficios legales, aunque puedan haber cometido abusos graves contra los derechos humanos o haber participado en ellos.¹²³

Las comprobaciones que se llevan a cabo sobre la posible implicación de los combatientes individuales en delitos no susceptibles de indulto en virtud del Decreto 128 son limitadas. No hay ningún requisito que establezca que deben iniciarse investigaciones sobre combatientes individuales sospechosos de abusos contra los derechos humanos, a menos que ya estén siendo sometidos a investigación judicial. Pero si un miembro de un grupo armado está siendo sometido a investigación por portación ilegal de armas o por pertenencia a un grupo armado ilegal, se pone fin a esa investigación y el combatiente pasa a optar a los beneficios del Decreto 128.¹²⁴

Los miembros y dirigentes de grupos paramilitares y guerrilleros pueden beneficiarse del Decreto 128 pese a que su grupo pueda seguir siendo responsable de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Puesto que el Decreto 128 permite la desmovilización individual, a diferencia de la colectiva, de combatientes ilegales, y no contribuye de ninguna manera a disolver de forma efectiva las estructuras paramilitares o guerrilleras.¹²⁵

¹²³ Op. Cit., Amnistía Internacional.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

Un paramilitar que se desmovilice no está obligado a proporcionar información sobre el grupo al que pertenecía (por ejemplo, datos sobre bienes o sobre delitos cometidos en el pasado). La única información que debe facilitar un individuo es su nombre, su huella dactilar y su historial dental.¹²⁶

El 21 de noviembre de 2003, el gobierno promulgó el Decreto 3360, que eliminaba el requisito de que los combatientes ilegales que desearan desmovilizarse como grupo fueran certificados por el CODA como prueba de su pertenencia a un grupo. El artículo 1 de este decreto establece que la pertenencia de un individuo desmovilizado a un grupo paramilitar se demuestra mediante la lista que presentan los dirigentes del grupo. La desmovilización del BCN fue la primera que se llevó a cabo en virtud de las disposiciones de este decreto.

4.2 ACUERDO DE SANTA FE DE RALITO

Antes de entrar a hablar de las Autodefensas Unidas de Colombia y el papel que tienen en el análisis de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín, es importante hacer una caracterización de este grupo desde su accionar político y militar.

Se entenderá como Autodefensas, acudiendo a la definición dada por William Ramírez Tobón (2005) lo siguiente:

¹²⁶ Op. Cit., Amnistía Internacional.

“Las AUC son pues una organización paramilitar contrainsurgente con fines paraestatales gracias a los cuales se permiten ofrecer un cierto tipo de alianzas que, en la medida de su realización, mimetizan y potencian su propio poder mientras pervierten y debilitan el del Estado. Pero así como esas eventuales y esporádicas alianzas no las hacen la parte oculta del Estado, sus diferencias con este no son tampoco simples imposturas para hacerse un disfraz político y social que busque cubrir sus rasgos de delincuencia común.”¹²⁷

A partir de 1997, cuando se instauran las Autodefensas Unidas de Colombia, como un proyecto político en contra de la insurgencia, con una estructura federativa de los distintos bloques existentes en el territorio nacional, con participación en el comando central, se manifiesta un incremento en los índices de violencia en aquellos territorios en los cuales tienen presencia.

Uno de sus rasgos fundamentales es la reacción que asumen frente al accionar de los grupos guerrilleros, el carácter paramilitar inicial de sus acciones contraguerrilleras dependían directamente de orientaciones emanadas del ejército nacional; de acuerdo con William Ramírez Tobón (2005) la expresión paramilitar de los diferentes grupos se manifiesta como un proyecto político en la medida en que sus operaciones van en

“expansión territorial [...] y determinan la puesta en marcha de un proceso de federalización y coordinación que dotó a los diferentes grupos armados de paramilitares de un plan estratégico de ampliación territorial y de un discurso político que los ha llevado a reclamarse como un actor político”¹²⁸.

¹²⁷ Ramírez Tobón, William. Autodefensas y poder local. En: El poder paramilitar. Editorial planeta y fundación seguridad y democracia. Santa fe de Bogotá, 2005. p, 145.

¹²⁸ Op. Cit. Ramírez Tobón, William, p. 143.

En 1997 cuando las Autodefensas se constituyen como un proyecto político, manifiestan el interés de expandir su proyecto a las zonas que están dominadas en el momento por los diferentes grupos guerrilleros. La negociación del gobierno Pastrana, en 1998, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la concentración de la mayoría de su ejército en la zona de despeje del Caguán, permite que las Autodefensas entren y se consoliden en los territorios anteriormente ocupados por este grupo guerrillero. Esto constituye, en buena medida, la forma en que el proyecto paramilitar se consolida en la mayoría del territorio nacional.

Esto se puede comprobar mediante las declaraciones de Carlos Castaño cuando establece lo siguiente,

“comenzamos a quitarle el control de los territorios de coca a la subversión, lo que aumentó el ingreso de dinero a las autodefensas. La FARC compraron diez mil fusiles y los ingresaron por Perú. Nosotros hicimos lo mismo con 4.500 armas provenientes de Centroamérica. Todo con plata del narcotráfico [...] actualmente ejercemos control y cobramos impuestos en 15.000 hectáreas de coca en el Putumayo, antes de las FARC y obtenidas en combate. También dominamos en el sur de Bolívar, donde antes lo hacía el ELN. Ahora controlamos cerca de 20 mil hectáreas sembradas por la subversión. En la zona del Catatumbo existen más de 30 mil hectáreas de cultivos ilícitos, la mitad controladas por las FARC y la otra mitad por las autodefensas”.¹²⁹

¹²⁹ Aranguren, Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá: editorial Oveja Negra, 2001, p. 208.

El incremento del accionar paramilitar durante esta época no sólo se da en términos de copamiento territorial, sino en el ejercicio de la violencia dentro de los territorios ocupados; al respecto Mauricio Romero (2004), al analizar el conflicto armado establece que

“para finales de los años ochenta y comienzos de los noventa la responsabilidad de las muertes, según organizaciones como la Comisión colombiana de juristas, recaía 50% en personal vinculado de distintas maneras con las fuerzas armadas, 25% en las guerrillas y 25% en los grupos de autodefensas y paramilitares. A finales de los noventa y comienzos del año 2000, la proporción de las responsabilidades cambia drásticamente. Entonces, el 50% es de grupos paramilitares y autodefensas, 25% es de la guerrilla, 25% de las fuerzas armadas. Hoy, la proporción vuelve a cambiar, 1% de las fuerzas armadas, 29% de la guerrilla y 70% de los grupos paramilitares y de autodefensas.”¹³⁰

Tanto la hegemonía y consolidación del proyecto político de las Autodefensas en el territorio colombiano, como su accionar violento, configuran el movimiento de Autodefensas como un actor válido para el establecimiento de las negociaciones con el gobierno Uribe.

Con la posesión del presidente Uribe en agosto de 2002, empieza a desarrollarse la política de seguridad democrática en el país, con el nombramiento del Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, encargado de facilitar las conversaciones con la cúpula militar de las AUC. Dentro de esta lógica, en noviembre del mismo año, el presidente solicita a las AUC, un cese de

¹³⁰ Romero, Mauricio. Los interrogantes de la desmovilización de las AUC. En: La desmovilización de las autodefensas: un caso de estudio. Cátedra Honrad Adenauer de Comunicación y Democracia. 2004. Pontificia Universidad Javeriana, Honrad Adenauer Stiftung.

hostilidades unilateral con el fin de dar inicio a conversaciones de paz con este grupo armado. Las Autodefensas declaran el cese al fuego unilateral comprometiéndose con dejar a la población civil por fuera del conflicto y poner fin al tráfico de drogas.

El 15 de julio de 2003 en Santa fe de Ralito, municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, el gobierno y la mayoría de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia firmaron el acuerdo de Santa fe de Ralito I, el cual marca el inicio formal de los diálogos. Los términos del acuerdo firmado fueron los siguientes según el informe de la misión de verificación MAPP/OEA en Colombia:

1. Se acuerda desmovilizar todos los combatientes de las AUC antes de finalizar el 2005.¹³¹
2. Las tropas de las AUC, y sus respectivos líderes, serán concentrados en un lugar específico de común acuerdo entre las partes.¹³²
3. Se declara el cese del fuego unilateral por parte de las AUC.¹³³
4. Se acuerda el apoyo al gobierno en sus esfuerzos contra el tráfico de drogas.¹³⁴

¹³¹ MAPP/OEA. Proceso de paz, CDDR paramilitar (apoyo internacional a la) misión de verificación MAPP/OEA en Colombia. Valoración conjunta comisionada por las embajadas de Holanda y Suecia.3 de octubre de 2005. p. 43.

¹³² *Ibíd.*

¹³³ *Ibíd.*

¹³⁴ *Ibíd.*

A partir de la firma del acuerdo, se inician acciones que permiten la desmovilización de algunos bloques de las Autodefensas, entre ellos el Bloque Cacique Nutibara, en noviembre de 2003; se va concentrando paulatinamente en Ralito la cúpula de las AUC y las tropas, en la medida que se van desmovilizando los bloques de las autodefensas, sin embargo, algunos bloques deciden no acogerse al acuerdo firmando, como el caso del Bloque Metro; este hecho no permite garantizar el cese unilateral del fuego por parte de todos los bloques de las AUC, ni consolidar el apoyo contra el proceso de narcotráfico en algunas regiones.¹³⁵

La zona de concentración de los desmovilizados, en Santa fe de Ralito, se constituye como un lugar de paso donde los integrantes de los bloques y los miembros de Estado Mayor negociador esperan a que se les defina su situación jurídica.

Con este proceso de negociación el gobierno de Álvaro Uribe busca el logro de los siguientes objetivos:

1. La eliminación de los niveles de violencia en algunas regiones y localidades del territorio nacional.¹³⁶
2. El reestablecimiento del Estado y un orden no violento en algunas regiones de país.¹³⁷

¹³⁵ *Ibíd.*, p.15.

¹³⁶ *Op. Cit.* MAPP/OEA. Proceso de paz. P.17.

¹³⁷ *Ibíd.*

3. La posibilidad de cambiar el accionar de uno de los actores armados del conflicto que de una u otra manera constituía un obstáculo frente a procesos negociación de paz con la guerrilla.¹³⁸
4. La desarticulación de las estructuras políticas, económicas y militares del paramilitarismo.¹³⁹

Entre el periodo de junio de 2003 y abril de 2004, los esfuerzos del gobierno se centran en la aprobación por parte del Congreso del proyecto de ley denominado “Justicia y Paz”; este proceso se dificultó por la presencia de tres propuestas de proyecto diferentes presentadas desde distintos sectores del gobierno, de sus opositores, organismos nacionales y actores internacionales, todos interesados en reglamentar el acuerdo establecido entre el gobierno y las AUC, dada su importancia histórica y política. A pesar de los problemas y el tiempo de discusión que llevó su análisis, el 21 de junio del 2005 el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley de “Justicia y Paz”, es revisada y aprobada por la Corte Constitucional y firmada por el Presidente de la República.

“Los principales elementos de la ley aprobada pueden resumirse de la siguiente manera:

El objetivo de la ley es facilitar los procesos de paz y de reincorporación individual o colectiva de miembros de grupos armados ilegales a la vida civil, al tiempo que se garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (Artículo 1º).

¹³⁸ *Ibíd.*, p. 17.

¹³⁹ *Ibíd.*

Se pueden establecer penas alternativas para beneficiar a aquellos que contribuyen a la paz, justicia, reparación y resocialización (Artículo 3°).

Derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y el debido proceso (Artículo 4 al 8)”¹⁴⁰.

Además se establece en relación al componente de verdad:

“Obligación para los excombatientes de confesar libremente los delitos y el declarar los bienes obtenidos ilegalmente para beneficiarse de esta ley (Artículo 17). Si surge nueva información posteriormente, los beneficios legales serán mantenidos si el acusado colabora para aclarar la información. Se puede decretar una pena adicional del 20% sobre la original (Artículo 25).

Después de la primera acusación, la Fiscalía tiene 60 días para investigar y reunir la evidencia y presentar cargos (Artículo 18).

Las sentencias de las penas alternativas serán mínimo de 5 años y máximo de 8 años de prisión (Artículo 30).”¹⁴¹

Se establece también en relación a los sitios de reclusión:

“El gobierno determina el lugar de reclusión (Artículo 31).

El tiempo de estadía en la zona de ubicación de ralito, cuenta como parte del tiempo de reclusión, sin exceder los 18 meses (Artículo 32).

El Estado garantiza los derechos de las víctimas, su protección (Artículo 38 al 42) y su reparación a través de varios mecanismos (individualmente, por parte de los miembros de los grupos armados, a través del fondo de reparación, o a través de los programas colectivos de reparación (Artículo 43 y ss.)).

El presidente puede avalar acuerdos humanitarios con los grupos ilegales armados (Artículo 61 y 62). La Ley 67 del 93, que regula la aplicación del artículo 10, numeral 3 de la Convención de la ONU, contra el tráfico de drogas narcóticas y sustancias

¹⁴⁰ Op. Cit. MAPP/OEA. Proceso de paz, p.38.

¹⁴¹ Op. Cit. MAPP/OEA. Proceso de paz. P.38.

psicotrópicas (20 de diciembre de 1988) mantiene plena vigencia (Artículo 72).¹⁴²

El gobierno central considera que este proyecto ofrece el mejor equilibrio entre justicia, verdad y reparación por una parte, y por otra, beneficios jurídicos para los grupos armados ilegales que deseen someterse a la justicia; además, el gobierno establece que el proyecto es aplicable para cualquier grupo armado al margen de la ley.

4.3 ANTECEDENTES DE LA DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE CACIQUE NUTIBARA (BCN)

Desde la perspectiva del proceso de negociación que se adelanta entre el gobierno central y las AUC, la ciudad de Medellín se constituye como el primer esfuerzo para la manifestación de la voluntad de las partes con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara el 25 de noviembre de 2003.

Antes de abordar las circunstancias que rodearon la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín, es importante, retomar y ampliar algunos aspectos de los capítulos II y III, acerca de la crisis y los grupos que la configuran, en especial, se hace necesario introducir el análisis a partir de la descripción del accionar del Bloque Metro, su relación y enfrentamiento con el Bloque Cacique Nutibara, para finalmente analizar cómo la desaparición del

¹⁴² *Ibíd.*, P.38.

primero y la hegemonía territorial del segundo consolidan las circunstancias propicias para que este movimiento urbano se desmovilizara.

4.3.1 El Bloque Metro

A partir de la conferencia de las AUC adelantada en el año 1997 se imparte la directriz desde el comando central de las Autodefensas de generar una estrategia que permita una mayor presencia en las ciudades. A partir de 1998 comienzan a aparecer las primeras acciones en los barrios de la periferia de la ciudad del denominado “Bloque Metro”. Las operaciones militares de este bloque estaban encabezadas por Carlos Mauricio García Fernández, alias “Rodrigo Franco o Doble Cero”, un ex oficial del ejército que era el encargado de diseñar las estrategias táctico militares de las AUC, y además, había tenido vínculos con el narcotráfico, lo que lo constituye como una figura destacada de los “PEPES”.

Para el año 2000, el Bloque Metro había captado a muchas bandas criminales en la ciudad, ubicándose principalmente en los barrios Zamora y Paris de la Comuna 5. Para dicha época las acciones de este bloque ya eran conocidas dado su accionar para someter a las pandillas, la cooptación de algunas, la contratación de otras y la exterminación de las que se resistieron; de la misma manera, su accionar se orientó a combatir a los grupos milicianos e insurgentes que tenían presencia en la ciudad, con el objetivo de copar territorios realizando actividades de patrullaje y toma simbólica a través de graffitis.¹⁴³

¹⁴³ Op. Cit., Informe de Amnistía Internacional. 2005. p.

Es importante mencionar que para el año 2001 el Bloque Metro era el grupo dominante de la ciudad, para el año 2002, según informaciones que circulaban en la ciudad el controlaba el 70% de la ciudad; sin embargo, un artículo de prensa cuestiona esta afirmación y sostiene que para entonces el Bloque no controlaba más del 30%.¹⁴⁴

Iniciadas las conversaciones de la cúpula de las AUC con el gobierno Uribe, se presentaron malestares al interior de algunos de los bloques, quienes se negaron a sentarse en la mesa de negociación. En el caso del Bloque Metro, aunque participó inicialmente en dichos acuerdos, Rodrigo Franco se retira de la mesa de negociación argumentando dos problemas:

“uno, el esquema de negociación es el de sometimiento a la justicia – desmovilización de tropas y cese de hostilidades- por parte de las AUC, sin margen para debatir sobre mecanismos que sirvan para la paz; y dos, el problema del narcotráfico con sus consecuencias de dineros ilícitos (los capitales que ha creado), contra reforma agraria (las tierras adquiridas por los narcos) y situación jurídica de los líderes de la AUC con pedidos de extradición de Estados Unidos”¹⁴⁵.

Esta negativa a continuar con la negociación, consolida un aislamiento político y militar del Bloque Metro, el cual se va a profundizar con el enfrentamiento que se va a dar con otro grupo de la misma organización denominado “Bloque Cacique Nutibara”.

¹⁴⁴ Op. Cit. Ruiz y Vélez, p. 76.

¹⁴⁵ El Tiempo, 18 de julio de 2003: p. 1 a 5.

“Las autodefensas de Castaño y Mancuso iniciaron con la administración de Uribe Vélez un proceso de negociación, que en comienzo involucra a todas las AUC, sin embargo algunos frentes, como el Bloque Metro que tiene influencia en el oriente y nordeste antioqueño además de varias comunas de Medellín y que cuenta con más de 1500 hombres, no aceptan estas negociaciones, pues como dice su comandante Rodrigo o doble cero: “hay dos nudos: uno, el esquema de negociación es de un sometimiento a la justicia –desmovilización de tropas y cese de hostilidades- por parte de las AUC, sin margen para debatir sobre mecanismos que sirvan para la paz; y dos, el problema del narcotráfico con sus consecuencias de dineros ilícitos (los capitales que ha creado), contra reforma agraria [...] y situación jurídica de las AUC con pedidos de extradición de Estados Unidos”. Por supuesto, este bloque es consciente de su aislamiento político y militar.”¹⁴⁶

4.3.2 El Bloque Cacique Nutibara

El Bloque Cacique Nutibara, encabezado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna o Adolfo Paz”, remonta sus inicios en la ciudad de Medellín alrededor del año 2001. Don Berna, quien había sido también figura destacada en los PEPES, instaló en la ciudad de Medellín una organización criminal conocida como “la oficina”, la cual se hizo cargo del negocio del narcotráfico después de la muerte de Pablo Escobar en 1993. Esta oficina se constituye también en una impulsora y promotora de las acciones adelantadas por la banda de “la terraza”, quienes realizaban operaciones de tipo delincuenciales como sicariato, ajuste de cuentas, secuestros y extorsiones, contratadas por “la oficina”.

¹⁴⁶ Op. Cit. Ruiz y Vélez, p. 79.

Tras una disputa con la “banda de la terraza”, Don Berna busca refugio en las Autodefensas de Carlos Castaño, momento en el cual accede al accionar estratégico y operativo de este grupo y decide adherirse a este proyecto político, conformando el “Bloque Cacique Nutibara”.

Este bloque, con el apoyo directo de las Autodefensas, se establece en Medellín, a mediados del 2001, como una forma de continuar los esfuerzos por erradicar las milicias en los distintos barrios. Su accionar urbano, se caracterizaba y diferenciaba por la “subcontratación” de bandas delincuenciales que se hacían cargo de las operaciones militares que el bloque desarrollaba en la ciudad, a diferencia de los bloque rurales que debían asumir la preparación militar, el sostenimiento económico y la dotación de armas, de sus propios ejércitos para el desarrollo de sus acciones.

4.3.3 El enfrentamiento de los Bloques Metro y Cacique Nutibara

La disputa entre el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro giraba en torno a las objeciones que Rodrigo Franco había establecido en relación al proceso de negociación, pero más que una posición política, éste criticaba fuertemente el creciente poder que venía otorgándosele al efecto del narcotráfico dentro de las AUC.

“En el año 2002, hombres al mando de doble cero mataron a dos importantes miembros del Bloque Central Bolívar BCB; cuestión que jamás le perdonaría el BCB

a Franco, el cual fue todo el tiempo protegido por Castaño. Esto comenzó a crear asperezas al interior de la organización paramilitar; que se incrementaron con el rechazo de la negociación por parte de Rodrigo y sus reiteradas denuncias acerca de las relaciones entre las Autodefensas y el narcotráfico.

Lo anterior se hizo más notorio cuando en un comunicado público, Rodrigo dijo que no se adhería a las “reagrupadas AUC”, hasta tanto ese grupo no fijara con claridad su rechazo al narcotráfico. “Cuando se anunció el cese unilateral del fuego, doble cero aseguró que Castaño, en cierta medida, había permitido el ingreso de personas vinculadas al tráfico de drogas a las AUC.”¹⁴⁷

En los primeros meses del 2003 las AUC intentan llegar a un acuerdo con el Bloque Metro para que se sentaran en la mesa de negociación en Ralito, pero al ver que esto no tenía la respuesta deseada, en mayo del mismo año empieza una arremetida violenta por parte de todas las AUC contra esta organización paramilitar. De esta manera, se dieron choques entre distintos grupos de las AUC y el Bloque Metro en “Amalfi, la Ceja y Santa Bárbara; en junio se extendieron a Segovia y el Santuario; en agosto se registraron en Santo Domingo y Yalí, en el nordeste antioqueño; finalmente la fuerza de Rodrigo terminó desplegada en San Roque, donde fueron desplegados”¹⁴⁸.

Tras meses de confrontación directa doble cero anuncia la desactivación de la rama militar del Bloque Metro, lo que le permite al BCN consolidarse como la única manifestación del fenómeno paramilitar en la ciudad. En mayo del 2004 doble cero

¹⁴⁷ Garzón, Juan Carlos. La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica. En: El poder paramilitar. Editorial Planeta y Fundación Seguridad y Democracia, Santa Fe de Bogotá, 2005. p. 90.

¹⁴⁸ Op. Cit. Garzón, P.90.

muere en Santa Marta, departamento del Magdalena, a mano de pistoleros no identificados.¹⁴⁹

En Medellín la confrontación se dio directamente con el Bloque Cacique Nutibara mediante un violento enfrentamiento con un saldo de numerosas víctimas. Gracias a que el BCN tenía mayor capacidad de financiamiento que le concedía una ventaja técnica en armamento, donde ganar la confrontación fue un objetivo alcanzable.

Esta confrontación y el posterior triunfo de las fuerzas de Don Berna establecen las condiciones propicias para que se consoliden tres situaciones que van a ser claves para el proceso de desmovilización del BCN:

- “1. La consolidación del Don Berna como líder paramilitar, posicionando las tropas que estaban a su mando; sobre todo en Medellín, donde posteriormente este comandante ejercerá un control importante –a pesar de que el Bloque Cacique Nutibara fue el primero en desmovilizarse.
2. Con la ofensiva del Bloque Metro, Castaño perdió cada vez más espacios, desistiendo de importantes territorios en Antioquia.
3. La ofensiva contra Rodrigo acercó las posiciones con el Bloque Central Bolívar, quienes fueron tomando cada vez un papel más destacado en la negociación, en detrimento del liderazgo que pretendía seguir ejerciendo Carlos Castaño.”¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibíd.*, p. 91.

¹⁵⁰ *Op. Cit.* Garzón, P. 90.

La consolidación de Don Berna como el único líder paramilitar en Medellín, frente a la pérdida de poder de Castaño en Antioquia, lo que debilita al Bloque Metro, facilita el posicionamiento del BCN en la ciudad, convirtiéndolo en un actor clave para el proceso de paz y de desmovilización del gobierno Uribe.

4.4 OPERACIÓN ORIÓN Y MARISCAL: UN PUNTO DE QUIEBRE

Dentro del proceso de paz adelantado por el gobierno Uribe con la cúpula de las Autodefensas y el proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, se configura un hecho sin precedentes en la historia de las ciudades, la “Operación Orión” y la “Operación Mariscal”, que consiste en el despliegue de un operativo militar de gran magnitud, en una zona tan densa como la comuna 13 de Medellín, donde las fuerzas del ejército y la policía, ingresan con vehículos blindados y helicópteros artillados, a bombardear y combatir directamente a grupos de milicias posicionados en el lugar.

En la Comuna 13 el Estado no tenía presencia de las fuerzas militares. La manera como se dio la apropiación del territorio en algunos sectores de la comuna y específicamente los procesos de invasión y ocupación ilegal, propiciaron las condiciones para que el Estado no tuviera una presencia significativa, tanto en lo social como en lo político y militar. Específicamente se hace referencia a barrios tales como “la independencia, nuevos conquistadores, el salado, villa laura y el veinte de julio”¹⁵¹.

¹⁵¹ Jiménez, Blanca Inés, et. al. Características históricas, económicas, sociales y políticas de la comuna 13. 2006. (Borrador).

La ausencia del Estado permitió que se conformaran en estos barrios periféricos de la ciudad, grupos como los CAP (Comandos Armados del Pueblo), quienes se encargaban principalmente de contrarrestar las acciones delincuenciales. Estos grupos encontraron una legitimidad en algunos sectores de los barrios ya que se concebían como referentes de seguridad. Posteriormente se visualizan en la zona grupos insurgentes de las FARC, el ELN y algunos de las AUC.

“Este territorio se caracterizaba por recibir un gran número de desplazados, como producto de las acciones del conflicto armado asociadas al campo, tales como amenazas, muertes, apropiaciones y desalojos.”¹⁵² Esta situación configura el posicionamiento de estos grupos al legitimarse como una propuesta de seguridad frente a la comunidad, en contra de las acciones delincuenciales del sector.

La “Operación Mariscal” tuvo lugar el 21 de mayo de 2002 a las tres de la madrugada, con una duración aproximada de doce horas y media, en los barrios el veinte de julio, el salado, las independencias y nuevos conquistadores. En este operativo participaron alrededor de mil efectivos, entre miembros de la policía, del ejército, el DAS, la FAC y funcionarios del CTI, la Fiscalía y la Procuraduría. La orden de la operación mariscal fue suscrita por los Brigadieres Generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón.

¹⁵² Franco, Vilma Liliana y Roldán Salazar, Hernando. Conflicto urbano de la comuna 13 de la ciudad de Medellín. Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellín, 2002. p. 23.

Esta operación mariscal tuvo como objetivo principal el registro y allanamiento de 34 viviendas, para “hacer efectivas órdenes de captura contra personas procesadas por hurto, lesiones personales, homicidios, acceso carnal, actos sexuales con menores, abuso de confianza, inasistencia alimentaria y concierto para delinquir.”¹⁵³ Con el propósito de “capturar en flagrancia y si es el caso reducir en combate a miembros de las milicias populares y otros generadores de violencia.”¹⁵⁴

La “Operación Orión” tuvo lugar a la medianoche del 16 de octubre del 2002, finalizando en diciembre del mismo año. En el despliegue de esta operación participaron fuerzas especiales del ejército y la policía, con el respaldo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana. Con el apoyo del DAS, la Fiscalía y la Procuraduría avanzaron haciendo allanamientos en diferentes lugares para la captura, “entre el 16 y el 28 de octubre, a 229 personas de las cuales la Fiscalía dictó medidas de aseguramiento a 82.”¹⁵⁵

Con esta operación se inició el asalto final contra las milicias del ELN y de las FARC, y en contra de los comandos armados del pueblo y las autodefensas que mantenían bajo control esta zona del centro occidente de Medellín. A medida que las fuerzas del Estado iban avanzando territorialmente, se fueron estableciendo estrictos controles en las entradas de los barrios que eran penetrados, con el fin de evitar que las milicias volvieran a reconfigurar su accionar en estos territorios.

¹⁵³ Op. Cit. Jiménez, Blanca Inés, et. al. P. 17.

¹⁵⁴ CINEP & Justicia y Paz, Noche y niebla, caso tipo No. 2 Comuna 13, la otra versión. Banco de datos de violencia política CINEP & Justicia y Paz, mayo de 2003.

¹⁵⁵ Op. Cit. CINEP., p. 18.

De esta manera, las operaciones “Mariscal y Orión” manifiestan la expresión política de seguridad democrática implementada por el gobierno Uribe, con el fin de generar un fortalecimiento de las instituciones estatales en las zonas que carecían de la presencia del Estado. “El objetivo central de esta política, según lo prescrito por el plan de desarrollo, y lo inferible desde sus ejecutorias prácticas, es la derrota de la guerrilla, cometido para cuyo logro se han impuesto diversas tácticas y estrategias, entre las cuales, como resalta Maria Teresa Uribe de Hincapié está “el acosarla en sus zonas de refugio, de cortarle todos sus eventuales nexos con la población desarmada, de aislarla de sus corredores de circulación y de sus zonas de abastecimiento y reclutamiento, así como de los recursos económicos provenientes del tráfico de drogas, de los secuestros y de las extorsiones.”¹⁵⁶

Estas operaciones ponen fin al control de la guerrilla sobre estas zonas permitiendo al Estado recuperar su control sobre las zonas antes dominadas por estos grupos al margen de la ley. “Estas operaciones permitieron generar un sentimiento de seguridad dentro de la comunidad con el propósito de legitimar a las instituciones estatales y los mismos operativos.”¹⁵⁷

¹⁵⁶ Op. Cit. Jiménez, Blanca Inés, et. al., p. 20, 21.

¹⁵⁷ Ibid., p. 18.

4.5 LA DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE CACIQUE NUTIBARA

A partir de lo anterior, es posible constatar que en la ciudad de Medellín se concentran tres momentos específicos que son los que van a dar lugar en concreto a la posibilidad de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.

Estos tres momentos se pueden caracterizar así: primero, la instauración de la mesa de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la cúpula central de las Autodefensas Unidas de Colombia, el segundo momento es la consolidación hegemónica del accionar del BCN como único grupo de las autodefensas en la ciudad con la desarticulación del Bloque Metro y el tercer momento, es la fuerte arremetida militar por parte de las fuerzas estatales para hacer presencia en las zonas de mayor influencia de los grupos guerrilleros en la ciudad. De esta manera se consolida el ambiente propicio para la desmovilización de la estructura de autodefensas en Medellín.

El 25 de noviembre de 2003 después de 4 meses de haberse instaurado la mesa de negociación entre el gobierno y los integrantes de la cúpula de las AUC en Santa Fe de Ralito, se desmovilizan en la ciudad de Medellín 868 jóvenes combatientes del denominado Bloque Cacique Nutibara. A pesar que existen diferentes datos con relación al número de personas desmovilizadas del BCN, el dato aquí referenciado tiene como fuente el programa de Paz y Reconciliación de

la Alcaldía de Medellín, quien ha sido la encargada de ejecutar el programa de reinserción desde el 2003¹⁵⁸.

El acto de desmovilización se llevó a cabo en el Palacio de Exposiciones de la ciudad de Medellín, con transmisión en vivo por los canales nacionales; en este acto se hizo la entrega de las armas y se elaboró el registro de las personas que ingresarían al programa. Los desmovilizados del BCN se dirigieron al Centro Nacional de Convivencia y Paz, ubicado en el municipio de la Ceja, Antioquia, que sería su centro de reclusión y capacitación temporal¹⁵⁹.

En el centro de la Ceja los desmovilizados recibirían capacitación en distintas áreas así como un acompañamiento psicosocial para iniciar un proceso de resocialización. El centro organizaría una base de datos que permita identificar aquellos desmovilizados que podrían acogerse sin problemas a los beneficios brindados por el programa.

La capacitación de los jóvenes se da en tres áreas: Estado, Democracia y Cultura de Paz, las cuales iban a dictarse por 16 talleristas (psicólogos, politólogos, filósofos, sociólogos, en otra palabras un equipo interdisciplinario de profesionales) contratados por el Programa de Paz y Reconciliación a través del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán.

¹⁵⁸ Alcaldía de Medellín. Programa paz y reconciliación. Regreso a la legalidad, 2004. Informe de avance.

¹⁵⁹ Alcaldía de Medellín. 2004. Experiencia desmovilización del Bloque Cacique Nutibara AUC.

De acuerdo con Arturo Guerrero (2004)

“La tropa desmovilizada está compuesta por muchachos con un promedio de 22 años, aunque hay algunos de más edad. Cada uno tiene dos o tres niños nacidos en las comunas de Medellín. No tienen ninguna preparación política; la única preparación política evidente es que se saben y reconocen como antiguerrilleros y se consideran héroes. Creen que el país debe estar agradecido con ellos porque la guerrilla, gracias a ellos, está replegada, y tiene claro que son antisubversivos y antiguerrilleros. Pero de ahí para adelante se dan la mano ideológicamente con los guerrilleros, en su sentimiento visceral contra el establecimiento que les ha dado exclusión, pobreza, miseria, violencia.”¹⁶⁰

La mayoría de los jóvenes desmovilizados en la Ceja se caracterizaban porque habían cambiado de bando dentro de las dinámicas del conflicto que había padecido la ciudad. Unos habían estado en el ejército, otros en las milicias, otros en la guerrilla o en la policía y ahora todos eran paramilitares.

4.6 MODELO DE INTERVENCIÓN Y REGRESO A LA LEGALIDAD

Para lograr cumplir con los objetivos propuestos en el proceso de reinserción el gobierno de Sergio Fajardo recoge el modelo de “compro la guerra” del gobierno local anterior, planteando un modelo de intervención para los desmovilizados de cualquier grupo armado organizado al margen de la ley que estén dispuestos a entrar nuevamente a la condición de Legalidad. Se configura nuevamente el

¹⁶⁰ Guerrero, Arturo. Una semana con el Cacique Nutibara. El factor humano. En: La desmovilización de las autodefensas un caso de estudio. Cátedra Konrad Adenauer de Comunicación y Democracia, 2004. Pontificia Universidad Javeriana y Konrad Adenauer Stiftung.

Programa de Paz y Reconciliación como la oficina encargada de administrar el modelo y su puesta en marcha desde la Alcaldía.

Este programa está ligado a la estrategia de seguridad ciudadana y reforma de las fuerzas policial y judicial del plan de desarrollo de Sergio Fajardo bajo la responsabilidad del secretario de gobierno del municipio, Alonso Salazar. En este sentido, es importante recalcar que el Programa y el modelo aquí expuesto es financiado ciento por ciento por el Municipio, representando el 0.34% del presupuesto municipal.¹⁶¹

El objetivo de este modelo de desmovilización es desarticular los grupos armados al margen de la ley, que habían afectado gravemente la seguridad en Medellín, con el propósito de disminuir los niveles de violencia y aumentar los niveles de seguridad existentes en la ciudad.

En este sentido, el modelo de intervención utilizado para la desmovilización del BCN, (ver esquema del modelo de intervención “regreso a la legalidad”)

“implementado por el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín contempla varios ejes de acción que propende facilitar el regreso de los desmovilizados a la legalidad y fomentar la presencia del Estado en las comunidades. El programa pretende lograr los objetivos planteados mediante la implementación de los siguientes 7 ejes del modelo: Educación y capacitación, Acompañamiento Psicosocial, Salud, Seguridad, Comunicaciones, Monitoreo y evaluación, Verificación.”¹⁶²

¹⁶¹ Op. Cit. Plan de Desarrollo para Medellín. 2003-2007.

¹⁶² Alcaldía de Medellín. Programa Paz y reconciliación. Modelo de Intervención 2004.

Grafica 1. Modelo de Intervención: Regreso a la Legalidad.



Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

A continuación se desarrollará cada uno de los ejes de acción definidos en el Modelo de Intervención¹⁶³:

EDUCACION Y CAPACITACION: El objetivo principal de este eje es proporcionar los insumos y herramientas cognoscitivas para que los desmovilizados tengan la

¹⁶³ Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

oportunidad de realizar o terminar sus estudios básicos de primaria y bachillerato, técnicos y profesionales que les sean de utilidad para la generación de un ingreso económico.

ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL: Este eje del programa tiene como objetivo principal el de fortalecer las relaciones de confianza entre los “beneficiarios”¹⁶⁴ del mismo, sus familias y las comunidades, por medio de la atención psicológica individual, familiar y comunitaria. El acompañamiento se llevó a cabo por medio de diferentes actividades como son: Talleres de capacitación en desarrollo humano, entrevistas directas (para determinar el perfil psicológico de los desmovilizados), atención psicológica en clínica (para beneficiarios directos, familia y la comunidad), actividades de integración comunitaria con orientadores sociales y convenios para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

SALUD: El programa de Paz y Reconciliación otorga afiliación al beneficiario y a su grupo familiar al régimen contributivo y subsidiado de salud.

SEGURIDAD: En coordinación con los diferentes estamentos municipales, el programa de Paz y Reconciliación propicia las condiciones de seguridad adecuadas para garantizar el éxito del proceso de paz en la ciudad.

¹⁶⁴ Término utilizado por el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín para referirse a los excombatientes reinsertados del Bloque Cacique Nutibara

COMUNICACIONES: Mediante diferentes estrategias de comunicación se construyen canales que permitan la interacción directa de la comunidad y otras instituciones nacionales e internacionales con el fin de adquirir una retroalimentación que enriquezca el accionar del programa.

MONITOREO Y EVALUACIÓN: A través de este mecanismo, que consiste en la elaboración y aplicación de instrumentos de medición de las diferentes áreas propuestas por el programa, se alimenta la base de datos y se mantiene la información disponible de forma organizada, actualizada y con fácil acceso a los procesos que se estén llevando a cabo.

VERIFICACION: Con el fin de verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción, que en el marco del proceso de paz se han establecido por el gobierno, algunos entes nacionales e internacionales establecen misiones de acompañamiento a los procesos de paz.

El análisis del modelo y los resultados de su implementación en el proceso de desmovilización del BCN se analizarán en detalle en el siguiente capítulo.

CAPITULO V EVALUACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE DEMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE CACIQUE NUTIBARA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

El proceso de desmovilización del BCN en la ciudad de Medellín estuvo a cargo del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, como ente encargado de la operativización del proceso de reinserción en Medellín de las personas desmovilizadas. Este proceso tuvo acompañamiento de la Organización de Estados Americanos OEA organismo multilateral que cumple el papel de acompañamiento y observación del proceso de desmovilización en el país. Quien se encarga del seguimiento y monitoreo del proceso llevado a cabo con el BCN; es la Organización Internacional para las Migraciones –OIM-, organismo multilateral que hace el seguimiento y lo presenta a través de cuatro informes de percepción comunitaria en los cuales se presenta de manera sistemática el seguimiento y evolución de las actividades programadas por el programa de Paz y Reconciliación en el proceso de desmovilización de estos jóvenes antes pertenecientes al BCN.

De esta manera, es importante para esta investigación no sólo tener acceso a dichas fichas de percepción comunitaria, sino a los datos que ellas presentan, no se puede pensar en el análisis del impacto de este proceso sin tener aproximaciones claras al mismo; es posible que el instrumento como tal no determine de manera exacta la situación que acontecía en cada época señalada, sin embargo, son documentos oficiales válidos sobre los cuales la oficina de Paz y Reconciliación hacía medición del impacto del programa en

este caso particular. En este sentido, a partir de los informes presentados por la OIM, para medir el impacto del proceso de paz y reconciliación, en los desmovilizados y en la sociedad, y de las entrevistas realizadas en esta investigación, como un instrumento de apoyo metodológico válido para complementar la información oficial del proceso, se presentará en este capítulo un análisis de los resultados del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín.

Los documentos de la OIM tienen como propósito analizar la percepción de las comunidades en términos de cómo han aceptado la reinserción de los desmovilizados, por un lado, y por otro, la percepción de los desmovilizados en su proceso de reinserción civil a las comunidades. Por medio de la aplicación de un instrumento denominado “ficha de percepción comunitaria –FPC”, el monitoreo se realizó en cuatro momentos diferentes, arrojando información sobre el proceso evolutivo de estas percepciones tanto en la comunidad como en los reinsertados.

Es importante aclarar que en los dos primeros momentos se tiene una muestra poblacional (50% líderes barriales, personas con representatividad dentro de los barrios por la actividad que realizan y 50% habitantes, usando muestreo por conveniencia¹⁶⁵) que varía en el tercero, “en este caso el número de personas encuestadas fue proporcional al número de habitantes en el barrio y al número de desmovilizados que ahí habitan”¹⁶⁶, seleccionada a través de muestreo

¹⁶⁵ Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Informe de resultados. Ficha de percepción comunitaria FPC. Tercera aplicación, diciembre de 2005. pp. 2.

¹⁶⁶ *Ibíd.*, pp. 2.

aleatorio simple para garantizar la representatividad de la muestra; en el último momento se retorna al muestreo por conveniencia. Esto genera cambios en la muestra sobre la cual se realiza en análisis en cada momento, así: número de encuestas realizadas en la primera FPC fue 451, FPC2 501, FPC3 812 y FPC4 1123¹⁶⁷.

Para el análisis aquí realizado se tomarán únicamente los datos de la primera y segunda encuesta realizada en octubre de 2004 y abril de 2005, que corresponden al periodo de desmovilización y reinserción de los miembros del BCN. Se dejan a un lado la tercera y cuarta, porque estas incluyen la desmovilización y reinserción de nuevos bloques paramilitares (1579 beneficiarios del exbloque héroes de granada y 1300 beneficiarios de 31 bloques¹⁶⁸), que no constituyen el objeto de estudio de esta investigación. Se toma esta decisión básicamente porque, estos dos últimos momentos no permiten la diferenciación entre los desmovilizados de uno u otro grupo de autodefensas.

Sin embargo, hay datos de los informes tres y cuatro, que dada su relevancia y pertinencia en el análisis de este capítulo, se retomarán con el ánimo de hacer comparaciones e inferencias que permitan ampliar dicho análisis en el tiempo, es decir, no se puede olvidar que los informes uno y dos toman un lapso de tiempo muy corto a la hora de medir impacto del proceso, mientras que en los

¹⁶⁷ Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación, Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Informe de resultados. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. pp. 4.

¹⁶⁸ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, pp. 2.

informes tres y cuatro, el horizonte de tiempo es mayor, lo que permite tener una mayor aproximación al comportamiento de las variables aquí evaluadas.

Con respecto a las encuestas realizadas en el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación, es importante aclarar que se tomó tres tipos de población a saber: miembros de la Alcaldía de Medellín que tuvieron contacto directo con el proceso (2), miembros del programa de Paz y Reconciliación encargados de la implementación del proceso (3) y finalmente desmovilizados y reinsertados del BCN (3). Dadas las especificidades del tema tratado, la muestra se define por conveniencia, teniendo en cuenta las posibilidades de acceso, en especial a la tercera población.

A continuación se hará una breve descripción de la evaluación general del proceso de desmovilización del BCN, para entrar luego a la evaluación de algunas variables del modelo utilizado. Para garantizar la validez y confiabilidad del análisis realizado, se presentarán solo aquellas variables cuya información existente lo permite.

En términos generales el balance del proceso de reinsertión del BCN ha tenido una evaluación positiva, no sólo por parte del gobierno nacional y local, sino también por los diferentes medios escritos¹⁶⁹; sin embargo, no se deja de reconocer algunas fallas del proceso en su aplicación, las cuales se analizarán a lo largo de este capítulo.

¹⁶⁹ Para esta investigación se hizo revisión de El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Revista Semana y Revista Cambio.

Una prueba de ello son las declaraciones de prensa del Alto Comisionado para la Paz, en rueda de prensa en marzo 4 de 2004 donde afirma que, “el proceso de reincorporación a la civilidad de los miembros del BCN. En términos generales creemos que es un proceso que da resultados positivos. Hemos encontrado algunas dificultades y acordado los mecanismos para solucionarlos mutuamente con la concurrencia tanto del gobierno nacional como de la administración municipal.”¹⁷⁰

5.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN

En el caso del BCN, la Organización Internacional para la Migración (OIM) ha realizado un seguimiento y monitoreo al proceso de desmovilización después de la estadía de los desmovilizados en el centro nacional de convivencia y paz de la Ceja, de esta verificación, se han recogido algunas percepciones de la comunidad en referencia al proceso adelantado con el Bloque Cacique Nutibara con el propósito de identificar los diferentes problemas que se puedan presentar con la integración de los excombatientes nuevamente a la comunidad.

Esta verificación se realizó durante el segundo semestre del 2004 y el primer semestre del 2005, mediante encuestas aplicadas a la comunidad, con el objetivo de medir cinco variables que determinan el grado de adaptación, aceptación, las dudas, los temores y la percepción de la función del programa

¹⁷⁰ Rueda de prensa del Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo al término de la reunión de evolución del proceso de desmovilización y inserción del BCN. Medellín, marzo 4 de 2004. En www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. Jueves 3 de febrero de 2005, 2:40 p.m.

de paz y reconciliación de la Alcaldía, como facilitador de la aplicación del programa.

Teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido entre la salida del Centro de convivencia y paz, de los desmovilizados, y la aplicación de la encuesta, los resultados en general muestran un alto porcentaje de aceptación y adaptación de la comunidad frente al programa. Es necesario tener presente que los datos que se suministran a continuación son presentados por el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, se quiso tener acceso a las encuestas y resultados presentados por la OIM en el primero y segundo informe, pero la respuesta a la solicitud de la información nunca fue contestada.

A continuación se exponen los resultados del monitoreo realizado por la OIM frente al proceso, a partir de las cinco variables de evaluación:

Para medir la **adaptación** del programa en la comunidad se preguntó ¿Cómo evalúa la presencia de los beneficiarios en el barrio después de la desmovilización?, los resultados muestran que para el 2004, un 78% de la comunidad tenía una percepción positiva respecto a la presencia de los jóvenes reinsertados en el barrio; para el primer semestre del 2005 esta percepción había aumentado a un 88%¹⁷¹. En la tercera aplicación un 66% de los encuestados perciben como positiva la presencia de los desmovilizados,

¹⁷¹ Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación, Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Informe de resultados. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

porcentaje que se mantiene en la cuarta; la percepción negativa aumenta de 2% en la primera a un 6% en la última¹⁷².

“En esta área se indaga por la percepción de la comunidad sobre cambios en el barrio a partir de la desmovilización. La evaluación de la comunidad respecto a la presencia de desmovilizados en el barrio continua siendo predominantemente positiva.”¹⁷³

Para medir la **aceptación** se preguntó si se creía tener alguna dificultad en aceptar a los desmovilizados en los barrios, lo que permitió identificar que para el 2004 el 71% de los encuestados no creía tener dificultades en la aceptación de los desmovilizados y para el monitoreo del 2005 el indicador aumento al 81%¹⁷⁴.

En relación a la pregunta que se le hace a la comunidad ¿usted interactúa con los desmovilizados?, se puede rescatar la siguiente variación: entre la primera y la segunda medición se tuvo un aumento significativo en las respuestas positivas a la interacción del 67% al 84%, a partir de la segunda medición se observa una disminución en la respuesta positiva pasando al 67% en el segundo semestre del 2005 y al 55% en el primer semestre del 2006¹⁷⁵.

“Esto puede responder a varias situaciones: primero, el tamaño de la muestra aumentó, lo cual amplía la posibilidad de encuestar a un mayor número de personas

¹⁷² Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. Pp.12

¹⁷³ *Ibíd.*

¹⁷⁴ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

¹⁷⁵ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. pp. 7.

que no interactúan con los desmovilizados; segundo, el crecimiento de la población desmovilizada pudo producir un efecto de retroceso en la interacción con los excombatientes, en tanto la comunidad debe nuevamente familiarizarse con personas ajenas a su cotidianeidad, ya que los que llegaron en los últimos meses operaban en zonas distintas a Medellín y el área metropolitana o, al contrario, con los más antiguos ya están familiarizados y simplemente no se relacionan; y tercero, esta disminución puede reflejar un avance en la interacción con la comunidad si los desmovilizados están siendo percibidos como habitantes del común, y los encuestados responden que no interactúan con los desmovilizados porque no los diferencian.”¹⁷⁶

Para medir la **percepción** de la comunidad frente al programa de la Alcaldía como facilitador del proceso se preguntó ¿piensa que el programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín facilita la reincorporación de los desmovilizados a la comunidad?, a lo cual el 84% de encuestados respondió que SI en el 2004 y para el 2005 aumento al 93%; constituyéndose en la variable que mayor aceptación tiene dentro de las cinco analizadas por el informe de monitoreo de la OIM¹⁷⁷.

A pesar de los altos porcentajes positivos de percepción de la comunidad frente a esta variable, en las dos primeras mediciones, no deja de ser preocupante que en los informes tres y cuatro se presenta un incremento en el porcentaje de la población que establece que el programa no ha facilitado la incorporación de los desmovilizados en la comunidad; de tal manera que para los informes de percepción en el 2004 y 2005, el porcentaje de población estaba en 16% y 7%

¹⁷⁶ *Ibíd.*

¹⁷⁷ *Op. Cit.* Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

respectivamente, y para la medición que se adelantó a finales del 2005 y primer semestre del 2006, el porcentaje de la población aumentó al 22% y 29% respectivamente¹⁷⁸.

El comportamiento frente a la medición adelantada en relación a los **temores** de la comunidad es preocupante, dado que existe un alto porcentaje que consideran que los desmovilizados pueden volver a las actividades ilícitas¹⁷⁹. La pregunta que se realizó para este indicador fue si se creía que alguno de los “beneficiarios” podría volver a involucrarse en actividades ilegales, a lo cual para el año 2004 el 46% respondió que SI y para el 2005, con una diferencia apenas de 4 puntos porcentuales, se tuvo un 41% de los encuestados diciendo que SI¹⁸⁰.

Para el tercer informe este porcentaje disminuye a un 35%, sin embargo, el cuarto informe aumenta en 29 puntos porcentuales, alcanzando un 64%¹⁸¹.

“La mayor frecuencia en esta respuesta se encuentra en la comuna 4, en la cual se incluye un caso particular, el barrio Moravía, lugar donde se realizaron más encuestas (26% del total de las encuestas), por ser el barrio que alberga mayor número de desmovilizados (7% de la población total), seguido por la comuna 1 que es la comuna en la que residen mayor número de beneficiarios (14.4% de la población total)”¹⁸².

¹⁷⁸ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. pp. 19.

¹⁷⁹ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

¹⁸⁰ *Ibíd.*

¹⁸¹ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. Pp. 16.

¹⁸² *Ibíd.*

En el cuarto informe “las razones que encuentran para que los desmovilizados reincidan en actividades ilegales son los antecedentes delictivos 301 (42%), que dificultarían el cambio de estilo de vida de los desmovilizados, y la posibilidad de que el gobierno incumpla sus compromisos 212 (30%)”¹⁸³. Con relación al 2005 la percepción sobre antecedentes delictivos aumentó 6 puntos porcentuales de 36% a 42%; respecto a la posibilidad de que el gobierno incumpla disminuye del 36% al 30% y adquiere importancia la variable del desempleo porque aumenta 4 puntos porcentuales, pasando del 6% al 10%¹⁸⁴.

Las **dudas** de la comunidad fueron medidas en el monitoreo por medio de la pregunta ¿sabe si alguno de los beneficiarios tiene dificultades para reincorporarse a la sociedad? Para el 2004 el 82% de los encuestados dio una respuesta negativa a la pregunta, y para el 2005 hubo un incremento de 8 puntos porcentuales ascendiendo al 90%¹⁸⁵.

Para el tercer monitoreo este porcentaje disminuye once puntos porcentuales, pasando del 90% al 79%. En el cuarto monitoreo disminuye al 72%¹⁸⁶.

“Esta variación puede entenderse como el desarrollo de la opinión de los miembros de la comunidad crecientemente crítica y abierta, capaz de evaluar el comportamiento visible de los desmovilizados gracias a la disminución del miedo, tal como se presentó en la percepción de la comunidad sobre los beneficiarios”¹⁸⁷.

¹⁸³ *Ibíd.*

¹⁸⁴ *Ibíd.* Pp. 17.

¹⁸⁵ *Op. Cit.* Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. p. 10.

¹⁸⁶ *Ibíd.* p 14.

¹⁸⁷ *Ibíd.* p. 13.

“Las razones para argumentar que existen dificultades por parte de algunos desmovilizados para reincorporarse a la sociedad, se sustentan en que algunos no han cambiado su estilo de vida 74 (25%), asociado con el mal uso del dinero 2 (1%) y del tiempo libre 2 (1%), el consumo de sustancias psicoactivas es alto 64 (25%), hay reincidencia en actitudes ilegales 72 (22%), falta compromiso por parte de los beneficiarios 74 (14%) y en menor proporción atribuyen estas dificultades a la falta de oportunidades que ofrece la sociedad o la falta de acogida por parte de las comunidades 42 (8%) o a otras razones 23 (5%) como dificultades de orden público, los enemigos o la falta de habilidades sociales”¹⁸⁸.

Al analizar las razones de las dudas de la comunidad, para el primer y segundo informe, se hace la pregunta ¿por qué tiene la comunidad dificultades para aceptar a los desmovilizados? Para la respuesta se considera cuatro razones o factores claves, estos son: el “miedo”, la “desconfianza”, el “resentimiento”, y la baja confianza en el programa de la Alcaldía¹⁸⁹.

El factor “miedo” fue del 52% para el 2004, disminuyendo en el 2005 a un 33%, cambio significativo que permite inferir una disminución del temor de la comunidad frente a los desmovilizados con el paso del tiempo¹⁹⁰. En la tercera medición disminuye al 32% y en la cuarta al 30%¹⁹¹.

¹⁸⁸ *Ibíd.* p. 14.

¹⁸⁹ *Op. Cit.* Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

¹⁹⁰ *Ibíd.*

¹⁹¹ *Op. Cit.* Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. Pp. 10.

Con relación a la desconfianza, el 45% de las personas encuestadas en el 2004 sentía desconfianza hacia los desmovilizados, para el 2005 el indicador tuvo una disminución de 14 puntos porcentuales y se situó en un 31%¹⁹². Estos datos y su consecuente disminución permite analizar que efectivamente con la llegada de los desmovilizados a las comunidades se tenía un alto grado de miedo y desconfianza frente a los resultados de la desmovilización, pero que con el paso del tiempo disminuyen; sin embargo el monitoreo no explica si la disminución se debe a razones de hecho o a la familiaridad con los reinsertados y con el comportamiento de estos. En el tercer monitoreo la desconfianza sigue disminuyendo, pasando a un 29%, pero en el cuarto aumenta al 39%¹⁹³.

Todo lo contrario sucede con el factor de resentimiento, que a pesar que tuvo un porcentaje del 24% en el 2004, en la medición del 2005 tuvo un incremento considerable de 19 puntos porcentuales en relación a la medición inicial, subiendo al 43%¹⁹⁴. Lo que se puede destacar del monitoreo realizado por la OIM en esta primera etapa del proceso es que aunque se tiene un alto nivel de adaptación, aceptación y facilitación de las comunidades frente al proceso, existen dudas y temores en relación con el éxito del mismo, debido principalmente, a las dificultades que puedan presentarse con los desmovilizados en los barrios. El principal motivo después de más de un año de haberse adelantado el proceso de reinsertación es el resentimiento que se tiene en las comunidades frente a los ex

¹⁹² Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

¹⁹³ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. Pp. 18.

¹⁹⁴ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

integrantes del BCN, factor percibido por las mismas comunidades como uno de los elementos de mayor riesgo que no solo esta presente, sino que se ha incrementado con el tiempo. Además del resentimiento, es latente el temor en las mismas comunidades porque los jóvenes reinsertados se involucren nuevamente en actividades ilegales, de hecho en el monitoreo adelantado y en los datos que fueron suministrados por el programa de Paz y Reconciliación se establece que las comunidades ya han denunciado que efectivamente hay algunos de los desmovilizados que han vuelto a delinquir después del proceso¹⁹⁵. Para la tercera medición este factor disminuye 11 puntos porcentuales, ubicándose en un 32% y para la cuarta sigue disminuyendo hasta ubicarse en un 26%¹⁹⁶.

Estos resultados parciales se constituyen en un manto de dudas frente al éxito del proceso, y en el mismo programa de Paz y Reconciliación aceptan que hay evidencias de que los paramilitares siguen ejerciendo el control en algunas zonas., para lo cual se han adelantado todas las acciones necesarias para apoyar el proceso de todos los reinsertados del BCN.

El reportaje realizado por Elizabeth Yarce titulado Comuna 8: la consigna es no matar, recoge la preocupación de algunos habitantes por que algunos de los desmovilizados recaigan en actividades ilícitas:

“No todos los desmovilizados están juiciosos y unos quieren poner a los niños a vender vicio. Si no son ellos, que nos aclaren quienes son los que están haciendo

¹⁹⁵ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. Pp. 18.

¹⁹⁶ *Ibíd.*

eso, porque, entonces, ¿para qué se están rehabilitando?”¹⁹⁷

Estas cifras lo que indican es que a pesar de la existencia en la comunidad de una alta expectativa –positiva- frente al proceso, las dudas y la incertidumbre, en relación con la adaptabilidad de los “beneficiarios”, debido a los problemas que puedan tener en las comunidades, es latente y no disminuyo a pesar del tiempo transcurrido entre el 2004 y el 2006.

Al respecto, una de las funcionarias a cargo de la ejecución del programa indica:

“...se han adelantado todas las acciones que están en nuestras manos, se han atendido las amenazas contra la vida, se han reubicado a los desmovilizados amenazados con sus familias en otras partes de la ciudad, se les han buscado alternativas de estudio y de trabajo, estamos elaborando convenios con diferentes empresas e instituciones que nos permitan emplear a los muchachos en empleos productivos para ellos y sus familias pero para nosotros ha sido demasiado difícil. No contamos con un marco jurídico adecuado para el tratamiento de las problemáticas que nos presentan los desmovilizados y por consiguiente hay muchas de las demandas que ellos nos hacen en las que no les podemos ayudar, además, nosotros recibimos este proceso de la administración anterior y nos ha tocado ir solucionando problemas sobre la marcha, lo que dificulta aun mas los óptimos resultados. Pero estamos haciendo todo lo posible y hasta lo imposible, hemos realizado talleres de capacitación con las comunidades y con las familias porque entendemos que el problema no es de nosotros solos ni de los desmovilizados, este es un problema social y que lo tenemos que sacar adelante todos juntos, en sociedad, porque es un problema que nos compete a todos en Medellín”¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Yarce, Elizabet, Comuna 8: la consigna es no matar. En: www.elcolombiano.com.co/bancoconocimiento/comuna8. 22 de octubre de 2004.

¹⁹⁸ Entrevista realizada a funcionaria del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Agosto 15 de 2005.

Además de los problemas que se han identificado mediante el monitoreo de la OIM, en el programa de Paz y Reconciliación se han identificado otras dificultades para el proceso como son la falta de un marco jurídico para las desmovilizaciones colectivas y para los actores primarios del conflicto, a lo cual la misma funcionaria entrevistada afirma que:

“...aquí al programa han llegado personas de otros grupos que desean desmovilizarse y poder acceder a los mismos beneficios de los ex integrantes del BCN pero no se puede, nosotros jurídicamente solo podemos atender a los desmovilizados del BCN, los demás tienen que remitirse a las oficinas del ministerio de justicia y seguridad y los beneficios no son los mismos así que las personas que se desmovilizan por la oficina del ministerio vienen y hacen reclamos que porque(sic) no se les consigue un trabajo o se les reubica en otro barrio, pero el programa no puede hacer eso, le corresponde a la presidencia y al gobierno central pero las personas no entienden eso.”¹⁹⁹

Otra de las dificultades que presenta el programa son los tiempos planteados para la reincorporación, se determinaron 18 meses para adelantar todo el proceso de desmovilización, tiempo insuficiente para lograr una incorporación y re-socialización adecuada a la legalidad, además el proceso está enfocado a la reincorporación del individuo y se deja, como un elemento secundario de atención, a las familias y a las comunidades a las que se van a integrar las personas desmovilizadas.

Al respecto otro funcionario del programa establece:

“[...] 18 meses no son suficientes, además los recursos son limitados y después de

¹⁹⁹ Op. Cit. Entrevista, Junio 10 de 2005.

los 18 meses que va a pasar con esos muchachos en los barrios. El alcalde Fajardo ha dicho que mientras el este en la administración el programa se va a mantener pero, ¿y después que?, ¿que va a pasar con sus familias y con las mismas comunidades que los aceptaron y los recibieron? [...]”²⁰⁰

Al respecto el jefe de la oficina de Paz y Reconciliación de la ciudad de Medellín afirma que “en Medellín el proceso va llegando a los 34 meses, pero una reinserción integral no se logra en dos años. Probablemente durará más de cuatro años. Por eso se necesita políticas de Estado.”²⁰¹

A pesar que al interior de los informes presentados por la OIM se reconoce una modificación en las tendencias en el proceso de reintegración por el aumento de la población desmovilizada en diferentes sectores de la ciudad, no es posible asegurar como se afirma que “estas variaciones se relacionan con la incertidumbre que genera en las comunidades convivir con nuevas personas que apenas comienzan el proceso de reincorporación, especialmente en el reestablecimiento de la confianza, y frente al reconocimiento del programa Paz y Reconciliación.”²⁰²

Es claro entender que el incremento y la variación de la población hacen cambiar las percepciones de las personas, no obstante, los cambios metodológicos en el tamaño de la población encuestada, la selección de la muestra, la escogencia de los sectores para la aplicación del instrumento de recolección de información, el

²⁰⁰ Op. Cit. Entrevista, Junio 10 de 2005.

²⁰¹ Villegas, Gustavo. Primer encuentro departamental sobre reinserción. Panel Políticas Públicas sobre reinserción. Medellín, julio 15 de 2006. pp. 3.

²⁰² Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. Pp. 21.

cambio en algunas variables de análisis en dicho instrumento, entre otras, no permite identificar las verdaderas razones de las modificaciones en el monitoreo del proceso de desmovilización.

En suma, se hizo el análisis de dos procesos diferentes, de forma indiscriminada, la desmovilización del BCN con la posterior desmovilización de otros excombatientes, procedentes de bloques de fuera de la ciudad, en el segundo semestre del 2005; sin tener en cuenta que la experiencia de desmovilización con el BCN, que ya llevaba un año, se había dado bajo la configuración de circunstancias específicas y conectadas a la historia de violencia de la ciudad, como su concentración en La Ceja, el acompañamiento del gobierno local en todo el proceso de desmovilización desde la entrega de las armas, el reconocimiento que la comunidad tenía de los actores involucrados en el proceso, el mismo proceso de conformación y transformación del BCN al que se hace alusión en el capítulo cuarto de este documento. Lo anterior constituye un impedimento metodológico para el análisis del comportamiento y evolución de la desmovilización del BCN a partir de los cuatro informes.

5.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE INTERVENCIÓN

A partir del análisis realizado en los cuatro capítulos anteriores y el inicio de este capítulo, es posible reconocer al proceso que se adelanta con el BCN, como un proceso de reinserción, desmovilización y reincorporación plena a la vida civil de

un excombatiente, uno de los múltiples mecanismos para poder intervenir e intentar dar solución de paz al conflicto en la sociedad, para reducir los homicidios.

A pesar de los esfuerzos del gobierno local por lograr el éxito del programa en la ciudad, es necesario reconocer que se necesitan ciertas condiciones que se deben brindar desde el ámbito nacional, dichas condiciones se manifiestan principalmente en el establecimiento de una política pública nacional que sea construida por diferentes estamentos de la sociedad y que permita definir directrices que los gobiernos locales puedan seguir unificadamente, con cierto margen de independencia teniendo en cuenta las especificidades de cada región. De lo contrario se pueden encontrar inconvenientes como los que establece el jefe de la oficina de Paz y Reconciliación en Medellín, Gustavo Villegas.

“Hay programas, beneficios. Solo el gobierno nacional es el competente para definir una política pública de reinserción. De lo contrario cada región y localidad comenzará a dar palos que pueden ser de ciegos. La política debe ser construida entre todos.

Debe haber descentralización para la coordinación de esa política pública. Hay muchos celos entre funcionarios de distintos niveles.”²⁰³.

En Medellín el proceso empezó sobre la marcha, como han reconocido algunos de los funcionarios del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía²⁰⁴, el programa diseñado por la administración de Luis Pérez y luego retomado y puesto

²⁰³ Op. Cit. Villegas, pp.3.

²⁰⁴ Entrevista realizada a un funcionario del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Junio 10 de 2005.

en marcha por Sergio Fajardo, manifiesta la falta de un diseño institucional y una política nacional sólida que permitiera otorgar a los desmovilizados, a sus familias y a la comunidad directamente involucrada, un tratamiento adecuado en lo social, lo jurídico y lo administrativo, y que fuera sostenible en el tiempo.

A pesar de los esfuerzos y la voluntad política que se tiene desde la administración local, es necesario reconocer que el modelo de intervención que se implemento con el BCN tiene problemas que es necesario reconocer, esperando que a partir de este análisis sea posible generar algunos aportes que permitan su mejoramiento.

En este sentido, se presenta el análisis de los ejes de acción definidos en el Modelo de Intervención:

5.2.1 Educación

Hay avances considerables con la mayoría de los jóvenes que han decidido estudiar, sin embargo, el problema de la educación en los desmovilizados no radica en la posesión de un cartón de bachiller o profesional; la educación debe ser de tipo estructural, que permita la realización de un cambio mental en la estructura de un combatiente y para ello se requiere de procesos previos intensivos y de larga duración, los tres meses que estuvieron los 868 jóvenes

concentrados en la Ceja no es suficiente para que desarmen su pensamiento y su accionar.²⁰⁵

Además existe una característica notable en la oferta estatal de convertir a los desmovilizados en microempresarios, cuando se ha demostrado en muchos casos de seguimiento que sin una preparación previa los proyectos fracasan por desconocimiento de los hábitos y dinámicas del mercado²⁰⁶.

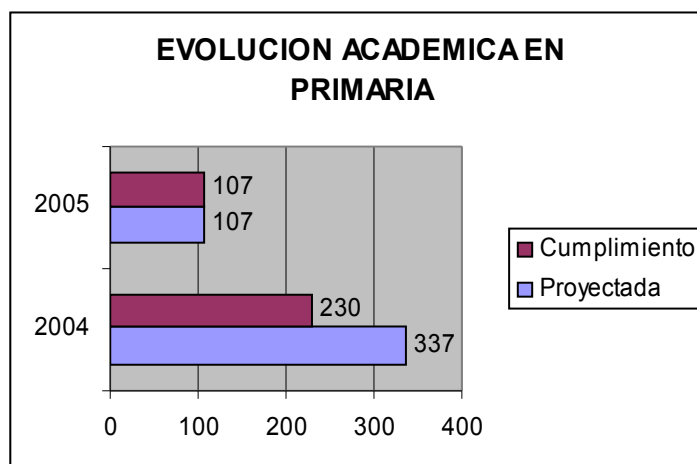
De los 868 jóvenes desmovilizados, el programa reporta que para el año 2004, 337 jóvenes están inscritos para comenzar primaria, de los cuales solo 230 terminaron su primaria ese año con un porcentaje aproximado de cumplimiento del 68%, para el 2005 se tenía proyectado que 107 jóvenes realizaran la primaria mediante un sistema de validación, con un cumplimiento del 100% para dicho año²⁰⁷.

²⁰⁵ Ruiz Restrepo, Jaime, et. al. Tratamiento de conflictos. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia. 2005, pp. 127.

²⁰⁶ Chica, Carlos Alberto. Desmovilización de paramilitares: mucho más que números y ayuda humanitaria. En: La desmovilización de las autodefensas: un caso de estudio. Cátedra Honrad Adenauer de Comunicación y Democracia. 2004. pp. 52.

²⁰⁷ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Grafica 2. Evolución académica en primaria.

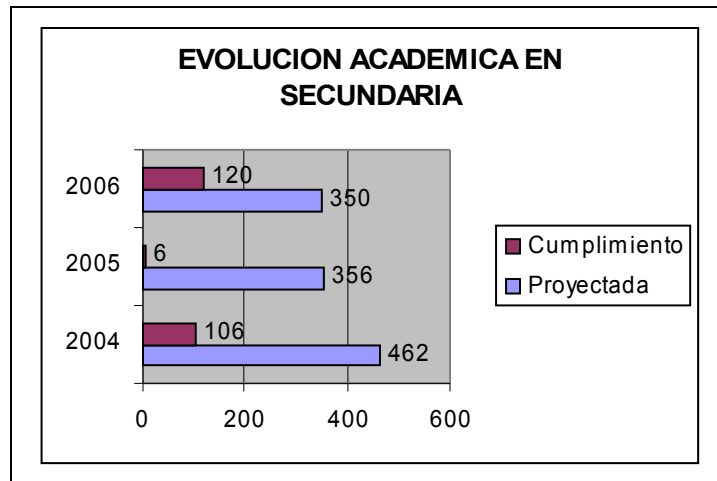


Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

Para el año 2004 se tenía proyectados 462 jóvenes para continuar con los estudios de bachillerato, de los cuales solo terminaron 106, en el 2005 se proyectaron 336 para comenzar en mayo, de los cuales solo 6 culminaron su bachillerato al final del año con un indicador de cumplimiento de apenas 1.6%. Para el 2006 la proyección era de 350 jóvenes que realizarían estudios secundarios, de los cuales solo 120 terminaron el ciclo²⁰⁸.

²⁰⁸ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Grafica 3. Evolución académica en secundaria.

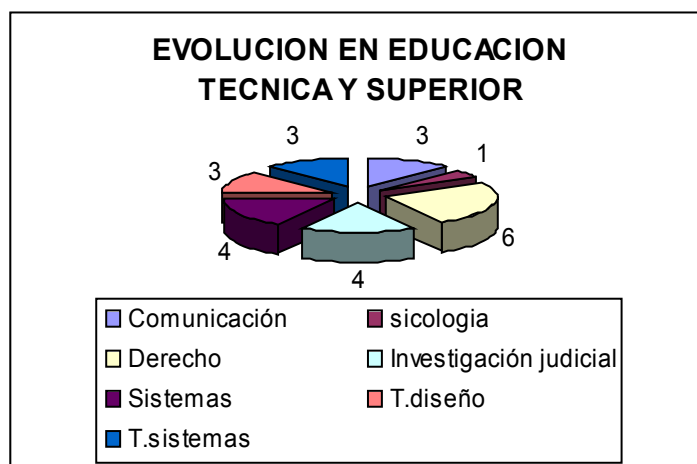


Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

En relación con la evolución académica de los desmovilizados en estudios técnicos o profesionales, solo se tienen datos del 2004, ya que las proyecciones y el seguimiento del cumplimiento para el 2005 y 2006 están dados en la medida que se cumplan los ciclos de formación básica primaria y secundaria. En formación técnica hay 64 jóvenes, de los cuales 45 están adelantando cursos cortos en mecánica básica, mecánica de motos y electricidad automotriz y 23 están adelantando carreras de educación superior, 3 en comunicación social, 1 en psicología, 6 en derecho, 4 en ingeniería de sistemas, 4 en investigación judicial, 3 están adelantando estudios técnicos en diseño grafico y 2 en tecnología en sistemas²⁰⁹.

²⁰⁹ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Grafica 4. Evolución en educación técnica y superior.



Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

Para el 2006 la relación de los desmovilizados y su nivel académico se puede caracterizar de la siguiente manera: primaria 274, secundaria 925, validación 979, técnica y tecnología (cursos adelantados en el SENA) 221, tecnologías técnica superior (cursos adelantados en IES) 322, para un total de beneficiarios realizando actividades educativas de 2721²¹⁰.

5.2.2. Acompañamiento Psicosocial

El acompañamiento Psicosocial del proceso de reinserción es una parte esencial, ya que los desmovilizados deben entender que el Estado no es el enemigo y aprender a confiar en él y en sus instituciones, además el tratamiento debe ser

²¹⁰ Alcaldía de Medellín. Programa de Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención, regreso a la legalidad. Presentación. Diciembre de 2006.

diferencial no se puede atender por igual las desmovilizaciones de grupos y las de individuos.²¹¹

En el caso de la desmovilización del BCN es importante tratar de medir sus expectativas reales de vida, no se puede pretender que todos tengan las mismas inquietudes o iniciativas, el monitoreo realizado por la OIM demostró que el origen de los desmovilizados es heterogéneo y por consiguiente estas diferencias deben ser tratadas de manera diferente para cada uno de los casos. En la misma lógica no se puede pretender aplicar el mismo programa para los integrantes de las cúpula o los mandos medios que a los soldados rasos.²¹²

El acompañamiento debe llegar efectivamente hasta las familias y las comunidades, esto permite el éxito del proceso al fomentar una cultura de Reinserción en la ciudad y las comunidades, de manera que permita ver a los desmovilizados no como excombatientes sino como ciudadanos del común, este es uno de los miedos latentes dentro de los desmovilizados del BCN “Si la embarramos, que se nos cobre en error como a cualquier ciudadano, con la cárcel u otros medios legales, pero no con la señalación de haber sido combatientes”.²¹³

El acompañamiento Psicosocial con las comunidades es importante además, porque permite el fortalecimiento de la reconciliación entre los desmovilizados y las víctimas y disminuye el ambiente de resentimiento que es uno de los factores

²¹¹ Op. Cit. Chica, Carlos Alberto, pp. 51.

²¹² Op. Cit. Ruiz Restrepo, Jaime, pp. 152.

²¹³ Entrevista realizada a un ex-integrante del BCN.

que resalta el monitoreo realizado por la OIM, a fin de cuentas la reconciliación es la única posibilidad de que estos jóvenes se inserten a la vida civil definitivamente.²¹⁴

El acompañamiento se llevó a cabo por medio de diferentes actividades como son: Talleres de capacitación en desarrollo humano, entrevistas directas (para determinar el perfil psicológico de los desmovilizados), atención psicológica en clínica (para beneficiarios directos, familia y la comunidad), actividades de integración comunitaria con orientadores sociales y convenios para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar²¹⁵.

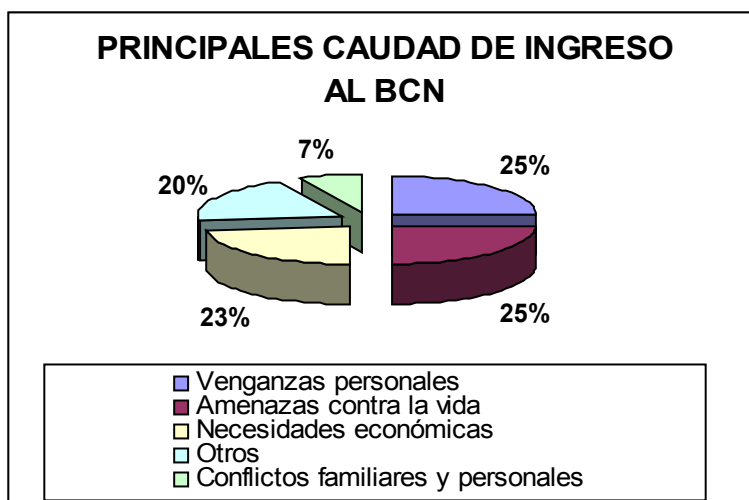
Dentro de las actividades que se realizaron en el acompañamiento Psicosocial fue posible determinar las principales causas por las cuales los jóvenes ingresaron al BCN, entre ellas se pueden mencionar cinco de mayor relevancia: las venganzas personales y las amenazas contra su vida, cada una con un 25%, seguida por las necesidades económicas con un 23%, otras motivaciones con un 20% y conflictos con la familia, amigos o vecinos con un 7%²¹⁶.

²¹⁴ Op. Cit. Ruiz Restrepo, Jaime, pp. 157.

²¹⁵ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

²¹⁶ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Grafica 5. Principales causas de ingreso al BCN.

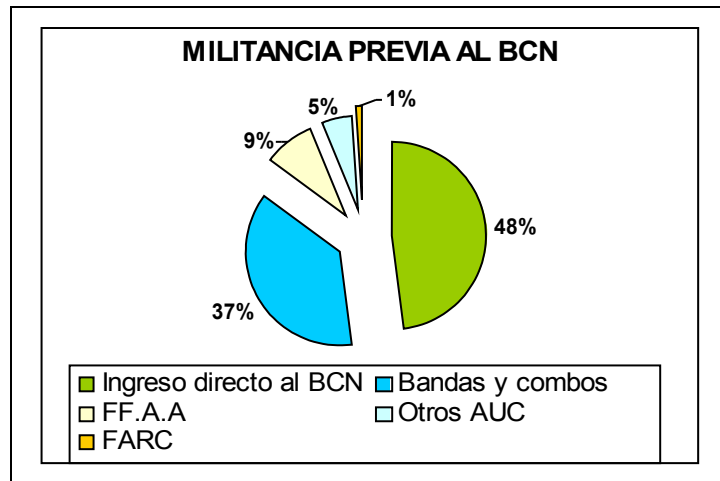


Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

Además de las motivaciones que los llevaron a ingresar a este bloque, fue posible identificar su procedencia en relación a la pertenencia a otros grupos como bandas, milicias o combos antes de hacer su ingreso al Bloque Cacique Nutibara, obteniendo como resultado que el mayor porcentaje de los jóvenes había ingresado directamente al BCN con un 48%, seguido por la cooptación de combos y bandas con un 37%, pertenencia a las Fuerzas Armadas FF.AA. un 9%, a otros grupos de las AUC 5% y los que provenían de las FARC solo un 1%²¹⁷.

²¹⁷ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Grafica 6. Militancia previa al BCN.

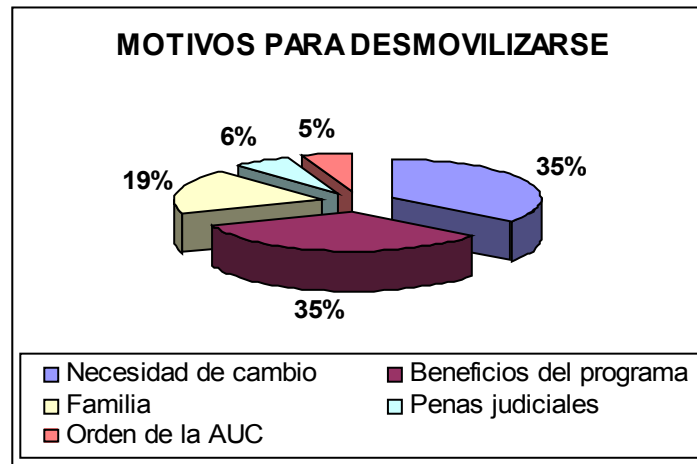


Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

De la misma manera en el acompañamiento Psicosocial se pudo determinar las principales motivaciones que tuvieron los jóvenes para desmovilizarse, dentro de las que se identifican como el 35.25% de los desmovilizados estuvo motivado por una necesidad de cambio, un 34.58% estaba motivado por los beneficios que ofrece el programa, para un 18.56% la motivación fue la familia y en un menor porcentaje, borrar penas judiciales con un 6.14% y acatando la orden de las AUC con un 5.47% como se puede apreciar en el siguiente grafico²¹⁸.

²¹⁸ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Grafica 7. Motivos para desmovilizarse.



Fuente: Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

Dentro de las diferentes actividades que se han realizado para el acompañamiento psicosocial de los desmovilizados del BCN, por parte del programa de Paz y Reconciliación, se puede resaltar que para el año 2004, cuando el programa estaba dirigido exclusivamente a los desmovilizados de este bloque²¹⁹, se realizaron:

1. 426 talleres de capacitación en desarrollo humano, dirigidos a establecer un diagnóstico sobre las diferentes actitudes o motivaciones que tienen los desmovilizados para tratar de ubicarlos en una actividad productiva, social, artística o cultural que les permita su desarrollo integral;
2. 811 entrevistas directas con el objetivo de establecer cuál es el perfil psicológico que poseen los jóvenes desmovilizados del BCN;

²¹⁹ Op. Cit. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

3. 481 visitas familiares con el objetivo de reforzar y consolidar el proceso de desmovilización en las familias receptoras de los desmovilizados;
4. 302 servicios de atención y asesoría psicológica por intermedio de diferentes clínicas a los beneficiarios del programa a diferentes familiares y a la comunidad receptora, con el fin de fortalecer la desmovilización a través de la concientización de los beneficiarios, sus familias y las comunidades en que habitan; y
5. 232 actividades de integración comunitaria que tienen como objetivo el consolidar las demás actividades realizadas en el acompañamiento psicosocial.

Estas actividades de acompañamiento psicosocial se siguen desarrollando en el 2005 y 2006, pero en ellas se integran a los desmovilizados del bloque héroes de granada y a los integrantes de otros bloques de fuera de Medellín. En este sentido, para el 2005 se dictaron 1891 talleres de capacitación en desarrollo humano y para el 2006, 6771. En entrevistas directas para definir el perfil psicológico, en el 2005 se realizaron 934 y en el 2006, 2129. Se realizaron también visitas a familiares, en el 2005, 1234, y en el 2006, 3444. En atención y asesoría psicológica en clínica para beneficiarios, familiares y para la comunidad, en el 2005, 456 y en el 2006, 8825. Y actividades de integración comunitaria, en el 2005, 3397 y en el 2006, 1655²²⁰.

²²⁰ Op. Cit. Modelo de Intervención, regreso a la legalidad. Presentación. Diciembre de 2006.

5.2.3 Seguridad

Garantizar la vida de los desmovilizados es prioritario dentro de un proceso como el que se adelanta en la ciudad, en los meses que lleva desmovilizado el BCN han sido asesinados 42 de sus antiguos integrantes²²¹. El Estado debe garantizar la seguridad en las zonas que se van entregando, en primer lugar para evitar que otros grupos lleguen a ejercer el control social que ellos defendían y segundo para generar confianza en las instituciones Estatales, de otra manera, ellos mismos se van a ver en la obligación de tomar nuevamente las armas para defender su vida y la de sus familias²²².

Otra forma de garantizar la seguridad es en lo jurídico, deben existir reglas claras y permanentes para que exista un marco mínimo de certeza en las acciones que se van a desarrollar con la entrega de las armas y el regreso a la vida civil²²³.

De acuerdo con el Informe sobre América Latina del Internacional Crisis Group (2004), se podría afirmar que este proceso ha tenido muchas fallas, entre las cuales se destacan: las múltiples improvisaciones, se está llevando el proceso “a toda carrera”; que el primer mecanismo de la verificación se preocupó más por la entrega de armas que por el conjunto del proceso, operando en un marco muy reducido y apenas fragmentario a los propósitos declarados del Programa de Desmovilización; que no hay evidencia de un informe de verificación sobre la

²²¹ Op. Cit. Modelo de Intervención, regreso a la legalidad. Presentación. Diciembre de 2006.

²²² Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia durante el año 2003. Comunicado de prensa. Bogotá, 10 de marzo de 2004. pp. 2.

²²³ Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿Una meta viable? ICG Informe sobre América Latina N° 8, 5 de agosto de 2004. p. 5.

entrega de las armas, su número y su estado; que sólo hasta marzo de 2004 fue nombrada la comisión verificadora de la OEA, que a la par de su bajo perfil, carece de suficiente financiación, sólo consta de dos miembros y sus alcances son muy limitados; que en el ámbito jurídico se realizó una desmovilización sin tener un marco claro y definido, hasta el punto de que al día de hoy no se ha debatido una ley que cobije estas desmovilizaciones; que el proceso no se ciñe a los criterios de verdad, justicia y reparación, prohiendo hechos de impunidad; que el programa se ha venido llevando a cabo de espaldas a la ciudad, sin una agenda pública y sin mecanismos de participación ciudadana; que no se tuvieron en cuenta las experiencias anteriores de negociación en la ciudad, lo cual hubiera servido para corregir y acertar en los mecanismos de esta desmovilización; que este programa fue incompleto, ya que no todos los actores de las autodefensas efectivamente se desmovilizaron; y que fue inconcluso porque la negociación dependió de una estructura nacional; lo cual se refleja en incongruencias entre los entes del gobierno local y nacional, lo cual afectó y afectará el proceso local.²²⁴

Se puede considerar como parte de la seguridad, definido en el modelo de intervención, la seguridad económica, a lo cual se han planteado diferentes inconvenientes como lo plantea el Alto Comisionado de Paz,

“hay una dificultad en el campo del empleo. Indudablemente no es fácil buscar una vinculación laboral o un proyecto productivo de manera inmediata y rápida para todos estos jóvenes, por eso hemos decidido aplicar la normatividad vigente, el Decreto 128 que tiene que ver con las desmovilizaciones, que establece que para aquellas personas que

²²⁴ Op. Cit. Desmovilizar a los paramilitares en Colombia. P. 17-18.

están en proceso de desmovilización y no tengan una actividad productiva, se les pueda dar un subsidio económico, una especie de apoyo de aporte mientras se le ubica laboralmente, mientras se capacitan, bien sea en el sistema educativo formal o en el SENA para la productividad o en alguna otra actividad.”²²⁵

5.2.4. Comunicaciones y Verificación

Frente a esta variable, a pesar que desde la oficina del alto comisionado para la paz se establece un sistema de seguimiento público por medio de su página web, en donde se reporta en cada año y mes por mes, los pormenores del proceso, y a pesar de los informes periódicos del organismo multilateral encargado del proceso de verificación, las Organización de Estados Americanos, en cabeza de Sergio Caramagna, se han hecho fuertes críticas de parte de organizaciones como Human Rights Watch, en cabeza de José Miguel Vivanco, quien afirma que

“no estoy en condiciones de pronunciarme aún sobre los resultados de la OEA, porque ni nosotros ni la opinión pública los conocemos. Ese desconocimiento habla por sí solo.

Entre tanto, temas como el cese al fuego no deben limitarse al compromiso de palabra de los paramilitares, porque un tema tan delicado como este no puede reducirse a una declaración. Este tiene que ser verificado y la OEA debería cumplir con ese rol. Puede que en este momento lo estén haciendo, pero no se ha visto una labor importante, su gestión ha sido invisible.”²²⁶

²²⁵ Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Evaluación del proceso de desmovilización del BCN. Bogotá, febrero 6 de 2004, p. 2.

²²⁶ Revista Semana. La verificación de la OEA ha sido invisible. En: www.revistasemana.com.co. Conflicto, septiembre 20 del 2006.

CONCLUSIONES

Las conclusiones, a partir de la revisión realizada en este texto a lo largo del contexto histórico del poder en Medellín, del conflicto urbano y la crisis social y política en la ciudad, de la política de seguridad implementada en los planes de desarrollo de los gobiernos locales desde 1991 al 2005, del proceso de negociación del gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia y de la evaluación del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara y de su modelo de intervención; se pueden configurar desde dos o tres temas relevantes sobre los cuales se llama la atención a diversos actores en el proceso.

El primer factor se concreta alrededor de reconocer que el proceso de desmovilización y reinserción del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín no es un hecho fortuito que responde exclusivamente al inicio del proceso de negociación del gobierno central con las AUC; por el contrario, aquí es importante recalcar que es la yuxtaposición de una serie de hechos y circunstancias históricas locales y regionales las que facilitan las condiciones estratégicas necesarias para que se diera y tuviera una repercusión nacional e internacional, al ser el primero de los Bloques de las AUC en desmovilizarse en el marco de esta negociación.

Lejos de afirmar que el proceso adelantado en la ciudad por parte del gobierno con el BCN ha sido “exitoso”, si es necesario resaltar que ha tenido una

incidencia y un impacto directo sobre la seguridad de Medellín que se puede caracterizar como positivo, las causas y las razones que se puedan estudiar a partir del análisis de este caso permitirán determinar en un momento futuro si específicamente fue el proceso un elemento determinante para dicho cambio.

Como se ha dicho en el desarrollo de esta investigación la región de Antioquia pero, específicamente Medellín cuenta con unas circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales y jurídicas que han permitido la configuración y el fortalecimiento del fenómeno paramilitar bajo condiciones muy particulares como han sido las dinámicas del conflicto que ha vivido Medellín en los últimos años y que han dado como resultado la desmovilización del BCN.

El segundo factor a analizar es el entorno político sobre el cual se dio el proceso de desmovilización.

En esta investigación se puede identificar como la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara ha sido posible gracias a que las posiciones políticas de la ciudad han tenido una continuidad en el tiempo, diferentes alternativas ya sean de generación de cultura, de reforzamiento de la fuerza del orden, de aplicación de tecnologías, de negociaciones con grupos al margen de la ley entre otras, lo que ha facilitado las condiciones para ofrecer medios de solución a la crisis socio política y de violencia que ha afrontado la ciudad, y que se condensan y se estructuran en el actual modelo que aplica la Alcaldía de Sergio Fajardo, en el “Programa Regreso a la Legalidad”

Clave del balance relativamente positivo, del proceso analizado en este trabajo, es la voluntad política no solo de las instituciones locales que han tratado el tema del conflicto, sino el deseo de participación de los desmovilizados, específicamente los miembros del BCN, quienes iniciaron el proceso de desmovilizaron sin que hubieran todas las garantías políticas y legales necesarias para adelantarlos, prueba de ello es que no existía un marco jurídico sólido sobre el cual se apoyara su reinserción a la vida civil o el tratamiento punitivo sobre los hechos acaecidos en el pasado y por los cuales debían pagar condenas. Sin embargo, es posible afirmar, que una de las ventajas del proceso de desmovilización de las autodefensas fue precisamente este hecho, fue el hecho de iniciar un proceso dentro del cual conjuntamente, se construirían las condiciones mismas del proceso.

El tercer factor a analizar es el enfoque complementario utilizado en esta propuesta de desmovilización, a partir del factor humano.

Aquí es importante resaltar que esta estrategia de desarrollo se configura en torno a dos aspectos complementarios que le dan fuerza y la complementan. Por un lado, no se aleja de la propuesta punitiva, judicial, incluso militar de tratamiento del conflicto, prueba de ello son las operaciones Mariscal y Orión en la Comuna 13, que significaron sin lugar a dudas acciones contundentes para la desarticulación de algunos de los actores armados del conflicto, facilitando la consolidación de la presencia de bloques de las AUC en la ciudad. Por otro lado, se complementa la estrategia con el factor humano del tratamiento, en otras palabras, se hace énfasis sobre el individuo, sobre su

familia, la comunidad en general; propuestas claras en términos de cultura organizacional, acompañamiento psicosocial, educación, constituyen sin lugar a dudas un componente complementario muy importante y para tener en cuenta a la hora de analizar el conflicto y la crisis en busca de alternativas satisfactorias de solución.

Históricamente se venía demostrando que el tratamiento netamente punitivo y militar era insuficiente para eliminar los brotes de violencia en la ciudad, lejos de acudir a un tratamiento permisivo que tampoco conduzca a resultados eficaces, el programa de Paz y Reconciliación propone al individuo ser responsable de su vida, de sus acciones y de las repercusiones de estas en la sociedad en la cual está inscrito, reconociéndola para ser reconocido y de esta manera poder reincorporarse a la vida civil.

Es necesario plantear en este trabajo que el balance positivo preliminar que se establece con relación al modelo implementado en la ciudad de Medellín, obedece a las especificidades que se han dado en torno a las dinámicas de la ciudad, por lo tanto, habría que tener en cuenta que para su aplicación en otras regiones del país en condiciones espacio temporales diferentes, es necesario que se hagan la adaptaciones necesarias del modelo a las circunstancias específicas de cada región, de su gente, de su cultura, de las expresiones de violencia que ha vivido, de las crisis por las cuales ha atravesado, tanto económicas como sociales, políticas y de violencia. El que haya funcionado en Medellín no es garantía de que funcione en otro lugar del país.

Dentro de las dificultades que se han presentado en la ejecución del programa con los desmovilizados del BCN, es necesario rescatar que este ha sido un proyecto único en el país, en el continente y en el mundo, es importante resaltar que a pesar de que el programa ya existía, al operativizarlo, no se contaban con todos los apoyos administrativos, jurídicos, legales, que exigía su puesta en marcha. Es de entender que siendo un programa piloto en la región y en el país, era de esperarse que se fueran haciendo ajustes en la marcha del mismo. Sería deseable que a partir del aprendizaje organizacional sufrido en los cuatro años que lleva el proceso, cuando intente replicarse, se tomen las medidas de adaptación, mejoramiento y puesta en marcha necesarias para garantizar, al menos que los errores cometidos en este proceso no se vuelvan a repetir.

En términos conclusivos y de hecho, a partir del recorrido investigativo del fenómeno de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en el contexto de una ciudad definida en crisis y violencia hasta un nivel tal vez no reconocido de una guerra, que convivió peculiar y paradójicamente con un orden institucional funcional y práctico, podríamos puntualizar desde el punto de vista teórico y político lo siguiente:

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara constituye un hecho histórico que en relación con el conflicto, la violencia y la paz, se configura como un punto central, no sólo como un fenómeno exitoso, sino de trascendencia regional y nacional, todavía no medida, para el futuro de opciones de búsqueda y propuestas de solución para enfrentar la crisis que vive el país.

No existe antecedente ni en el continente, ni en el mundo, de fenómenos de violencia sociopolítica como este, que se haya enfrentado dentro del contexto y de los principios de la negociación, diálogos y consensos en el marco de la institucionalidad política y normativa.

La dinámica concreta de la desmovilización, sin modelos ni prerequisites teóricos ni normativos precedentes, se consolida sobre la base de estrategias político gubernamentales, que no son del caso introducir en estas conclusiones, pero, que invitan a un reconocimiento, que por crítico que sea (en términos de obstáculos, limitaciones y contradicciones), debe confluir finalmente en una visión de reconocimiento positivo, que estimule la validez del “acto de desmovilización” y permita su reconstrucción, enriqueciendo, corrigiendo y ampliando con rigurosidad teórica pero funcional, el marco general, los principios, objetivos, planes y mecanismos aquí utilizados.

Desde el punto de vista propiamente investigativo, se trató en esta investigación de partir hipotéticamente del reconocimiento de un proceso de mediana duración, cuyo corte histórico está enmarcado en los períodos de las alcaldías municipales entre 1992 y el 2007, y cuyos planes de desarrollo en términos de seguridad fueron integrando poco a poco una visión más humana acerca de cómo enfrentar el fenómeno de la violencia, para terminar en las dos últimas administraciones con planes y proyectos concretos basados en claras políticas democráticas y de seguridad, que ubicaron la crisis de la ciudad y su solución, desde la perspectiva de un proyecto humano y social que

atacaba las raíces de la crisis desde la pobreza, el estancamiento y la inclusión de los actores armados. Se trata entonces de la reafirmación del enunciado hipotético de una gradual transformación desde lo punitivo, legal y de la fuerza hacia un modelo integral social y humano para la solución del conflicto.

La desmovilización del BCN constituye pues un “modelo” piloto a reconocer y fortalecer, como mecanismo no solo político, sino para repensarlo desde el punto de vista teórico y estratégico-político.

Desde el punto de vista metodológico es preocupante, sin embargo, pero entendible, la falta de información o más bien de acceso a información que permita la validez de una investigación como esta, en especial por los actores involucrados en el proceso, por los hechos acaecidos durante el desarrollo del mismo, por la gran cantidad de intereses particulares e institucionales alrededor de los resultados obtenidos y del control sobre la circulación de cierto tipo de información. Pero es más penosa la ausencia de información frente a algunos aspectos estratégicos del proceso y en especial, del proceso de seguimiento al mismo, con el ánimo de hacer evaluaciones, monitoreos y futuras correcciones. No se verifica un proceso de mejoramiento continuo que permita la retroalimentación del modelo, su adaptación a las circunstancias específicas de los actores involucrados, que responda a las expectativas del gobierno, de los desmovilizados, sus familias y por supuesto, la comunidad que los acoge.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Alonso Espinal, Manuel A. Violencia política y seguridad ciudadana. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín. 2003. P.3.

Aranguren, Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá: editorial Oveja Negra, 2001, p. 208.

Archila Neira, Mauricio 2002 “Colombia 1975-2000: de crisis en crisis”. En: Archila Neira, Mauricio et al. 25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000 (Bogotá: CINEP).

Benedict Anderson. Comunidades Imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

Botero Herrera, Francisco. La industrialización en Antioquia, Génesis y consolidación. Ed. Universidad d Antioquia. Medellín; 1985.

Burma: Country in Crisis” en Asia Observer disponible en www.asiaobserver.com

Chica, Carlos Alberto. Desmovilización de paramilitares: mucho más que números y ayuda humanitaria. En: La desmovilización de las autodefensas: un caso de estudio. Cátedra Honrad Adenauer de Comunicación y Democracia. 2004. pp. 52.

Daza, Ana y Hurtado, Francisco. Experiencias de intervención en el conflicto urbano. Capitulo dos: “Jóvenes, tipos de conflicto, tipo de actores.” Primera edición, 2001. Medellín. Ediciones graficas limitada.

Franco, Vilma Liliana y Roldán Salazar, Hernando. Conflicto urbano de la comuna 13 de la ciudad de Medellín. Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellín, 2002. p. 23.

Garzón, Juan Carlos. La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica. En: El poder paramilitar. Editorial Planeta y Fundación Seguridad y Democracia, Santa Fe de Bogotá, 2005. p. 90.

Gianfranco Pasquino. "Crisis". En: Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política. México, Siglo XXI, 1997. p. 391-394.

Granda Marín, Alberto y Ramírez Adarve, Iván Darío. Contexto general de la violencia en Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. 2001.

Guerrero, Arturo. Una semana con el Cacique Nutibara. El factor humano. En: La desmovilización de las autodefensas un caso de estudio. Cátedra Konrad Adenauer de Comunicación y Democracia, 2004. Pontificia Universidad Javeriana y Konrad Adenauer Stiftung.

Jaramillo A, Ana Maria, et. al. "En la encrucijada" conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa. Editorial Pregón Ltda. Primera edición. Julio de 1998. Medellín. Pág. 253

Jiménez, Blanca Inés, et. al. Características históricas, económicas, sociales y políticas de la comuna 13. 2006. (Borrador).

Mayor Mora Alberto. Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia: una interpretación sociológica sobre la influencia de la Escuela de Minas en la vida, costumbres e industrialización regionales. Editorial Planeta, Bogotá, 1985.

Pardo Cardona, Luís Guillermo. Experiencias de intervención en el conflicto urbano. Capítulo 3. "Perfil del conflicto Urbano en Medellín." Medellín. Ediciones graficas limitada. Primera edición, 2001.

Ramírez Tobón, William. Autodefensas y poder local. En: El poder paramilitar. Editorial planeta y fundación seguridad y democracia. Santa fe de Bogotá, 2005. p, 145.

Roldan, Mary. A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación para la promoción de la ciencia y tecnología. Medellín, 2003.

Romero, Mauricio. "Paramilitares y autodefensas 1982-2003". Editorial Planeta Colombia, S. A. IEPRI 2003, Bogota, junio de 2003. Págs.296.

Romero, Mauricio. Los interrogantes de la desmovilización de las AUC. En: La desmovilización de las autodefensas: un caso de estudio. Cátedra Honrad Adenauer de Comunicación y Democracia. 2004. Pontificia Universidad Javeriana, Honrad Adenauer Stftung.

Ruiz Restrepo, Jaime y Vélez Cifuentes, Beatriz. Medellín: Fronteras invisibles de exclusión y violencia. Fondo Editorial Centro de Estudios de Opinión, Medellín 2004.

Ruiz Restrepo, Jaime, et. al. Tratamiento de conflictos. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia. 2005, pp. 127.

Villegas, Gustavo. Primer encuentro departamental sobre reinserción. Panel Políticas Públicas sobre reinserción. Medellín, julio 15 de 2006. pp. 3.

Vincent Goueset. Bogota: nacimiento de una metrópoli; la originalidad del proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo XX. Bogota, Tercer Mundo, 1998

ARTICULOS EN REVISTAS

Ardire, Benjamín. Del comercio libre al comercio justo: Las iniciativas de los nuevos defensores de la equidad en las relaciones norte-sur. Revista en Ciencias Sociales. Madrid, 2005.

Franco, Vilma Liliana. Practicas Hegemónicas de la Coalición Políticamente Dominante en Medellín y su entorno Urbano-regional. –En: Revista de Estudios Políticos N° 26, Medellín, 2006. P. 151.

Restrepo, Riaza. William. Modernización y Conflicto Urbano. En: Revista Estudios Políticos N° 5, Medellín. 1994.

Vélez Rendón, Juan Carlos. Conflicto y guerra: La lucha por el orden en Medellín. En: Revista Estudios Políticos No. 18. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Medellín; 2001. p. 62.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia durante el año 2003. Comunicado de prensa. Bogotá, 10 de marzo de 2004. pp. 2.

El COLOMBIANO 23 de septiembre de 2001 Tema del Día. Aumenta urbanización del conflicto armado. Carlos Alberto Giraldo M.

EL Colombiano Medellín: 20 años de llanto en las calles AUC controlan 70% de los barrios, dice informe de inteligencia. Por Elizabeth Yarce. Medellín. 30 de Abril de 2002.

El Colombiano, 1 de noviembre de 2002. Crece tensión entre 'paras' de Medellín.

El Colombiano, 17 de junio de 2002. p. 8 a ACCU prueba el proyecto urbano en Valle de Aburrá. Bloque Cacique Nutibara hará presencia en el noroccidente.

El colombiano, El terrorismo urbano: un nuevo estadio del conflicto. 26 de mayo de 2001. p. 9 a.

El Colombiano. Casas abandonadas: drama de barrios en disputa Por José Alejandro Hoyos. Medellín, 29 de Abril de 2002.

El Colombiano. Domingo 10 de Marzo de 2002. Medellín sí esta en disputa.

El Colombiano. Jueves 17 de octubre de 2002. Primer Plano 1-2. Combates/ por orden presidencial la Fuerza Pública entró a la Comuna 13. Batalla campal en Medellín. El Mundo. Jueves 17 de octubre de 2002 El Mundo La Metro. Los civiles llevaron la peor parte en el primer día de la operación Orión y el pavor de la guerra.

El Colombiano. Medellín: 20 años de llanto en las calles, 30 de Abril de 2002.

El Colombiano. Tema del día. Aumenta urbanización del conflicto armado. Carlos Alberto Giraldo M. 23 de septiembre de 2001.

El Espectador. Domingo 05 de noviembre de 2000

El Espectador. Iglesia denuncia crímenes de jóvenes por no alinearse con AUC, ELN o FARC. 'Maquinarias de la muerte en Medellín', 26 de agosto de 2000. Pág. 4 a.

El Mundo. Viernes 14 de Junio de 2002. Sucesos 6.

El Tiempo. Denuncia/'Paras', Farc y ELN se disputan 200 bandas de Medellín. Una bolsa de 8.600 sicarios. Diciembre 03 de 2000.

El Tiempo, 18 de julio de 2003: p. 1 a 5.

El Tiempo, 23 de agosto de 2000. Bandas / Una docena de familias abandonaron sus hogares. Con armas consiguen casa.

El Tiempo. Alcaldes/ La guerrilla se ha especializado, el tiempo noviembre 2002. Medellín, el caso más grave LA OPERACIÓN ORION fue el primer gran enfrentamiento entre la fuerza Pública y los grupos armados que sucedieron en una ciudad.

El Tiempo. Domingo 20 de octubre de 2002. Siete Días 3-10. Medellín/ enfrentamiento con milicianos dejan 18 muertos Comuna, bajo fuego.

El Tiempo. Domingo 25 de agosto de 2002. Medellín. Conflicto/ no es tan fácil decir que el CICR entre los grupos armados de la ciudad La guerra se hace más cruel

El Tiempo. Polémica/ Autodefensas, sin bajas ¿Y los "paras" que? Viernes 18 de octubre de 2002.

Revista Semana. Agosto12, de 2002. Pág. 48. Ciudad Tomada. Las autodefensas anuncian que pronto controlarán las comunas de Medellín las guerrillas se resisten. La batalla es nocturna y sangrienta. La gente vive amedrentada y aguanta como puede. Nadie los protege.

Revista Semana. Diciembre 23 de 2002. Edición 1.077-1.078. Guerra en las Calles, los colombianos sienten que la guerra se trasladó a las ciudades. ¿Qué hay de cierto en eso? qué tanto han crecido el poder de las guerrillas y autodefensas en las grandes capitales? Pág. 54. Por Alonso Salazar.

Revista Semana. La verificación de la OEA ha sido invisible. En: www.revistasemana.com.co. Conflicto, septiembre 20 del 2006.

Revista Semana. Marzo 26 /2001 El desmadre de los paras: La ofensiva paramilitar se desbordó. Le está ganando a la guerrilla. El gran perdedor es el país. Pág. 24. 1983.

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN INTERNET

Amnistía Internacional. Colombia los paramilitares en Medellín: desmovilización o legalización. En: <http://web.amnesty.org-library-index>, 31 de agosto de 2005.

Boertsjeans, Jos. Una investigación sobre la política del gobierno de Colombia en su lucha contra el Narcotráfico. En: <http://www.let.uu.nl/spaans/tv7/2001/josboertjens.htm#histor>. Noviembre de 2006

Gaitán Daza, Fernando. Multicausalidad, impunidad y violencia: una visión alternativa. Working paper. En: www.uexternado.edu.co. Febrero 14 de 2006, 2:40 p.m.

Ramírez, Iván Darío. Medellín: Los niños invisibles del conflicto social y armado. Children in organiced Armed violence COAV. En: <http://www.coav.org.br/>. Noviembre de 2006.

Rueda de prensa del Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo al término de la reunión de evolución del proceso de desmovilización y reinserción del BCN. Medellín, marzo 4 de 2004. En www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. Jueves 3 de febrero de 2005, 2:40 p.m.

Yarce, Elizabet, Comuna 8: la consigna es no matar. En: www.elcolombiano.com.co/bancoconocimiento/comuna8. 22 de octubre de 2004.

DOCUMENTOS OFICIALES

Alcaldía de Medellín. 2004. Experiencia desmovilización del Bloque Cacique Nutibara AUC.

Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana. Plan de desarrollo de Medellín. 1998-2000. (Versión preliminar).

Alcaldía de Medellín. El futuro de la ciudad metropolitana. Plan estratégico de Medellín y el área Metropolitana.

Alcaldía de Medellín. Medellín Competitiva. Plan de desarrollo 2001-2003. Hacia una revolución de la cultura ciudadana. Medellín, septiembre de 2001.

Alcaldía de Medellín. Programa de Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención, regreso a la legalidad. Presentación. Diciembre de 2006.

Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación, Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Informe de resultados. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, cuarta aplicación, octubre de 2005. pp. 4.

Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación, Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Informe de resultados. Ficha de Percepción Comunitaria FPC, Segunda aplicación. Resumen proporcionado por la Oficina de Paz y Reconciliación.

Alcaldía de Medellín. Programa Paz y reconciliación. Modelo de Intervención 2004.

Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Modelo de Intervención 2004. Presentación Alcaldía de Medellín, diciembre de 2006.

Alcaldía de Medellín. Programa paz y reconciliación. Regreso a la legalidad, 2004. Informe de avance.

Alcaldía de Medellín. Programa Paz y Reconciliación. Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Informe de resultados. Ficha de percepción comunitaria FPC. Tercera aplicación, diciembre de 2005. pp. 2.

CINEP & Justicia y Paz, Noche y niebla, caso tipo No. 2 Comuna 13, la otra versión. Banco de datos de violencia política CINEP & Justicia y Paz, mayo de 2003.

Concejo Municipal de Medellín. Acta # 430 de Junio 9 de 2003.

Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿Una meta viable? ICG Informe sobre América Latina N° 8, 5 de agosto de 2004. p. 5.

Flórez Vélez, Omar. "Propuesta para la convivencia ciudadana en Medellín". En: Consejería Presidencial para Medellín su Área Metropolitana. Medellín: Alternativas de Futuro. Medellín, 1992. p. 21.

Gómez Martínez, Juan. Alcaldía de Medellín. Hecho ya realidad. Balance de una administración actuante. Medellín, Imprenta Municipal, 1990, p. 38-39.

MAPP/OEA. Proceso de paz, CDDR paramilitar (apoyo internacional a la mision de verificación MAPP/OEA en Colombia. Valoración conjunta comisionada por las embajadas de Holanda y Suecia.3 de octubre de 2005. p. 43.

Naranjo Pérez, Sergio. Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo de Medellín, 1995-1997 (Versión aprobada por el honorable Concejo Municipal).

Naranjo Pérez, Sergio. Medellín: una ciudad para la modernidad. Enero de 1995, p. 7.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Evaluación del proceso de desmovilización del BCN. Bogotá, febrero 6 de 2004, p. 2.

Pérez Gutiérrez, Luis, Alcalde Medellín. Compro la Guerra, Alcaldía de Medellín, Medellín, 14 de agosto de 2002.

Plan de Desarrollo para Medellín. Medellín compromiso de toda la ciudadanía. Sergio Fajardo Valderrama. 2003-2007.

Ramos, Luis Alfredo. Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo para la ciudad 1993-1995. 1992, p. 2.

